

Fuera máscaras

el fin del mundo de fantasía



Por Luis Rubio

 Wilson
Center

LA RANA QUE
QUERÍA
HACERSE
BUEY...





...y lo
logró!

Alfredo
EN REFORMA

AGRADECIMIENTOS

Este texto comenzó a formarse en mi mente cuando Andrés Manuel López Obrador asumió, de facto, el control del país, al día siguiente de las elecciones de 2018. Su mandato fue absoluto e inequívoco y los males que pretende atacar son los problemas centrales de México. Mi diferencia con él no radica en su propósito de atender males ancestrales como la desigualdad, la pobreza y la falta de crecimiento, los asuntos nodales del país, sino los medios que ha decidido emplear para lograrlo, así como su propensión para evadir la realidad política y de la globalidad. Es claro, desde el primer día, que no reconoce límites a su capacidad de actuar y modificar la realidad nacional. Esa realidad sin duda tiene que cambiar para que el país pueda romper con un pasado que no conducía a un mayor bienestar de la población, pero cambiar no entraña hacer tabula rasa de todo lo existente, como pretende el nuevo presidente.

De proseguir por el camino que ha adoptado –uno guiado por obsesiones, ocurrencias y agendas que son incompatibles con su propia visión, expresada una y otra vez en sus discursos y libros– López Obrador acabará dándose contra la pared, como tantos de sus predecesores. Mientras el país siga inserto en los circuitos comerciales y financieros del mundo –de las pocas cosas que se han hecho extraordinariamente bien– no hay forma de evadir realidades tangibles e inevitables como las que se derivan del modo de funcionar de los mercados o las decisiones de inversión que realizan empresarios e inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Prácticamente no hay país en el mundo que esté libre de los vaivenes que caracterizan a estos dos grupos de actores y México no será la excepción.

El potencial de alcanzar un desarrollo incluyente que disminuya la pobreza y la desigualdad de México es ingente y lo sería más si se rompe con los impedimentos políticos y sociales –todos intereses lucrando del statu quo– que han mermado y obstaculizado el avance por décadas, si no es que por siglos. López Obrador tiene la excepcional característica de no tener compromiso alguno con el statu quo, lo que le confiere una enorme libertad, y poder, para enfrentar esos obstáculos. Puede ir por este camino o por el que adoptó tan pronto como ganó las elecciones. El primer camino

conduciría a la transformación del país, el segundo a una crisis más, esas que han empobrecido a la población y diezmado su potencial de desarrollo.

Escribí este libro para entender el momento de México de hoy y explicárselo a mis amables lectores. Habré logrado mi objetivo si consigo que con este argumento se avance la comprensión del reto que enfrenta el país para encararlo mejor.

Quisiera agradecer, antes que a nadie más, a Duncan Wood, director de Mexico Institute en el Wilson Center de Washington por su permanente disposición a publicar mis textos. También quisiera agradecer a Edna Jaime por su lectura al texto y por su apoyo incesante. Laurence Pantin realizó una acuciosa y detallada revisión y edición del texto, mejorando sensiblemente el argumento, por lo que estoy en enorme deuda con ella. Le agradezco a Andrés Clarke por la traducción y a Shannon Granville por su extraordinaria edición del texto en inglés. Finalmente, este libro no hubiera sido posible sin el extraordinario trabajo y cuidado del equipo del Mexico Institute y, en particular, de Angela Robertson.

Desde luego, los errores que hayan quedado son solamente míos.

Para el profesor Samuel P. Huntington, el trabajo de un académico u observador no es necesariamente mejorar el mundo, sino decir lo que está sucediendo sin rodeos. Eso implica enfocar hacia asuntos que podrían ser inapropiados para una fiesta, porque generarían incomodidad y silencios entre los invitados. Pero siempre he pensado que el futuro yace en esos silencios, dentro de esas cosas que pocos quieren discutir.

Robert D. Kaplan

Contenido

Fuera máscaras 1

Máscaras y fantasías 9

Las máscaras	10
Las fantasías	11
El fin de la fantasía	13

La elección se decidió en 2014 17

Verdades, mentiras y mitos de las reformas 23

El gran colapso.....	24
La era de las reformas	27
Reformas por falta de alternativa	32
Reformas con resultados contrastantes	34
La simple (pero difícil) opción	38

Más de lo mismo 41

Dos maneras de percibir una misma realidad 45

Carisma ¿para qué? 51

Una nueva lógica.....	54
El mandato y la realidad	56

Un mundo de exclusión 61

Mi propia experiencia.....	63
La revolución que viene	68

Causas y síntomas 73

El ejemplo del TLC.....	78
¿Qué atacar?	80

López Obrador y el poder 87

¿Dónde pondríamos a México?.....	88
Poder ¿para qué?	89

¿Qué hacer? 93

La centralización en la era del conocimiento.....	96
La oportunidad.....	97
Hacia un proyecto incluyente de alto crecimiento.....	99

Un proyecto de inclusión acelerada 105

¿Hacia atrás o hacia adelante? 109

Gobierno fuerte	111
Gobierno ¿para qué?	113
La educación como eje del gobierno	115

López Obrador el estadista 119

Notas 125

Autor: Luis Rubio

ISBN# 978-1-938027-84-0

Diseñado por Kathy Butterfield

Woodrow Wilson International Center for Scholars

One Woodrow Wilson Plaza

1300 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004-3027

www.wilsoncenter.org

Woodrow Wilson International Center for Scholars



PRE



Fuera máscaras

“Camarada: su afirmación es factualmente incorrecta. Sí, así es; pero es políticamente correcta.”

Angelo Codevilla

Fuera máscaras: la pretensión de que todo iba bien y que sólo faltaba llevar a cabo una serie de reformas adicionales resultó ser no más que una farsa. Así lo determinó el electorado de manera masiva, brutal y sin la menor distracción. Se pueden incorporar mil alegatos al veredicto ciudadano, pero el mensaje es clarividente: no es cierto que México anduviera por la senda correcta y no es cierto que sólo faltaran unos cuantos pasos para lograr la tan ansiada transformación. Así lo decidió la última instancia en estas materias: el elector y su voto.

Lo paradójico es que fuera el voto lo que decidiera tan trascendente asunto pues, por años, el ahora gran beneficiario de ese voto se dedicó a desacreditar a las instituciones públicas, esas que le confirieron un triunfo incontestable, en particular el Instituto Electoral y el Tribunal respectivo. Quizá la paradoja lo sea menos, toda vez que, muchos meses después de la elección, quien resultó ganador todavía no reconoce la legitimidad de las instancias electorales que hicieron posible su victoria.

Pero lo que es indudable es el veredicto: con su voto, la ciudadanía acabó con el mito que por décadas había sido un mantra: que México iba avanzando hacia un nuevo estadio de desarrollo. La fantasía de que sólo faltaban “unas cuantas reformas” o unos cambios menores y todo se realinearía para beneficiar al conjunto de la sociedad.

Esta fantasía, que se fue construyendo a lo largo de casi cuarenta años, fue producto de un conjunto de acciones y decisiones, unas más conscientes que otras, que arrojaron mejorías sensibles en algunas regiones del país, por no hablar de sectores enteros de la economía, pero que dejaron marginada a buena parte de la población, mucha de la cual optó en las urnas por quien fue crítico contumaz de las reformas de las últimas cuatro décadas.

El electorado, en forma mayoritaria e incluyendo también a muchos de los beneficiarios de las reformas, se volcó hacia un candidato que propuso una visión distinta, contrastante con el statu quo imperante.

Esas reformas, iniciadas en los ochenta sin mucha ambición pero forzadas por las circunstancias que habían creado doce años de gasto y endeudamiento excesivos e insostenibles (1970-1982), transformaron la estructura de la economía mexicana, convirtieron al país en una potencia exportadora e hicieron posible que vastas regiones del país –notablemente el Bajío y el norte en general– crecieran a tasas casi asiáticas. Sin embargo, a pesar de los extraordinarios resultados, la política económica de las últimas décadas claramente no fue suficientemente incluyente como para que toda la población se beneficiara (al menos de manera directa) y para que se sintiera satisfecha con lo alcanzado.

El país logró tasas de crecimiento bajas, aunque constantes, de alrededor de 2% en promedio que, por mucho tiempo, le parecieron suficientes al establishment. Políticos, empresarios, líderes sindicales y funcionarios podrían haber estado de acuerdo o no respecto al statu quo en lo personal, pero su actuar colectivo fue muy claro: se había alcanzado un equilibrio que resultaba satisfactorio para todos. Es decir, ninguno de ellos estaba dispuesto a alterar el orden imperante en aras de lograr mejores resultados.

En términos políticos, el país vivía de la combinación de dos situaciones que, por mucho tiempo, permitieron sostener el statu quo sin alterar el andamiaje de privilegios y beneficios que, desde la revolución, el sistema le había prodigado a eso que llamé establishment en el párrafo anterior. Por una parte, la migración hacia Estados Unidos redujo la necesidad de resolver problemas ancestrales en México y cuya atención hubiera requerido desmembrar estructuras de poder anquilosadas, pero encumbradas, en sindicatos, gobiernos estatales, empresas públicas y privadas y el ejecutivo federal. La opción de migrar eliminaba la presión sobre el gobierno federal para transformar la educación y preparar a la sociedad mexicana para la era del conocimiento; eliminar mecanismos de protección para la planta manufacturera de antaño que, pese a ser inviable, no deja de sobrevivir; desarrollar la infraestructura para poder competir; y, en una palabra, crear condiciones para generar riqueza y empleos de una manera acelerada y sostenida en todo el territorio. La migración mitigó la necesidad de crear de

empleos y generó una fuente de riqueza, vía las remesas, que transformó a vastas regiones del país.

Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés y TLC en español) resolvió viejos problemas de balanza de pagos, creó una muy exitosa industria de exportación y se convirtió en el principal motor de crecimiento de la economía mexicana. Por su naturaleza legal, el TLC acabó siendo un espacio en el que imperó la estabilidad regulatoria, se elevaron los salarios reales y los empleos adquirieron una perspectiva de largo plazo. La trascendencia política del TLC fue evidenciada en 2009 cuando, en el contexto de la crisis financiera estadounidense, la economía mexicana se colapsó. Más allá de las reglas y procedimientos inherentes al TLC, su esencia es política: constituyó una garantía político-legal de permanencia de las reglas del juego para los inversionistas del exterior. En este sentido, la clave del Tratado no radica en lo que se produce o exporta, sino en el hecho de que los inversionistas cuentan (al menos con el TLC original) con garantías legales y, de facto, políticas, de que el gobierno mexicano no alterará las regulaciones que los afectan ni expropiará empresas sin apearse a procedimientos legales estrictos. Por ello, sin TLC, la economía mexicana no tenía –ni tiene– viabilidad. Esto sólo cambiará el día en que México desarrolle fuentes internas de certidumbre que sean equiparables a las

inherentes al TLC original y, en esto, López Obrador podría hacer una diferencia enorme precisamente porque es crítico de la estrategia económica de la que surgió el TLC.

“...en esto, López Obrador podría hacer una diferencia enorme precisamente porque es crítico de la estrategia económica de la que surgió el TLC.”

La combinación de estos dos factores –migración y TLC– se convirtió en un parapeto, una excusa para no llevar a cabo reformas en todos los ámbitos de la vida política, económica y social del país. Por supuesto que hubo reformas, pero todas ellas se encaminaban a resolver problemas específicos o a atender circunstancias particulares. El ánimo reformador no surgió de una visión de transformación integral del país, como sí ocurrió en otras latitudes del mundo, sino de la búsqueda de soluciones marginales que resolvieran problemas pero no atentaran contra el statu quo.

El hecho tangible es que la sociedad mexicana parecía satisfecha con esa realidad. A pesar de los altibajos electorales a lo largo de estas décadas, la sociedad mexicana pareció aceptar –implícitamente– que la mediocridad era mejor que la alternativa. Quizá esto explique la decisión del electorado, una y otra vez entre 1997 y 2016, por producir gobiernos divididos. Aparentemente, para la ciudadanía, lo importante era que los gobernantes no le hicieran más daño. La opción parecía clara: mejor poderes débiles que soluciones drásticas (o incluso arbitrarias). Esto por supuesto no era óptimo, pero fue una concepción reiterada por la ciudadanía en las urnas.

El mundo de fantasía se comenzó a resquebrajar cuando Donald Trump puso en entredicho los dos elementos que habían sostenido a la economía mexicana y que le habían permitido esas décadas de estabilidad y tranquilidad al establishment. Sus ataques al mexicano, al país, a la migración y al TLC minaban todo el proyecto reformador, no porque éste hubiese consistido en esos dos factores, sino porque, de hecho, en eso se había convertido. Como en el viejo cuento del rey que está desnudo, Trump desarmó la fantasía en que México había vivido y que nadie dentro del establishment mexicano había querido reconocer, aunque muchos lo sabían de siempre, sino hasta el 1ero de julio de 2018. Con el triunfo de Trump, la otrora estabilidad político-económica de México quedó arruinada.

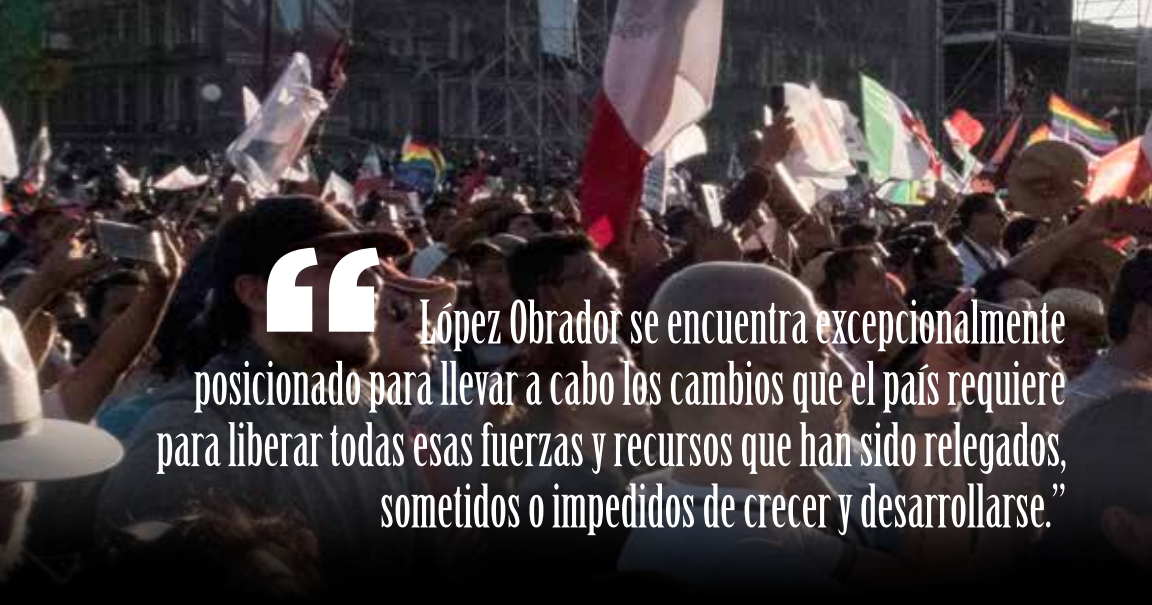
Los candidatos en la contienda presidencial de 2018 nunca entendieron las implicaciones de largo plazo de la presidencia de Trump para México ni la profundidad del enojo y resentimiento que se había acumulado en el país en los últimos años por diversas circunstancias. Simplificando, dos de los candidatos ofrecían “más de lo mismo,” en tanto que el tercero repetía su ya añejo discurso de rechazo a “más de lo mismo.” Ninguno de ellos reparó en el hecho de que todos los vectores de la política mexicana habían cambiado y que ya nunca serían lo mismo: los factores que habían sustentado el crecimiento económico de las últimas décadas y la falta de atención a problemas centrales del desarrollo habían dejado de ser viables. La renegociación del TLC tuvo muchas virtudes y más defectos, pero no fue sino una primera llamada de que la estrategia de facto sustentada en el TLC y la migración ya no podía seguir sin cambios sustantivos. Tarde o temprano, el esquema comercial, el del TLC original o del llamado T-MEC, resultará inoperante y México tendrá que encontrar nuevas respuestas a sus desajustes estructurales: cómo crear condiciones para un crecimiento elevado y sostenido que le dé viabilidad y oportunidades a una sociedad en plena

transición demográfica. O sea, cómo crear fuentes de empleo y riqueza antes de que, por el envejecimiento de la población, el país acabe pobre y viejo.

El voto del 1ero de julio de 2018 cambió todo. Por primera vez desde la era priista, el electorado se volcó clara y decididamente por un candidato y su partido, confiriéndole vastos poderes y fuentes de control. Indudablemente, caben muchas posibles explicaciones para la decisión ciudadana de votar de esta forma, pero el efecto más importante fue el haberle quitado la máscara a la fantasía dominante de que todo iba bien y que no era necesario llevar a cabo cambios radicales. Lo anterior no implica que el electorado que votó por López Obrador coincidiera con su visión sobre cosas específicas, pero sin duda entraña un rechazo al orden existente.

La elección de 2018 fue peculiar por muchas razones. En primer lugar, se dio en el contexto de una amplia reprobación al presidente en funciones, lo que, en un sistema político presidencialista, implica que el corazón de la política había dejado de funcionar. En segundo lugar, el vacío que dejó Enrique Peña Nieto a partir de la matanza de Ayotzinapa en 2014 fue ocupado por el propio López Obrador quien, dominó la narrativa política desde ese instante. Tercero, el candidato del PRI fue controlado de inicio a fin por el propio Peña Nieto, incluso imponiendo a su propia gente en su equipo y empleando las tácticas y estrategias que lo habían llevado a él mismo al fracaso. Cuarto, el candidato del PAN fue atacado de manera interminable en un proceso que inexplicablemente politizó a la justicia y judicializó a la política. En una palabra, visto en retrospectiva, Andrés Manuel López Obrador tenía la elección en sus manos porque todo conspiraba a favor suyo.

El anverso de la moneda es que el triunfo de López Obrador fue más circunstancial de lo que él y sus seguidores quieren reconocer. Las preferencias con las que contaba al inicio del periodo electoral eran de 30%, cifra que ha sido constante en su apoyo desde 2006. El 23% adicional del voto que consiguió está integrado por jóvenes que acudieron a las urnas por primera vez, personas con elevados niveles de educación y ciudadanía urbana de clase media, es decir, un electorado por demás volátil y que, a lo largo de las últimas décadas, ha virado de un partido a otro.



“ López Obrador se encuentra excepcionalmente posicionado para llevar a cabo los cambios que el país requiere para liberar todas esas fuerzas y recursos que han sido relegados, sometidos o impedidos de crecer y desarrollarse.”

Un triunfo de las dimensiones del logrado por López Obrador le otorga enormes poderes para llevar a cabo el proyecto que decida impulsar, pero también le confiere la responsabilidad íntegra sobre su actuar y resultados. Más importante, la contundencia del voto no reduce la complejidad o profundidad de los problemas que aquejan al país ni le permiten evadir los retos estructurales que lo caracterizan.

El país no está organizado para atraer inversión productiva. No cuenta con un sistema de gobierno funcional y efectivo, tampoco con una infraestructura idónea para favorecer el crecimiento acelerado. No permite a la población crear capital humano (es decir, no le da servicios de salud adecuados o una educación apropiada para la era del conocimiento, la información y el mundo digital), no garantiza la seguridad de su población y no cuenta con mecanismos institucionales que le den certidumbre a los ciudadanos, a los inversionistas y a los futuros mexicanos. Como se verá más adelante, los mexicanos elegimos a un presidente cuya carta de presentación es el rechazo al orden institucional existente y que no reconoce, al menos hasta ahora, la complejidad inherente a estos desafíos estructurales.

Los próximos años serán álgidos en México porque ofrecerán la oportunidad de lograr una transformación que sea incluyente, pero también generarán infinitas ocasiones para destruir los pocos avances que sí se han logrado, sin que sean reemplazados con alternativas que pudieran darle viabilidad parcial a la economía (como podrían ser dos aeropuertos poco eficientes en lugar



de uno transformador). Los votantes le quitaron la máscara a la fantasía de que todo iba bien. Ahora le toca a Morena quitarse sus dogmas, propios de una oposición, para comenzar, ya desde la perspectiva de un partido en el gobierno que tiene responsabilidades reales, a ver el mundo como es y no como cree o quisiera que fuera.

López Obrador se encuentra excepcionalmente posicionado para llevar a cabo los cambios que el país requiere para liberar todas esas fuerzas y recursos que han sido relegados, sometidos o impedidos de crecer y desarrollarse. Si en lugar de pretender llevar al país hacia el pasado se aboca a crear las condiciones para que pueda prosperar —es decir, si se dedica a romper feudos, intereses y entuertos que impiden la movilidad social y, en general, un desarrollo acelerado y equitativo— el país podría ser otro, para bien, en un sexenio.

El propósito de este libro es dilucidar la naturaleza del reto, comenzando por las causas del desencanto, seguido de una exposición de la complejidad que caracteriza al mundo en el que está inserto el país y del que no se puede abstraer. Concluye con una propuesta de la manera de asir las oportunidades que podrían transformar al país.



Máscaras y fantasías

Si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar.

Yogi Berra

Los mexicanos somos especialistas en aparentar lo que no somos. Tendemos a erigir máscaras para proteger nuestras verdaderas preferencias y una de esas preferencias ha sido la de no querer reconocer en público, aunque lo sepamos bien, que el proceso de desarrollo del país sufre de problemas nodales. Octavio Paz escribió que “aun en la disputa [el mexicano] prefiere la expresión velada a la injuria:

‘al buen entendedor pocas palabras’. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás. Lejos, también, de sí mismo.”¹

La máscara tiene una razón de ser: quienes vivieron la inestabilidad y casi hiperinflación de los setenta y ochenta ven el presente con bonhomía, no porque las cosas estén perfectas, sino porque estuvieron, y podrían estar, mucho peor. Ante la imposibilidad de lograr que los beneficiarios del statu quo lleven a cabo cambios necesarios para mejorar los prospectos de desarrollo del país, el *establishment* de facto, generalmente de manera inconsciente, prefirió la pretensión de que todo iba bien.

Las máscaras

Según Rodolfo Usigli², el político mexicano ejemplifica el fenómeno de la máscara mejor que nadie: “a falta de un rostro, tiene dos máscaras; porque posee por igual el sentido de la creación y el sentido de la destrucción y los dos libran batallas increíbles en su ánimo”. Esas máscaras responden a intereses y privilegios que han sido el pan de cada día del sistema posrevolucionario, cuyos bisnietos y arrimados (más de los segundos que de los primeros) hicieron suya la lógica revolucionaria, esa que implica, o que pretende, que el ganador adquiere el derecho divino de expoliar y vivir en un mundo de privilegios de manera permanente. Este fenómeno no es exclusivo de México. De hecho, tiende a repetirse en un sistema político tras otro que surgió de movimientos revolucionarios.

Las máscaras permiten esconder el enjambre de intereses y beneficiarios del sistema en la forma de negocios, concesiones y el saqueo del erario. Sara Sefchovich lo describe con claridad: “Nuestros poderosos no podrían mentir si no fuera un código y una práctica socialmente compartidos, socialmente aceptados y firmemente establecidos que permiten que las cosas sean así”³. Aunque las máscaras pudiesen ser algo inconsciente, su función es muy clara: permiten el autoengaño de quienes se benefician del statu quo, a la vez que crean una narrativa que lo oculta. Peor, cuando se acompañan de un discurso nacionalista que goza de credibilidad e, incluso, de hegemonía, hacen posibles vastas diferencias e inequidades sin que nadie las pueda disputar. Hasta que se ponen en duda o son descubiertas como lo que son.

Los políticos viven en su mundo y por muchos años convencieron al electorado de que sus proyectos respectivos eran viables y conducían a un mejor futuro. Así ocurrió en la era posrevolucionaria en que se lograron tasas elevadas de crecimiento y movilidad social y luego, a partir de los noventa, en la era de reformas. Los resultados objetivos de ambas épocas son verídicos, pero los beneficios no fueron generalizados.

Las fantasías

Por muchas décadas, el país vivió un profundo cambio en sus estructuras económicas y políticas, lo que produjo realidades nuevas y contrastantes en todos los planos de la vida nacional: empresas competitivas y empresas relegadas; zonas de prosperidad y regiones rezagadas; libertades políticas y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos; elecciones libres y caciques en los gobiernos estatales; mayor transparencia y moches en el congreso; instituciones autónomas y vulnerabilidad de las mismas. En suma, muchos pasos adelante pero casi igual número hacia atrás: una extraña, y perversa, mezcla de simulación y corrupción, logros y éxitos, todo combinado.

La economía ha probado ser flexible y susceptible a adaptarse a las veleidades de los mercados financieros (como en 2009), pero perviven dos mundos dispares que son evidentes para toda la ciudadanía: un espacio de modernidad y prosperidad en algunas empresas, regiones y sectores, y vastos ejemplos de retraso, falta de acceso e inviabilidad. Lo mismo es cierto, y perceptible, en el ámbito de la justicia, los servicios, el acceso a los beneficios del desarrollo y a quienes toman decisiones, todo lo cual crea una plataforma de profunda desigualdad. La expectativa, desde hace tres décadas, era que la parte moderna avanzaría, incluyendo a la rezagada. Esto no ha ocurrido así: sin duda, lo moderno ha crecido, como ilustra el aumento de las exportaciones, pero lo rezagado no disminuye, no se integra a lo moderno y no hay razones para pensar que la brecha disminuye. Aunque lo moderno sea glamoroso y deslumbrante, la abrumadora mayoría de la población sigue perteneciendo al mundo que se quedó atorado en la economía del pasado y que es poco viable.

En las pasadas décadas, en que además explotó la violencia, se evidenció una corrupción desmedida y, gracias a la ubicuidad de la información y a la presencia de las redes sociales, la percepción de inequidad, además de las desigualdades visibles, crearon una nueva realidad política.

Lo extraordinario de la elección del 1ero de julio de 2018 fue que los mexicanos optaron por quitarle la máscara a esa pretensión implícita de que el país avanzaba por una senda sostenible, por lo que significó, implícitamente, un “ya basta” a las simulaciones.

La abrumadora mayoría de la población era bastante consciente del gatopardismo del discurso político en que “todo cambiaba para permanecer igual”. Las promesas de transformación y modernidad no eran necesariamente falsas, pero su avance fue mucho más modesto y limitado a lo prometido, además de acotado a ciertas regiones y actividades. Al decir NO al statu quo, los votantes evidenciaron, como en el cuento de Hans Christian Andersen, que el rey está desnudo.

La narrativa de que el país avanzaba no era errada, pero las percepciones de muchos mexicanos eran distintas y, en todo caso, los beneficios no llegaban a toda la población. Especialmente para los jóvenes, que no vivieron ni conocieron la era de las crisis, la inflación y las penurias económicas, el México de hoy resultaba insuficiente y, sobre todo, contrastante con la retórica y el mantra político de que todo iba bien. Para quienes no se sentían ganadores, aunque muchos lo fueran, los rezagos o, al menos, los contrastes, resultaron excesivos. Más aún, el México que se quedaba atrás no tenía para donde ir: el proyecto modernizador, en todas sus variantes, nunca contempló un mecanismo que le permitiera ir avanzando. En este sentido, resultó una fantasía.

Lo paradójico del momento que vivimos es que el problema no radica en el proyecto modernizador en un sentido general (lo que debiera ser), sino en una pobre implementación que protegió más al statu quo de lo que avanzó el proyecto. La consecuencia fue que el contraste entre lo deseado y lo logrado acabó siendo enorme. Lo importante aquí es que los países en la actualidad no se distinguen por la dirección del desarrollo, porque no hay alternativas: las naciones que no compiten y que no generan mejores niveles educativos se deterioran en el mundo digital. La verdadera competencia se encuentra en la velocidad del avance y es ahí donde México se rezagó precisamente porque los políticos y, en general, el *establishment*, prefirieron la comodidad del statu quo al logro de los objetivos que planteaba su propia narrativa.

Ahora bien, México vive una desconexión profunda entre las propuestas y la narrativa que llevaron al resultado de la elección presidencial y lo que el país requiere para lograr su desarrollo. La ciudadanía le confirió a Andrés Manuel López Obrador un mandato amplio sobre una propuesta que es más visión que acción concreta, más planteamiento político que un proyecto de gobierno. Una posibilidad es que los votantes vieron en López Obrador la solución a la piedra filosofal que, por décadas, si no es que por siglos, ha

venido buscando el país. Otros encontraron en él algo distinto a lo que él mismo propuso; y también hay muchos votantes, dentro de su propio movimiento o como ciudadanos independientes, quienes creyeron que votar por él era la única forma de poder romper con la inercia en que había caído el país desde hace décadas. Cualquiera que haya sido la motivación, los votantes le quitaron la máscara a toda una visión y a una narrativa del mundo que había implantado el *establishment* mexicano, un logro no menor, toda vez que éstas dominaron el discurso y la perspectiva por décadas. Esta nueva realidad arroja dos interrogantes elementales: primero, ¿qué implicaciones podría tener el hecho de quitarle el velo, descubrirle la cara al sistema?; y, segundo, ¿servirá eso para cambiar al sistema político tradicional?

El fin de la fantasía

Don Quijote vive sus aventuras en las páginas de la gran obra de Cervantes pero, al recobrar la memoria, vuelve a ser Alonso Quijano; en el proceso de “dequijotización,” Alonso se rebela contra las novelas de caballería que le habían hecho perder la razón, viéndolas como la causa de sus problemas. Cuando Sancho le habla de Dulcinea, Alonso dice que ya no le hable más de ellas, porque eran parte de sus fantasías. De manera similar, pero en el mundo real, más de la mitad de los mexicanos se rebeló contra lo que percibía como una novela igualmente fantasiosa.

El problema, como escribió Samuel Johnson, es que “se puede tener por compañera a la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón”. Y la razón en la era digital llama a privilegiar la construcción de un futuro basado en el conocimiento y la creatividad, pues sin ellos es imposible el éxito en esta era, muy distinta a la industrial de mediados del siglo XX. Es aquí donde quizá López Obrador debiera reparar sobre sus opciones hacia adelante; el tiempo importa y hace toda la diferencia: lo que no se construye hoy, se pierde y, en la era de la ubicuidad de la información, si otros corren y nosotros nos quedamos parados, en efecto estamos retrocediendo.

La gran oportunidad que tiene en sus manos Andrés Manuel López Obrador es exactamente la contraria a la que contempla: radica no en cancelar las reformas que ha denostado por décadas, sino en hacerlas políticamente posibles y socialmente aceptables. Introduciendo mecanismos

de compensación y adecuación, podría lograr lo que los políticos de antaño resultaron incapaces de alcanzar: hacer posible que la ciudadanía, toda, tenga acceso a la educación más avanzada para tener la oportunidad de competir y ser parte del mundo exitoso. Los terrenos de la batalla no son los que escoja el nuevo gobierno, sino los que hagan posible que el conjunto de la población salga avante. La agenda está puesta; lo que se requiere es el

“Algo similar puede decirse del mal uso de los recursos petroleros: en lugar de convertirse en fuente de financiamiento para la construcción del futuro, se emplearon para el gasto corriente, desperdiándolos sin más.”

liderazgo que la haga posible. El gran avance es que se acabó la fantasía. El gran reto radica en construir a partir de esa nueva realidad política.

Ésta abre la oportunidad de concluir la transición que nunca se logró: a partir de 1996, con la reforma

electoral de ese año, México resolvió el problema de acceso al poder, pero no cambió la estructura política ni sus beneficiarios. La gran oportunidad ahora radica en construir un nuevo sistema institucional. Aunque pocas cosas parecerían más contrarias a la naturaleza y preferencias del nuevo presidente, eso es lo que México requiere y sería el legado más importante que le podría aportar.

Si uno observa el infinito número de oportunidades perdidas y desperdiciadas que han caracterizado al país a lo largo del último medio siglo, la lógica sugeriría que ésta será otra oportunidad abandonada. Sin embargo, no sobra recordar algunos episodios que, de haber sido resueltos de una mejor manera, habrían contribuido a transformar el país desde hace tiempo. Por ejemplo, parece evidente, en retrospectiva, que el movimiento estudiantil de 1968 no sólo debió haber acabado distinto, sino que constituía una oportunidad de oro para comenzar un proceso de gradual construcción institucional. Algo similar puede decirse del mal uso de los recursos petroleros: en lugar de convertirse en fuente de financiamiento para la construcción del futuro, se emplearon para el gasto corriente, desperdiándolos sin más. La elección de 2000 en la que fue derrotado el PRI fue una oportunidad única para iniciar un proceso negociado de realineamiento político. En lugar de ello, constituyó el inicio de la era de parálisis y polarización que sigue hasta nuestros días. Las reformas del sexenio

pasado pudieron haber sumado a toda la población, pero sirvieron para profundizar la corrupción y aislar al gobierno.

Fuera del ámbito gubernamental, el ascenso y desaparición del movimiento zapatista ilustra una característica más de lo nacional que de nuestra naturaleza política. La dirigencia zapatista tuvo todo en sus manos para convertirse en una fuerza política institucionalizada, representativa de los indígenas mexicanos. En lugar de ello, dice Joaquín Villalobos, “se los comió la vanidad y la ideología hasta que dejaron de ser moda mediática y se volvieron irrelevantes”.⁴

El país ha gozado de extraordinarias oportunidades, pero tiene una excepcional propensión a desperdiciarlas, todo ello en aras de preservar el statu quo. Al menos, ese ha sido el resultado de la incapacidad para asir las oportunidades y convertirlas en un proceso de construcción intencional del futuro.



Poza Rica Veracruz, Mexico. streets Francisco I. Madero and Av. Central Oriente, Colonia 27 de Septiembre. 02-20-19.



La elección se decidió en 2014

El comienzo es la parte más importante del recorrido.

Platón

Se debe comenzar por el principio, por la elección que cambió la historia reciente del país. Andrés Manuel López Obrador no sólo ganó la elección, sino que arrasó. Existe la propensión muy natural a pensar que los números y las causas del resultado son evidentes y que no requieren mayor análisis. Sin embargo, es imperativo comprender lo que ocurrió para poder evaluar las posibilidades y oportunidades hacia adelante.

Desde su Independencia, México ha gozado de dos periodos de elevado crecimiento con estabilidad política y social: el porfiriato y las décadas del PRI duro, entre los cuarenta y el fin de los sesenta. El común denominador de ambas eras fue la centralización del poder y el control vertical que el presidente ejercía. Ambas fueron exitosas por un rato, aunque las dos se derrumbaron, cada una por sus propias razones y circunstancias. Pero el recuerdo del periodo exitoso de cada una de ellas dejó una estela de memorias y mitos a las que generaciones posteriores se referían con nostalgia. Es posible que el retorno del PRI al gobierno en 2012 haya sido producto de la expectativa que se reconstituiría la vieja capacidad de gobernar que muchos electores añoraban.

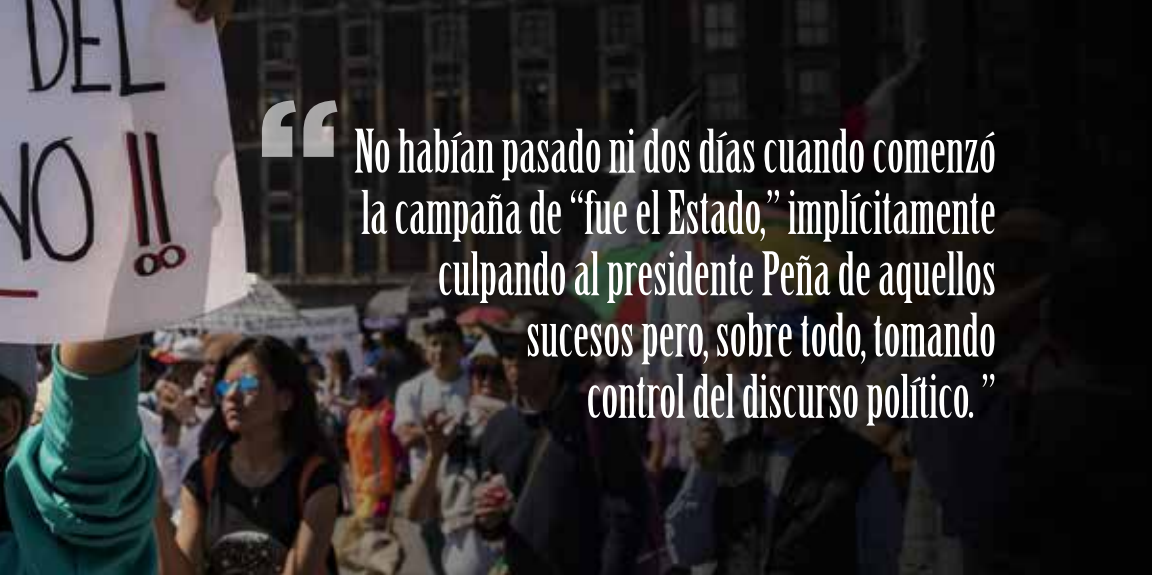
El arribo, casi monárquico, de Peña a la presidencia y su caída, esa sí común y corriente, cambiaron la naturaleza de la política mexicana. Se colapsaron el mito y la añoranza y, en retrospectiva, se colapsó el PRI, parte del cual se mudó a Morena. Sin embargo, el mayor cambio no fue profundo ni estructural, sino meramente circunstancial: Peña prometió el retorno a la estabilidad y el crecimiento pero entregó corrupción e incompetencia. Su promesa de recrear un pasado idílico resultó falsa e insostenible.



Más allá de la imposibilidad de recrear el pasado, algo a lo que sin duda también se enfrentará el nuevo gobierno, la naturaleza presidencialista del sistema político mexicano sigue estando vigente. Esto se puede apreciar en dos momentos: uno, en la “desaparición” del presidente Peña como factótum político a partir de los sucesos de Ayotzinapa y, el otro, en la elección de Andrés Manuel López Obrador.

En un país eminentemente presidencialista, con instituciones débiles y poco efectivas, la ausencia del presidente como conductor de los asuntos nacionales tiene consecuencias. Por algunos años –entre 1997 y 2018– el electorado prefirió presidentes débiles con gobiernos divididos (al no conferirle una mayoría absoluta en las cámaras legislativas al presidente del momento), pero eso cambió en 2018. Hay muchas posibles explicaciones para el cambio de ánimo del electorado, pero una sin duda es que el presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desapareció del mapa después de los asesinatos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.

De manera inexplicable, Peña Nieto no tuvo capacidad –o disposición a– responder a los asesinatos de los jóvenes en el estado de Guerrero. En lugar de actuar, optó por enconcharse y abdicar su función y responsabilidad de ejercer el liderazgo que tradicionalmente se ha asociado con los presidentes mexicanos. En retrospectiva, buena parte del resultado electoral de 2018 se sembró a partir de ese 26 de septiembre de 2014.



“ No habían pasado ni dos días cuando comenzó la campaña de “fue el Estado,” implícitamente culpando al presidente Peña de aquellos sucesos pero, sobre todo, tomando control del discurso político.”

La contienda específica tuvo lugar en 2018, pero su devenir se remonta al inicio del siglo, cuando el hoy presidente ganó una elección relativamente apretada para el gobierno del Distrito Federal. Es evidente que el proyecto de López Obrador inicia en ese momento, justo cuando comenzó su campaña, dos veces fallida, hacia la presidencia. La tercera fue la vencida, pero López Obrador no la dejó al azar. En esta ocasión, López Obrador construyó una estrategia estrictamente apegada a los hechos y circunstancias, dominando cada momento del proceso.

Por supuesto, la elección presidencial pudo haber evolucionado de diversas maneras, pero la sucesión de acciones, inacción y circunstancias a partir de entonces acabó determinando el resultado. Veamos: en primer lugar, el hoy presidente tomó control de la narrativa política a partir de ese momento. No habían pasado ni dos días cuando comenzó la campaña de “fue el Estado,” implícitamente culpando al presidente Peña de aquellos sucesos pero, sobre todo, tomando control del discurso político. Desde luego, la corrupción evidenciada en la famosa “casa blanca” y otros casos similares crearon el entorno en que un ataque contra la corrupción se tornó fácil y natural. En este sentido, la campaña, lanzada por el equipo de López Obrador, tuvo el efecto de convertir a la corrupción en el único tema político relevante en el país. En adición a lo anterior, esa campaña convirtió al presidente Peña en un ente inexistente, además de tildarlo de incapaz.

La campaña alentada a partir de Ayotzinapa no nació en ese momento. Semanas antes, alumnos del politécnico habían comenzado un movimiento que fue recibido “en mangas de camisa” por el secretario de gobernación. Ya en ese momento se advertía que existía una estrategia de búsqueda de oportunidades para arrebatarle al gobierno el control del discurso político. Ayotzinapa se convirtió en el *casus belli* que los estrategas de López Obrador estaban buscando. Lo extraordinario fue la forma en que Peña Nieto cedió el liderazgo y la narrativa sin más, algo que se hizo más pronunciado luego de la elección.

El entorno político fue dominado por la narrativa de López Obrador a partir de 2014, pero aún al inicio de 2018, el año de los comicios, su candidatura reunía las preferencias de sólo 30% de los votantes, y aunque acumulaba la tasa de intenciones de votos más alta, no tenía garantía alguna de poder ganar. La gran pregunta es qué ocurrió en los meses subsecuentes.

Aunque López Obrador siempre estuvo arriba en las encuestas, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, estuvo “a tiro de piedra” en más de un momento, con posibilidad, al menos hipotética, de ganar la elección. Sin embargo, para julio de 2018 la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de más de 30 puntos porcentuales.

Anaya nunca tuvo una estrategia clara. Por su personalidad un lobo solitario, alienó a buena parte de los liderazgos panistas tradicionales, careció de estrategias profesionales que lo asesoraran y fue incapaz de sumar a las bases del partido. Su principal activo acabó siendo el hecho de que no era el candidato del PRI y, por lo tanto, la única opción para muchos frente a López Obrador. Su gran pasivo fue el conflicto en que incurrió con Peña Nieto, que se tradujo en una serie interminable de ataques retóricos y judiciales que no sólo minaron su campaña, sino que le obligaron a defenderse de manera sistemática, haciéndole imposible cultivar votos entre los electores. Con Anaya se evidenció el que quizá acabe siendo el peor legado de Peña: la judicialización de una campaña electoral, pues abrió una caja de Pandora que quizá nunca más se pueda cerrar.

Por su parte, el PRI optó por un candidato extraordinariamente versado en los asuntos del Estado, pero sin experiencia política y sin militancia priista. El sólo hecho de nominar a un candidato que no era miembro del partido constituía un reconocimiento explícito del deterioro en la

imagen y credibilidad del partido. La decisión de nominar a un candidato externo ofrecía, en la lógica prevaleciente, la oportunidad de atraer votantes no identificados con el PRI. Sin embargo, la campaña fue organizada y dominada por el propio Peña Nieto, quien impuso sus criterios y a su gente, desde el coordinador de la campaña hasta el equipo de estrategia y comunicación. Lo más sorprendente fue que la campaña hizo suyos los principios, premisas y estrategias que habían fracasado en el gobierno de Peña, garantizando con ello su inviabilidad. De la misma manera, luego de nominar a un candidato que no era militante, se le forzó a actuar como si fuera un viejo miembro del PRI, lo que alejó tanto a los priistas como a los no priistas.

La campaña de 2018 fue dominada por las torpezas de Enrique Peña Nieto y la astucia de Andrés Manuel López Obrador. El primero nunca entendió la dinámica del México (o del mundo) del siglo XXI, lo que le llevó a tomar decisiones que tuvieron el efecto de disminuir tanto a la candidatura de su propio partido, como a la del PAN. En ambas instancias, el actuar del presidente saliente llevó a que la contienda se concentrara en López Obrador, quien tuvo la habilidad de mantenerse por encima de la disputa entre los otros candidatos y beneficiarse de los errores de los actores a su derredor.

López Obrador ganó con 53% del voto, pero su base de apoyo histórica es de aproximadamente 30%. Él ha hecho gala de la cifra alcanzada en la elección, pero no hay que perder de vista que el 23% adicional de votos que logró son fundamentalmente de ciudadanos jóvenes, los llamados “millennials,” y ciudadanos con elevados niveles de educación, dos grupos que son por definición volátiles en sus preferencias político electorales. Es decir, el nuevo presidente ganó de manera contundente, pero en la era de la ubicuidad de la información, se tendrá que ganar su legitimidad todos los días y eso no ocurrirá mediante consultas amañadas sino con acciones que ganen la confianza de los ciudadanos, sean trabajadores, ahorradores, empresarios o inversionistas.



BANOF

Verdades, mentiras y mitos de las reformas

Sólo hay un tipo de choque peor que el totalmente inesperado: el esperado para el cual uno se ha rehusado a prepararse.

Mary Renault

El sistema político y económico que se construyó a partir del fin de la gesta revolucionaria había dado de sí, hasta acabar colapsado. Por un lado, el modelo de sustitución de importaciones funcionaba gracias a la exportación de granos y productos mineros, que financiaban la importación de maquinaria, equipo y materias primas. Sin embargo, a mediados de los sesenta desaparecieron los excedentes de granos (parte por la baja productividad agrícola y fundamentalmente por el crecimiento poblacional), lo que implicó menos exportaciones. A partir de ese momento comenzó un debate dentro del gobierno sobre la necesidad de modificar el modelo económico para evitar una eventual crisis de balanza de pagos. En su esencia, la propuesta del sector económico del gobierno consistía en una apertura moderada y gradual que, sin presiones, fuera incentivando el crecimiento de un sector exportador y la elevación de la productividad de la economía en general, ambos requisitos indispensables para crear riqueza y elevar el ingreso de la población.

Por otro lado, el movimiento estudiantil de 1968 evidenció el nuevo tipo de demandas que emergían de la sociedad y para las cuales, como mostraron los trágicos sucesos del 2 de octubre de aquel año, el sistema político no tenía capacidad de respuesta. El movimiento estudiantil desató otra polémica del gobierno, ésta dentro del ámbito de la secretaría de gobernación, sobre la

mejor manera de lidiar con las demandas que la nueva realidad política había desatado.

El gran colapso

Muy pronto, las dos circunstancias –las nuevas problemáticas económicas y los nuevos factores políticos– se convirtieron en disputas sobre la sucesión presidencial. Con el triunfo de Luis Echeverría como candidato para la presidencia (1970–1976), la noción de una reforma económica gradual pasó a segundo plano, en tanto que la atención al nuevo desafío político cobró primacía. Los siguientes doce años serían un experimento en el uso del gasto público como herramienta para atender problemas políticos, lo que, al final del día, arrojó una sociedad más polarizada, una economía no competitiva y una crisis financiera.

En el verano de 1982 el gobierno mexicano se encontró con que no podía pagar el servicio de su deuda. Aunque los gobiernos, en contraste con las empresas, nunca quiebran en el sentido estricto, ya que no pueden ser incautados por sus acreedores, la llamada “bomba de deuda mexicana” de 1982 fue su equivalente. No fue sólo que el gobierno se encontró ante un “problema de caja”, como lo llamó el entonces secretario de hacienda, sino que todo el modelo de desarrollo del país se había colapsado. Se había desmoronado la noción misma de que el gobierno puede financiar el crecimiento de la economía, así fuese con deuda externa empleada de manera improductiva. En 1982 el país se encontró con que tenía que redefinir toda su estrategia económica.

El colapso financiero de 1982 tuvo consecuencias directas e inmediatas así como trascendentales y de largo plazo. En lo inmediato, el gobierno saliente de José López Portillo optó por tratar de desviar la atención por medio de un acto histriónico y mediático en la forma de la expropiación de los bancos, decisión que en sí misma cambió el panorama político del país, toda vez que generó una profunda desconfianza en la forma de proceder del gobierno, sentimiento que sigue siendo el factor distintivo en la toma de decisiones económicas de toda la población y, particularmente, de los empresarios e inversionistas. Pero una vez pasada la inauguración del presidente Miguel de la Madrid, el problema financiero y cambiario tuvo que ser encarado de inmediato, pues el país se encontraba ante la

imposibilidad de importar incluso los insumos para bienes fundamentales, como son focos, pasta de dientes y otros similares.

La estrategia seguida por el gobierno de de la Madrid partía del principio implícito que los dos gobiernos anteriores se habían excedido en su estrategia de financiamiento del gasto público, por lo que todo lo que se requería era retornar a los criterios de administración económico-financieros que habían normado el comportamiento del gobierno en las décadas previas. Con base en esta premisa, el gobierno se abocó a disminuir los excesos en el gasto público, negociar con los acreedores, desincorporar empresas estatales marginales y crear condiciones para recobrar la confianza de ahorradores, inversionistas y ciudadanos en general. Muy pronto, sin embargo, resultó evidente que era imposible reconstruir el mundo de los sesenta.

Mientras México vivía la lujuria y el dispendio de la era de Echeverría y López Portillo, el resto del mundo se había transformado. En 1973, por ejemplo, los países árabes iniciaron un boicot petrolero que tuvo el efecto de elevar dramáticamente los precios del petróleo; para un país como México, que encontraba incipientes recursos petroleros, ésta era una gran noticia porque permitía soñar con soluciones fáciles -dinero venido del cielo o, en este caso, del subsuelo- sin tener que llevar a cabo transformación alguna. De hecho, la promesa de recursos petroleros abundantes en ese momento sirvió para nutrir la noción de que se podía contratar deuda externa de manera ilimitada, a ser pagada por futuros flujos de ingreso petrolero que, luego, no se materializaron, al menos no en el plazo anticipado. Sin embargo, para países como Japón, carentes de recursos petroleros, el impacto del incremento en el costo del preciado líquido tuvo el efecto de provocar una revolución en la forma de producir bienes industriales.

En la etapa de la posguerra, Japón se había industrializado de manera similar a otras naciones desarrolladas, construyendo plantas manufactureras en las que llegaban materias primas por un lado y salían productos elaborados por el otro. Su respuesta al súbito incremento en los precios del petróleo llevó a repensar ese modelo y la respuesta que dio transformó a la industria a nivel mundial.

Los japoneses reorganizaron la forma de producir a partir de dos principios esenciales: primero, concentrarían su producción de manera funcional, es decir, en lugar de producir, por decir, cien mil automóviles anuales

completos en una sola planta, dividieron su producción en unidades distintas, en cada una de las cuales se producirían partes del automóvil: un millón de cajas de velocidades en una planta, un millón de monoblocs en otra y así sucesivamente. Esa división funcional, basada en la especialización de la producción, permitió realizar economías de escala de una manera vertiginosa, reducir los errores en el proceso productivo y, por lo tanto, elevar la calidad y reducir costos. El segundo principio de la reorganización consistió en la localización de las diversas unidades de producción con un criterio geoestratégico: cerca de las fuentes de materias primas, de los mercados finales, de la disponibilidad de recursos como mano de obra o de *clusters* de productores que se complementaban.

“...porque estábamos concentrados en lo que López Portillo denominó como la “administración de la riqueza,” todo el panorama económico mexicano tendría que ser reconcebido. ”

El efecto de la reorganización que llevaron a cabo los japoneses fue triple: por un lado, los convirtió en competidores formidables en todos los mercados del mundo, tanto por sus precios competitivos como por la excepcional calidad de sus productos. Un

segundo efecto fue que provocaron la competencia por la instalación de sus unidades productivas en todo el mundo. Finalmente, su mayor impacto de largo plazo fue el de sacar del mercado a todos los productores tradicionales que, en las nuevas circunstancias, eran incapaces de producir a precios y con calidad competitivos.

Las siguientes décadas serían testigo de dos procesos: por un lado, la reorganización de la producción en otras naciones y empresas para empatar las ganancias de costos de los nipones; y, por el otro, la creación de interminables oportunidades para que nuevas empresas se convirtieran en proveedoras de partes y componentes para las empresas automotrices, electrónicas, químicas y demás que se reorganizaban. Así nacieron las cadenas de producción integradas que hoy son la principal fuente de exportaciones —y crecimiento— en la economía mexicana.

Aunque los mexicanos no lo supimos en ese momento porque estábamos concentrados en lo que López Portillo denominó como la “administración de la riqueza,” todo el panorama económico mexicano tendría que ser reconcebido. La nueva realidad industrial creada por las empresas japonesas sacaba de mercado a los productores prototípicos mexicanos, a la vez que abría oportunidades excepcionales para atraer la instalación de plantas japonesas y de otras nacionalidades en nuestro territorio. A los mexicanos nos tomó muchos años comprender lo primero y resolver lo segundo.

Las reformas mexicanas comenzaron a mediados de los ochenta cuando resultó evidente que el problema que había visto la luz en 1982 en la forma de una crisis financiera no se podía resolver con acciones meramente financieras. México requería una reforma profunda en su forma de conducir los asuntos económicos y de producir para poder generar riqueza en el nuevo mundo que hacía su aparición en los ochenta. Es decir, si México quería recuperar su capacidad de crecimiento económico, tendría que emprender cambios mucho más profundos de los contemplados al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid.

LA ERA DE LAS REFORMAS

Los años de lujuria y excesos fiscales a lo largo de los setenta habían llegado a su fin con la estruendosa quiebra del gobierno mexicano. La crisis de deuda de 1982 constituía el final de una era convulsa, compleja y desquiciante de la economía y de la sociedad. Con sus excesos fiscales, las administraciones de Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) habían dado fin al periodo de alto crecimiento y evolución social y política posrevolucionario y, sin proponérselo, forzaron al país a dar un profundo viraje.

Fue a partir de ese momento, ya sin opciones o alternativas, que comenzó la era de las reformas económicas. Las circunstancias las habían hecho inevitables.

La primera etapa del proceso de reformas, a mediados de los ochenta, se proponía restaurar los equilibrios macroeconómicos que se habían

perdido al inicio de esa década, recuperar la capacidad de crecimiento de la economía mexicana y sentar los cimientos para un rápido crecimiento de la productividad. En un principio, las reformas fueron más que modestas y no buscaban otra cosa sino retornar a la estabilidad que había reinado en las décadas anteriores a la llamada “docena trágica” de Echeverría y López Portillo. En esa etapa se privatizaron algunas empresas propiedad del

“Los dos espacios en que su actuar resultó fallido son, primero, aquellas áreas de regulación y subsidio que protegen, hasta la fecha, a todo el sector manufacturero viejo; y, segundo, los ámbitos regionales y estatales que, por condicionantes políticas y sociales, hacen imposible el progreso de la población. ”

gobierno que no eran consideradas esenciales y se ajustaron las cuentas fiscales. Sin embargo, poco a poco resultó evidente que el pretendido retorno era imposible.

El mundo había cambiado en la década en que México se ensimismó. La idea de seguir sustentando el crecimiento económico en el modelo de sustitución

de importaciones, que había caracterizado al país desde los años cuarenta, resultaba absurda. La planta industrial era en buena medida vieja y obsoleta y requería una transformación radical; el país precisaba un giro profundo en su forma de financiar el desarrollo e incorporar nuevas tecnologías tanto en la manera de producir como en los productos mismos. Es decir, se necesitaba inversión “fresca,” sobre todo extranjera, que revolucionara a la industria mexicana con nuevas tecnologías. Además, un problema que ya se había identificado desde mediados de los sesenta era que el país requería producir bienes competitivos en precio y calidad a fin de satisfacer a consumidores cada vez más demandantes y generar divisas para las necesidades de una economía pujante.

Así es cómo fue conformándose lo que podría denominarse la segunda etapa de las reformas, que comenzó de manera pausada en un principio, para luego acelerarse al final de la década de los ochenta. La gradual liberalización de la economía mexicana, iniciada en 1985 con la apertura a las importaciones (esencialmente la eliminación del requisito de contar con un permiso para



poder importar y su substitución por aranceles), seguida por la incorporación del país al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) constituyeron cambios nodales para la estructura económica del país. Sin embargo, en contraste con otras naciones que también se reformaban en aquellos años (España, Corea del Sur, Taiwán, Colombia, Chile, cada una en su ritmo y circunstancia), en México no existió un plan preestablecido para el proceso reformador.

En nuestro país las reformas fueron contempladas como un mal menor, como un medio para resolver un problema específico y no como un proyecto transformador integral. Mientras que las naciones mencionadas en el párrafo anterior se abocaron a una transformación integral, en México las reformas se concibieron como una forma de evitar un cambio político, o sea, para que el viejo “sistema” político pudiese preservarse en el poder con todo lo que eso implicaba para sus beneficiarios dentro y fuera del gobierno.

De esta manera, el proceso reformador nació con profundas contradicciones pues fueron, en casi todos los casos, ambiciosas, pero limitadas: ambiciosas en cuanto a que habían sido concebidas por un grupo de técnicos expertos que pretendían transformar la economía de manera integral; pero limitadas toda vez que el alcance de las mismas se circunscribía a lo que era políticamente factible y que no amenazaba a intereses del *establishment* político, empresarial y sindical del país.

“En lugar de constituir un motor de crecimiento, ese sector manufacturero constituye un lastre para el crecimiento de la economía...”

Las reformas se proponían cambiar la estructura económica del país para crear condiciones para su crecimiento acelerado. Actuando dentro de los límites impuestos por los políticos, los técnicos

modificaron las estructuras fiscales y las regulaciones que condicionaban el actuar del sector privado, procurando incentivar el crecimiento de la productividad. Los dos espacios en que su actuar resultó fallido son, primero, aquellas áreas de regulación y subsidio que protegen, hasta la fecha, a todo el sector manufacturero viejo; y, segundo, los ámbitos regionales y estatales que, por condicionantes políticas y sociales, hacen imposible el progreso de la población.

Con esos criterios, ocurrieron cosas como las siguientes: A) las privatizaciones de empresas como Teléfonos de México se contemplaron como medios para elevar ingresos para el erario, no para mejorar el bienestar de los consumidores del servicio o para detonar el crecimiento de la industria, justo cuando comenzaba la revolución de las comunicaciones que hemos vivido en las pasadas décadas. Fue hasta hace sólo cuatro años que la reforma de las telecomunicaciones resolvió aquel entuerto, veinte años después. Algo similar ocurrió con los bancos, donde también privó el criterio del ingreso fiscal sobre la estabilidad del sistema bancario, lo cual, con la crisis de 1994-1995, probó ser desastroso. B) A pesar de que se llevaron a cabo múltiples inversiones en carreteras e infraestructura, por muchos años México fue notable por la carencia de gasoductos, que son el “alma” de la industria moderna en todo el mundo; la razón fue que un político era dueño de las “pipas” y tuvo el poder suficiente para impedir que se construyeran gasoductos que le competieran. C) La economía mexicana había estado protegida de las importaciones por décadas, circunstancia que había favorecido el crecimiento de una planta manufacturera poco eficiente y productiva; la liberalización de las importaciones revolucionó a la industria mexicana pero no creó mecanismos que facilitaran la adaptación de las empresas a la nueva realidad competitiva: fue un proceso de “sálvese quien pueda,” lo que inevitablemente favoreció a algunas empresas medianas y grandes, que contaban con fuentes de información y acceso que les permitieran comprender la naturaleza del reto y actuar frente a éste. La

mayoría de las empresas, en términos numéricos, nunca tuvo oportunidad de subsistir en el nuevo entorno, aunque, gracias a mecanismos de subsidio y protección arancelaria, muchas sigan existiendo, con frecuencia en condiciones por demás precarias. Finalmente, consecuencia de lo anterior, D) se preservaron (y preservan) múltiples regulaciones y subsidios que protegen a una planta manufacturera vieja y anquilosada. La lógica política que yace detrás de esa manera de actuar es evidente, toda vez que esa industria constituye la fuente de empleo de cientos de miles de mexicanos; sin embargo, las consecuencias de ese actuar son extraordinariamente onerosas y se complican día a día. En lugar de constituir un motor de crecimiento, ese sector manufacturero constituye un lastre para el crecimiento de la economía; le impide crecer a las empresas o adquirir tecnología; no tiene acceso a financiamiento formal y, por lo tanto, no tiene futuro⁵.

Cada uno de estos ejemplos ilustra distintas facetas del proceso reformador que ha caracterizado al país y explica sus limitaciones. Como ya lo apunté, las reformas se contemplaron como un medio para preservar al statu quo y no como un vehículo para la transformación integral del país. La diferencia entre ambas visiones es radical y constituye buena parte de la explicación del desencanto ciudadano que se fue acumulando a lo largo de los años y que se manifestó de manera tan contundente en 2018.

Las reformas comenzaron siendo muy populares: las encuestas al inicio de los noventa le conferían un altísimo nivel de aprobación al presidente y a las reformas que había emprendido. Sin embargo, la crisis de 1994-1995 fue devastadora para miles de familias mexicanas. Además, la corrupción que se evidenció en esa crisis, particularmente en la forma en que se habían vendido los bancos a personas sin experiencia ni capital, tuvo el efecto de desacreditar no sólo a la administración que había enarbolado las reformas, sino a la noción misma de reformar.

Por el lado político, las reformas tuvieron el efecto de, poco a poco, liberar fuerzas hasta entonces desconocidas. La liberalización de importaciones y la eliminación de requisito de permisos para importar, exportar e invertir cambió la relación entre los empresarios y el gobierno y entre ambos con los sindicatos. La sucesión de reformas políticas profesionalizó la administración electoral y llevó a partidos de la oposición a gobernar cada vez más estados, además de lograr una amplia presencia en el poder legislativo. Las organizaciones no gubernamentales encontraron un espacio fértil para

proponer soluciones alternativas a problemas ancestrales, evidenciar abusos en materia de derechos humanos, forzar al gobierno, a todos niveles, a responder ante la ciudadanía por el uso de los recursos públicos, la falta de soluciones o la desigualdad en el acceso a los beneficios del desarrollo. En suma, el entorno político nacional se fue transformando, creando condiciones que, en retrospectiva, fueron cruciales para el resultado electoral de 2018.

De esta manera, a partir de mediados de los noventa, las reformas han ido a contracorriente de los procesos políticos, haciendo cada vez más costosa la aprobación de las mismas. Aunque las reformas prosiguieron, con especial ímpetu en la administración de Peña Nieto (2012-2018), su legitimidad fue disminuyendo. Para el mexicano promedio, las reformas acabaron siendo vistas menos como un boleto hacia el desarrollo que como un medio de enriquecimiento de unos cuantos. Ciertamente, ese es el ánimo que catalizó la elección de 2018.

Reformas por falta de alternativa

Visto en retrospectiva, es fácil asumir que las reformas tanto en materia política como económica fueron voluntarias cuando, en realidad, fueron producto de la falta de alternativa. Los dos grandes procesos de reforma promovidos en los últimos cuarenta años dicen mucho de la forma de ser y proceder del mexicano: enorme ambición para soñar, pero poca disposición para aterrizar; objetivos grandiosos pero metas pequeñas; comprensión de la urgencia de cambiar pero sin alterar lo esencial; discurso altisonante pero tolerancia a los intereses más cercanos. En una palabra, entendimiento de que el statu quo es insostenible pero falta de decisión o capacidad de aterrizar y llevar a buen puerto los proyectos de reforma que se emprendieron. Peor todavía, se impulsaron reformas que se esperaba de antemano que tuvieran un efecto mediocre porque estaban limitadas de entrada: o sea, se concibieron buenas reformas, pero se les impidió lograr su cometido lo que confirma que se llevaron a cabo porque no había de otra.

Fue así como acabamos con reformas incompletas, muchas de ellas extraordinariamente preclaras, pero inacabadas. La visión transformadora, tanto en los 80 y 90 como en los últimos años, ha acabado siendo

rebasada por la terca realidad. Algunas reformas se atoraron porque se encontraron con poderosos intereses que las paralizaron; otras naufragaron por la mezquindad y/o errores de los implementadores, los conflictos de intereses en los que incurrieron. En general, las reformas se limitaron por la percepción de que implicarían costos excesivos para los beneficiarios del statu quo, en muchos casos los propios reformadores y sus aliados. Las razones del estancamiento reformista son muchas, pero las consecuencias pocas y específicas: la economía no crece y los costos de la parálisis se apilan en la forma de pobreza, informalidad y desempleo, todo a cuenta de la legitimidad y desprecio del gobernante.

En el ámbito político nunca hubo un proyecto visionario e integral como el que, desde los ochenta, estuvo presente en la economía. En lo político-electoral el proceso fue de negociaciones parciales que finalmente permitieron una plataforma de competencia equitativa a partir de 1996. Sin embargo, aunque se hablaba de transición, nunca se comprendió que una transición requiere una definición precisa y consensuada del punto de partida y del de llegada. Como quedaron las cosas, nadie sabe cuándo comenzó la transición política mexicana ni hay acuerdo sobre cuándo concluirá. La conflictividad actual no es producto de la casualidad e, irónicamente, quizá no haya concluido con el triunfo de López Obrador, el mayor crítico de la estructura de administración electoral desde 2006.

El asunto de fondo es que, cualquiera que sea la causa, los mexicanos no hemos podido dar “el gran salto hacia adelante”. Esto contrasta con los hallazgos de Hillel Soifer en su estudio sobre la construcción del Estado⁶. Según Soifer, México destaca, junto con Chile y en contraste con Colombia y Perú, por haber logrado construir un Estado fuerte, resultado de la habilidad de sus élites para organizarse, imponer un orden y desarrollar una ideología común que le diera coherencia a la nación. Su estudio también sugiere algunas de las razones por las cuales algunos estados o regiones del país nunca consolidaron un sistema de gobierno eficaz. Pero el punto de fondo, lo interesante del libro, es que desde fines del siglo XIX hubo gran capacidad de construcción del Estado, misma que se renovó luego de la revolución.

La parálisis en la toma de decisiones gubernamental –algunos le llaman oclocracia– es un tema frecuente en el mundo. Las democracias consolidadas han venido sufriendo el fenómeno de la existencia de grupos de interés que,

para defender sus posiciones, han paralizado la toma de decisiones. Ejemplos de esto los encontramos no sólo en México sino también en Estados Unidos y muchos países de Europa. Es en este contexto que el Pacto por México fue tan aplaudido en el mundo porque, aunque no muy democrático, parecía permitir romper con el cerco de la parálisis. Ahora es claro que, para lograrlo, los mexicanos tendremos que construir algo mucho más sustantivo que lo que el gobierno propone: algo que sólo la sociedad lo podrá hacer.

REFORMAS CON RESULTADOS CONTRASTANTES

El cambio de modelo económico a partir de los ochenta nunca cuajó. Sus dos anclas nodales consistían en un equilibrio fiscal y en la liberalización de

“...a pesar de que contamos con una economía cada vez más robusta, el desempeño económico ha sido insuficiente para incorporar al conjunto de la población.”

la economía. En lo primero, el espíritu era retornar a los sesenta, objetivo que nunca se logró: aunque hubo muchos recortes en el gasto (notablemente en inversión, sobre todo de infraestructura), el gasto corriente siguió creciendo.

El gobierno de hoy es sensiblemente más grande respecto al PIB que el de los sesenta y sigue siendo torpe y poco efectivo. Lo único que (más o menos) se logró fue estabilizar las cuentas fiscales para evitar crisis; pero no es casualidad que las crisis financieras y cambiarias comenzaran en los setenta y volvieran a aparecer en los últimos años pues, en contraste con aquella época, el concepto de austeridad de las últimas cinco décadas ha sido más bien laxo.

Por su parte, la liberalización económica se tradujo en la construcción de una industria moderna, competitiva y exitosa en el mundo de la globalización. Sin embargo, como se ha venido argumentando, la falta de una visión integral de reforma y desarrollo para la inclusión de toda la población acabó en la situación en que nos encontramos hoy. Quizá nada ilustre mejor esto que los avatares de la política educativa: la indisposición a modificar el régimen educativo resume el problema central del país y el rezago de toda



la población que, en otras circunstancias, pudo haber sido parte integral de la economía moderna. El capital humano, clave en esta era del mundo, no ha prosperado en México porque los intereses que preservan al sistema educativo han tenido poder suficiente para evitar cualquier cambio. Aquí López Obrador se enfrenta con un dilema infinitamente más trascendente del que reconoce.

En su esencia, el problema de las reformas es político: la mayoría de las reformas fue concebida con criterios técnicos, pero implementada bajo criterios políticos. Como ya lo dije, no se buscaba una reforma integral que sumara al conjunto de la población, sino que se procuraba meramente elevar la producción, las exportaciones y la productividad de quienes participaran en el proceso reformador. Tres décadas después de iniciadas, resultó evidente que las reformas que se adoptaron fueron inadecuadas para lograr el objetivo del desarrollo. La pregunta es por qué. Los contrastes en la economía mexicana son pasmosos tanto en términos de desempeño como de actitud, ambos producto de una realidad que no es coherente ni consistente.

El punto es que tanto la disfuncionalidad política como la transformación económica son reales, de hecho, dos caras de una misma moneda. La combinación de sobreconcentración del poder con gobierno disfuncional (donde lo primero explica a lo segundo) lleva a la parálisis porque impide la institucionalización del poder. Las leyes y reglas del juego cambian de

acuerdo a las preferencias de quien se encuentra en el gobierno, lo que se convierte en la fuente de disfuncionalidad y causa de la ausencia de instituciones capaces de ejercer funciones autónomas y de contrapeso. Parte de la explicación de esto tiene que ver con la inmadurez de la democracia mexicana y parte con la estructura del poder derivada del régimen surgido de la Revolución Mexicana. Los problemas que se enfrentan tienen que ver con estructuras políticas y sociales anquilosadas que favorecen lo que Luis de la Calle⁷ llama la “economía de la extorsión,” donde autoridades, sindicatos, monopolios, burocracias y criminales extorsionan a los ciudadanos, empresarios, alumnos, propietarios, y comerciantes, impidiendo que crezcan las empresas y se desarrolle el país. Si el presidente de verdad quiere detonar un elevado crecimiento y darle oportunidades a los mexicanos más desfavorecidos, su estrategia debería ser la de romper con esas prácticas impunes.

El problema económico no es igual al de la capacidad de gobierno: tienen orígenes distintos y dinámicas diferentes, pero inevitablemente se retroalimentan. Pero dos cosas son inobjectables: primero, a pesar de que contamos con una economía cada vez más robusta, el desempeño económico ha sido insuficiente para incorporar al conjunto de la población. En segundo lugar, el problema político y su manifestación en la forma de criminalidad y violencia ni siquiera ha comenzado a encararse.

Como argumenta Santiago Levy,⁸ no es que estuviesen mal las reformas, sino que no se reformó todo lo que era necesario. Específicamente, faltó una estrategia de inclusión social que permitiese tanto sumar al conjunto de la población como elevar la productividad para toda la economía. Como quedaron las cosas, la productividad se elevó de manera espectacular en el sector moderno, pero la mayoría de la población se quedó atorada en una economía informal, improductiva, incierta y sin futuro. La propuesta de Levy reside en crear mecanismos que incentiven la formalización y eleven la productividad a través de una estrategia de política social que no haga recaer los costos de la formalización en microempresas, una propuesta ambiciosa y compleja pero, viniendo de uno de los autores originales de las reformas, invaluable.

Reconocer la realidad no implica que el futuro deba ser una mera continuidad de lo que no ha traído resultados favorables para el conjunto de

la población, pero sí constituye el punto de partida. Un gobierno tras otro en el mundo desde hace casi medio siglo ha aceptado la premisa de que “no hay alternativa” en las palabras célebres de un primer ministro británica. Por varias décadas, el mundo avanzaba en una dirección y todas las naciones competían por las mismas fuentes de inversión, lo que creaba condiciones muy precisas para una estrategia de gobierno. No había disputa sobre la dirección de las políticas públicas; en todo caso, la fuente de conflicto en innumerables sociedades tenía más que ver con la velocidad de los cambios requeridos que con su naturaleza.

Pero las circunstancias que crearon el entorno de competencia por la inversión no han cambiado, aunque es obvio que ha desaparecido la disposición de los votantes a tolerar resultados mediocres. El voto abrumador por López Obrador así lo hace ver. Pero eso no cambia dos factores medulares: primero, que no hay marcha atrás en el mundo de las comunicaciones instantáneas o de la ubicuidad de la información. Los votantes se volcaron por un candidato y le confirieron un extraordinario mandato, pero no tiraron a la basura sus fuentes de información ni sus teléfonos inteligentes: sería una ingenuidad suponer que van a tolerar la destrucción de lo que sí funciona. El otro factor que no se altera es el hecho que existen restricciones externas a lo que un gobierno puede hacer para cambiar el sentido del desarrollo.

Cambiar el sentido del desarrollo no sólo es posible, sino necesario. El modelo seguido a la fecha partió de la premisa (implícita) que había que dejar intocado el statu quo político, lo que de hecho implicaba preservar feudos de poder y, por lo tanto, limitar el desarrollo a quienes ya se encontraban en la modernidad y que podían actuar por sí mismos: quienes eran capaces de competir, exportar y sobrevivir en el mundo de la globalización serían los grandes ganadores; a los demás, que alguien más los ampare.

No cabe ni la menor duda de que el país requiere algo distinto a “más de lo mismo” como receta para enfrentar sus carencias y limitaciones. Al mismo tiempo, no es evidente que las respuestas que propone el nuevo gobierno sean adecuadas para resolver esas carencias y limitaciones.

La simple (pero difícil) opción

México no tiene alternativa más que reformarse y transformarse. Estamos en la etapa final de la transición demográfica, momento en el que el número de jóvenes que entran a la fuerza de trabajo comenzará a disminuir, marcando el principio del envejecimiento de la sociedad mexicana, periodo durante el cual un menor número de jóvenes financiará el retiro de un mayor número de personas mayores. Esto implica que, a menos que se reformen las estructuras que permiten un crecimiento acelerado de la economía, México acabará siendo una sociedad cada vez más vieja (en el sentido demográfico) y más pobre.

La alternativa es una reforma de los instrumentos que podrían hacer posible el crecimiento sostenido y elevado de la economía, mismos que no son excepcionales: en la era de la economía de la información y del conocimiento, éstos se derivan del capital humano (educación y salud), la calidad de la infraestructura y la capacidad de atraer inversiones de alto valor agregado. Todo esto muestra que las reformas emprendidas en las últimas décadas eran las adecuadas. La pregunta es si el sesgo que las caracterizó puede corregirse para que, avanzadas con celeridad, permitan un crecimiento mayor e incluyente en las próximas décadas.

El dilema para el nuevo gobierno es que sus premisas y prejuicios no empatan con la realidad. La razón por la que el TLC es tan popular es que ahí se encuentran los mejores empleos, los que mejor pagan y los que mejor perspectiva ofrecen: la lección es que hay que generalizar las condiciones que hacen posibles esas circunstancias. Virtualmente todos los sectores de la población, partidos y candidatos defendieron al TLC cuando éste fue amenazado por Trump, al punto que la conclusión de la negociación de 2018 fue posible por el propio López Obrador. Sin embargo, por obvia que sea esta lección, llevamos cinco décadas evitando actuar al respecto: un gobierno tras otro se ha dedicado a proteger el statu quo, incluyendo a una planta industrial ancestral e inviable, en lugar de crear un proceso de transformación real que sume a toda la población en el mundo de éxito.

La disyuntiva es simple y transparente: romper con los impedimentos al éxito de la economía moderna –de hecho, hacer posible que el 100% de los mexicanos tenga acceso– o empeñarse en una agenda de construcción de clientelas improductivas que acabarán por matar las fuentes de ingreso del país. No hay para donde hacerse: resolver lo que no han querido atacar las administraciones previas o seguir sin poder prosperar. El mandato da para esto y mucho más.



Más de lo mismo

Uno no tiene que ser un profeta para predecir que el orden presente tendrá que desaparecer.

Alexander Kaun

Independientemente de sus diferencias y animadversiones, hace décadas que la clase política mexicana tiene claro que el país no está caminando en la dirección correcta. El sólo hecho de reconocer la necesidad de emprender diversas reformas así lo atestigua.

Como ya lo expuse, el problema del crecimiento en México no es su ritmo, sino su enorme desigualdad, mas no en el sentido en que normalmente se entiende este término. El país manifiesta una extraordinaria dispersión en sus pautas de crecimiento: mientras algunos estados crecen a tasas elevadas, otros con dificultad preservan los niveles reales alcanzados al inicio de los ochenta.

De nuevo, el modelo económico adoptado desde los ochenta, al menos en su concepción central, es el único posible y es el que han adoptado innumerables países en las últimas décadas. Lo que ha fallado en México, en comparación con naciones como las mencionadas en este texto, es en el hecho de que, en nuestro país, la implementación ha sido limitada. Las reformas económicas de los ochenta en adelante se proponían crear condiciones para que el país pudiera prosperar, pero siempre y cuando eso no alterara la estructura de poder político, sindical y empresarial. Esto creó una economía dual: los que compiten y son exitosos y los que se rezagan. Los mexicanos emigran porque no hay condiciones para ser prósperos: una vez que llegan a su destino, son tan exitosos o más que los otros mexicanos y, con gran frecuencia, que los estadounidenses. Uno puede ver cómo los oaxaqueños en Los Ángeles o Chicago son tan hábiles y capaces como todos los demás, pero no así en Oaxaca: ¿el problema radica en los oaxaqueños o en la realidad socio política de Oaxaca?

La retórica política que caracterizó las últimas tres justas electorales (2006, 2012 y 2018) arrojó una alternativa maniquea del todo o nada: se está a favor de una economía integrada al mundo o a favor revertir las reformas. Es decir, nunca hubo un planteamiento que permitiese aceptar los beneficios que se habían logrado gracias a las reformas, a la vez que se reconociera la urgencia de crear una visión de inclusión generalizada que permitiese atender problemas inexorables como el de la pobreza. Es evidente que hay margen para las dos cosas, pero el choque de narrativas –y la naturaleza lógica de los procesos de confrontación de una contienda electoral– hicieron imposible la construcción de un planteamiento distinto. Tampoco hubo la grandeza o estatura política para actuar en este sentido.

En realidad, como se adelantó, desde un punto de vista político, hay dos factores que hicieron posible preservar el statu quo a la vez que se avanzaban las reformas, tan sesgadas como hubiesen sido: tanto el TLC como la migración hicieron posible mantener el barco a flote sin tener que hacer demasiado. El TLC promovía la inversión del exterior en el país y generaba tasas de crecimiento suficientemente elevadas para evitar crisis significativas, en tanto que la migración reducía la presión social sobre el gobierno para generar empleos. Ambos factores, atacados visceralmente por el presidente Trump, han dejado de ser viables. De hecho, ninguna de estas dos “anclas” será sostenible en el futuro, lo que exigirá nuevas respuestas y reformas profundas que conduzcan a condiciones propicias para un crecimiento determinado por fuentes de certidumbre internas.

El punto central es que, aunque el país avanzaba bajo ciertos parámetros e indicadores, este avance no estaba conduciendo hacia una disminución de las brechas existentes, ni estaba diseñado para crear fuentes de riqueza distintas a las vinculadas con la industria moderna, integrada al mundo de la globalización. Sin embargo, la retórica política condujo, de manera inexorable, a la alternativa maniquea descrita con anterioridad: destruir lo que sí funciona (el entorno que favorece la competencia y el éxito en el mundo global) en aras de proteger a los que no han sido exitosos, o redefinir la agenda de desarrollo para orientarla e incluir a todos los que no han podido o tenido condiciones para ser parte de ese éxito.

En la reciente contienda electoral, el gobierno de Peña Nieto y los candidatos del PRI y del PAN argumentaban por la continuidad en el modelo económico,

proponiendo correcciones o adiciones para compensar sus carencias y limitaciones, pero no reconocían lo fantasioso que resultaba tal pretensión.

Todo el establishment mexicano apoyaba la continuidad aun cuando sus resultados habían sido insuficientes, cuando no inexistentes, para un gran número de mexicanos. Las diferencias regionales evidencian problemas no sólo profundos sino ancestrales en el país. Sin embargo, en todas estas décadas de reformas no hubo una sola que planteara la necesidad de modificar las estructuras de poder político, económico o social que mantienen el statu quo en lugares como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Más bien, los políticos hicieron todo lo posible por evitar alteraciones en el orden establecido. Lo paradójico es que incluso en esas entidades, Morena arrasó, lo que quiere decir, una de dos cosas: o bien los poderes establecidos en esos lugares consideran que López Obrador es su mejor garantía para la preservación de éste; o esas fuerzas perdieron control de sus bases. Desde luego, es posible que hubiesen calculado lo primero y obtenido lo segundo, lo cual sólo el tiempo determinará.

Enrique Peña Nieto no hizo más que llevar hasta sus últimas consecuencias la lógica del “más de lo mismo” y visto en retrospectiva, Anaya y Meade erraron en su estrategia al proponer también “más de lo mismo.” No tengo duda de que sus propuestas eran más ambiciosas y complejas que esto, pero ninguno propuso una alteración de los factores que preservan, y permiten preservar, el statu quo. Es por eso que estaban condenadas al fracaso incluso antes de comenzar la contienda.

De lo que no hay duda es que el electorado rechazó “más de lo mismo.” El electorado dejó de ser “políticamente correcto” y tolerante, llamando a las cosas por su nombre y haciendo evidente que la fachada de la continuidad sin una propuesta seria y transformativa no era un proyecto sostenible o respetable. En adición a eso, los dos elementos que permitieron preservar el statu quo, el TLC y la migración, ya no son mecanismos viables hacia el futuro. Esto explica el resultado electoral, pero no resuelve el problema del futuro del país.



Dos maneras de percibir una misma realidad

La primera lección de economía es sobre la escasez: nunca hay suficiente de un bien para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de economía. La realidad no es opcional.

Thomas Sowell

La política en la era de la ubicuidad de la información es sobre narrativas: visiones contrastantes del mundo y que exageran las diferencias y atenúan las coincidencias, todo en aras de capturar el apoyo ciudadano y su voto. La esencia de la política no ha cambiado, pero la velocidad del mensaje, las redes sociales y la confrontación que le es inherente a la comunicación instantánea producen efectos muy distintos a los de la era de la política directa o unidireccional, por vía de la televisión. El resultado es una permanente confrontación que no contribuye a avanzar los objetivos que todos los políticos dicen querer lograr, como paz, seguridad, crecimiento económico y estabilidad.

A lo largo de las últimas cuatro décadas, los mexicanos hemos vivido dos narrativas contrastantes: una que exalta la transformación que han producido las reformas estructurales que se comenzaron a implementar a partir de mediados de los ochenta y otra que denigra la realidad actual, reprueba las reformas y enaltece un pasado idílico. Entre esas dos narrativas existe una realidad, que es la que vive la población de manera cotidiana y que probablemente entraña algo de cada una de esas posiciones extremas y que se ha ido forjando por realidades no sólo económicas, sino sobre todo por factores ligados a la inseguridad, desapariciones de familiares, violencia y

corrupción. Lo que indudablemente sí tiene impacto es la percepción que la ciudadanía tiene de la política, del gobierno y del futuro.

La narrativa del éxito reformador es muy clara: las reformas permitieron romper con la era de las crisis financieras, estabilizaron la economía, sentaron las bases para un crecimiento elevado y sostenido y eliminaron a la inflación como un factor de preocupación para la población. Según esta visión del

“La alternancia de partidos en el gobierno de ambos estados ha consolidado un camino hacia un Estado de derecho que es desconocido en otras latitudes del país.”

mundo, la integración de la economía mexicana a los circuitos internacionales de tecnología, comercio e inversión han permitido que México se convirtiera en una potencia exportadora, que la industria moderna se transformara en una de las más competitivas del

mundo y que todo el personal asociado a este segmento de la economía contara con empleos mejor remunerados y con mayores prestaciones. Entidades como Querétaro y Aguascalientes son empleadas como ejemplos de lo que una buena estrategia de desarrollo puede ofrecerle a la ciudadanía y al país y muestran que, de seguir por el camino adoptado, México se consolidará como una economía pujante con un sistema político democrático gobernado por un Estado de derecho cabal.

En esos dos estados se da un fenómeno peculiar: su economía depende mayoritariamente de empresas modernas que emplean a la mayoría de la población, confiéndoles un enorme peso político interno, así sea implícito, que deja poca latitud a los gobernantes locales para hacer mal uso de los recursos públicos o incurrir en casos flagrantes de corrupción. En este sentido, estas entidades han ido avanzando de manera certera hacia un sistema político más equilibrado, con contrapesos efectivos. La alternancia de partidos en el gobierno de ambos estados ha consolidado un camino hacia un Estado de derecho que es desconocido en otras latitudes del país.

La narrativa del caos económico, ecológico y social resalta la pobreza y desigualdad que han traído consigo las reformas, la falta de crecimiento económico (un mero 2% en promedio), la inseguridad en que vive la

población y los malos empleos (incierto y sin prestaciones) que padece la mayoría de los mexicanos. El punto de partida de esta narrativa es el elevado crecimiento económico que caracterizó a la década de los setenta, la paz social que se vivía y la seguridad pública que era la norma. Esta narrativa emplea a estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas para mostrar los pésimos resultados de las reformas, la pobreza que caracteriza a esas entidades y la desigualdad que se acumula de manera creciente en el país. En lugar de logros y oportunidades, esta narrativa resalta la corrupción, la inseguridad, la impunidad y los excesos de los gobernantes en todos sus niveles y dimensiones. Su propuesta es retornar a la era, y a las estrategias, que hacían posible la estabilidad de antaño, lo que fortalecería la democracia y la participación ciudadana. Los problemas comenzaron justo cuando se viró el camino con las reformas de los ochenta, mismas que tienen que ser canceladas para restaurar la capacidad de crecimiento económico y desarrollo social.

Cada uno corregirá y adjetivará la descripción de estas narrativas, pero lo importante es que, por su naturaleza, buscan polarizar: para unos todo está bien, para otros todo está mal. Para los primeros lo importante es hacer más de lo mismo; para los otros hay que cambiarlo todo. Si uno analiza los datos concretos, las diferencias son menos pasmosas de lo que las narrativas sugieren, pero lo relevante es menos las narrativas –que concentran toda la atención– que la realidad de la vida cotidiana.

Una visión más objetiva de las últimas décadas sugeriría que la economía mexicana muestra una extraordinaria diversidad, que hay regiones creciendo a más del 7% en tanto que otras se rezagan; que la mayor parte de quienes están empleados viven en relativa precariedad; que la inseguridad nada tiene que ver con las reformas sino con la falta de una transformación del propio gobierno y sistema político; y que no es posible retornar al pasado, pero que más de lo mismo claramente tampoco resuelve nada. También, que el país claramente no va en la dirección de la democracia o el Estado de derecho. Quizá más importante, los problemas del país son reales y trascienden a las narrativas que polarizan pero no resuelven.

El gran éxito de Carlos Salinas en sus primeros cinco años de gobierno fue que logró que hubiera una sola narrativa y que la población mirara hacia adelante para hacerla realidad. Su fracaso en el sexto año –seguido del caos financiero del siguiente año– no tuvo que ver con las reformas mismas, pero

provocó la confrontación de narrativas que polarizan y generan desconfianza. Ojalá López Obrador tenga la habilidad para sumar y cerrar esa brecha tan destructiva.

Sin embargo, no hay que perder de vista que López Obrador tiene una concepción del mundo muy distinta a la que caracteriza a la sociedad integrada –en su vida diaria o en su visión– al mundo cosmopolita. Para él, el país erró el camino al iniciar la era de las reformas porque éstas rompieron los equilibrios que existían previamente, produjeron vastas desigualdades y, sobre todo, destruyeron la capacidad del gobierno de ejercer una rectoría sobre el desarrollo del país. Para López Obrador, las reformas fueron decisiones tecnocráticas que traicionaron el espíritu de la Revolución Mexicana y que ignoraron los lineamientos políticos que emanaban de éstas. En esa visión, el país perdió soberanía al someter sus decisiones internas a los avatares de los mercados financieros o a los intereses de empresas de otras naciones y sus gobiernos. En consecuencia, si hay que pagar un costo por recuperar esa soberanía, éste es aceptable.

El punto de fondo es la que las dos narrativas que han existido en México a lo largo de las últimas décadas no son producto de la casualidad, sino de visiones claramente contrastantes, si no es que contrapuestas. A uno le puede gustar más una que la otra, o uno puede pensar que una o las dos son incompatibles con los objetivos de desarrollo del país, pero eso no niega su profundo arraigo en la población. También explica los brutales contrastes que perviven en el país, así como las capacidades dispares de gobierno.

Lo que sigue dependerá en gran medida del propio Andrés Manuel López Obrador. Es él quien ganó la elección y es él quien controla y domina a una de las coaliciones más amplias, diversas, complejas y dispersas de la historia de México. Esa complejidad amenaza con ser su mayor dolor de cabeza, pero también su mayor oportunidad. Al ser el primer líder carismático en décadas, tiene la oportunidad de transformar no sólo a la política mexicana, sino a la lógica de las reformas. Esto que parecería contradictorio no lo es: López Obrador tiene ideas sumamente claras de lo que quiere lograr, pero pronto se percatará de que ese proyecto no es alcanzable en la vida real. Su verdadera disyuntiva será: continuar con los dogmas o reformar la realidad.

El líder carismático es excepcional en la historia moderna del país. Su oportunidad lo es más.





Mexico City, CDMX / México - December 1, 2018: Mexican citizens raise hands while Andrés Manuel López Obrador, new Mexico's president, participates on an indigenous ritual.

Carisma ¿para qué?

Quien desea éxito constante, debe cambiar su conducta con los tiempos.

Maquiavelo

Andrés Manuel López Obrador es como ningún otro político mexicano, al menos en el último medio siglo. Más parecido a los políticos de la era posrevolucionaria, es un político de calle o, como lo llamó Héctor Aguilar Camín⁹, político de intemperie:

“Se trata de un fenómeno único en la política mexicana: un político de intemperie en un medio de políticos de gabinete. Una de las ventajas de la política mexicana, con todos sus horrores, ha sido la ausencia de lideratos personales independientes del tejido burocrático. Los políticos mexicanos son del tamaño de sus cargos. Su capital político desaparece cuando pierden las posiciones en el gobierno. López Obrador es un político distinto, un político de plaza y de intemperie en un mundo de políticos de escalafón. Está parado no sobre sus puestos sino sobre su carisma. Y en un medio político de lenguaje ceremonioso, retórico o tecnocrático de discursos por lo general pomposos y mal escritos, López Obrador habla persuasivamente y crea realidad política con lo que dice.”⁹

López Obrador no es un buen orador, su discurso y mensaje son pobres y, como él mismo dice, habla “despacio y no de corridito.” Y, sin embargo, es un fenómeno político que cautiva a sus auditorios, comunica un fervor casi religioso que genera no seguidores sino (casi) creyentes. Para

quienquiera que haya asistido a uno de sus mítines (yo incluido), el impacto es desbordante. Nadie sigue pensando igual de la política o de los políticos después de esa experiencia: presenciar su impacto sobre la ciudadanía es no sólo ilustrativo, sino conmovedor. La conexión es extraordinaria, abrumadora: el fenómeno es real y le dio una plataforma formidable para su triunfo. La pregunta es si le alcanzará para gobernar.

López Obrador comanda una base de apoyo del 30% del electorado desde 2006. Esa cifra coincide con la población que, a lo largo de todos estos años, rechaza la legitimidad del sistema electoral y que ha permanecido leal, con una mínima fluctuación, a través de sus ascensos y descensos, hasta arribar a su arrollador triunfo. Ese 30% es claramente permanente e integrado por “creyentes” que lo identifican con honestidad, austeridad, integridad y capacidad de salvar al país. El fervor con que lo han apoyado es impresionante, como lo es su indisposición a virar en cualquier otra dirección.

Pero esa base no explica, por sí sola, el triunfo tan grande, de 53%, que obtuvo. Nadie sabe qué parte de ese 23% adicional es “creyente” en el sentido empleado aquí, pero es probable que sólo una porción menor, lo que sugiere que su triunfo se debe a otras razones, quizá a ese carisma tan inusual y extraordinario que lo llevó a donde está el día de hoy. En adición a lo anterior, no cabe duda alguna de que los partidos tradicionales han sido incapaces de adaptarse a un entorno cambiante, responder a la ciudadanía

“López Obrador comanda una base de apoyo del 30% del electorado desde 2006.”

y ofrecer alternativas novedosas, como lo hizo López Obrador.

El triunfo electoral se cocinó en tres dimensiones. La primera

consistió en la construcción de una narrativa que supusiera un divorcio entre Enrique Peña Nieto y el electorado, la cual entró en operación desde finales de 2013 cuando intentó crear un ambiente propicio para la renuncia del entonces presidente, y luego tomó control de las redes sociales desde el momento en que ocurrieron los asesinatos de los estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Este logro no fue producto de la casualidad, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada para desacreditar al presidente en turno y sentar las bases de la candidatura

ganadora de 2018. No me cabe ni la menor duda de que los estrategas que concibieron esta trama jamás imaginaron lo fácil que sería, particularmente porque Peña Nieto desapareció del mapa y jamás se defendió, haciendo posible la consolidación del plan y el arribo de López Obrador a la elección presidencial prácticamente sin oposición.

La segunda dimensión fue la integración de una coalición amplia y diversa, sin duda la más grande que jamás se había construido en la política mexicana, sobre todo por su diversidad y dispersión tanto geográfica como política. Desde su inicio, además de los contingentes dentro del PRD que se sumaron al nuevo movimiento, Morena estableció una alianza con el PT, partido que había sido aliado de López Obrador desde antes, para luego sumar al Partido Encuentro Social, PES, quien le abrió el espectro de apoyos a una base electoral no sólo muy distinta a la que sustentaba a Morena, sino también geográficamente muy atractiva. López Obrador luego sumaría a personajes simbólicamente muy importantes del PAN, como Manuel Espino y Germán Martínez, ambos expresidentes de esa organización política. López Obrador también incorporó a líderes de las organizaciones de auto defensa de Michoacán, a dirigentes obreros como Napoleón Gómez Urrutia, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y figuras significativas del propio sindicato de maestros SNTE. En la misma línea, atrajo a liderazgos sociales, indígenas, organizaciones dedicadas a proyectos específicos (como el rechazo al aeropuerto de Texcoco) y a grupos de empresarios, así como a figuras notorias del ese gremio, todos los cuales contribuyeron a construir esa coalición ganadora.

Fernando Luna afirma que la “búsqueda de acuerdos con organizaciones e individuos de trayectorias tan diversas [se debe a] la fragmentación del sistema de partidos... En tal escenario, el servicio que estos partidos pequeños le hacen a la campaña de López Obrador en lo que respecta a estructura territorial resulta fundamental, más aún cuando Morena es una organización tan reciente y con un liderazgo carismático cuyo arraigo se concentra en la zona centro y sur del país”¹⁰. Para ganar, López Obrador no dejó asunto alguno al azar.

De hecho, la tercera dimensión de su estrategia fue la que quizá tuvo el mayor impacto en atraer al electorado ciudadano que le dio no sólo la victoria final, sino un margen de triunfo enorme. De particular importancia fue la articulación de un discurso moderado, el abandono de las frases

tajantes que, en las dos contiendas anteriores, le habían hecho daño (como la famosa relativa a las chachalacas), el acercamiento con la otrora “mafia del poder” y la insistencia en el manejo sano de los agregados macroeconómicos. El discurso permitió atraer a votantes que antes lo habían rechazado, así como a sumar una base amplia que, por supuesto, ahora ya como presidente, va a mostrar su extraordinaria diversidad, con las agendas contrastantes y contradictorias que ello inevitablemente entraña.

El liderazgo de López Obrador permitió no sólo sumar, sino sobre todo preservar una coalición que, por definición, era compleja de administrar. De la misma manera, un líder carismático como López Obrador entraña una característica anti burocrática y antinstitucional que ha sido el sello de Morena y del desempeño de la coalición en ambas cámaras legislativas a la fecha. Pero es el líder quien decide y dirime las diferencias que, por fuerza, son múltiples y permanentes.

Una nueva lógica

López Obrador es un líder político que fue armando cuidadosamente sus redes de lealtad, las cuales mostraron no sólo su arrastre y popularidad, sino también la aceptación y el apoyo de una buena parte de la ciudadanía¹¹. Su liderazgo, como señala Federico Berrueto, es carismático y su discurso de cambio social ha transitado de radical a moderado. La fuerza de su liderazgo radica en que suma y capitaliza la indignación social. Su gran éxito en la contienda de 2018 fue que logró que su base no fuera tanto los pobres, sino los indignados. De allí su potencial político.¹²

El liderazgo de López Obrador está por encima de cualquier duda, pero entraña una enorme complejidad en los tiempos por venir por su naturaleza anti institucional: Morena es, y probablemente seguirá siendo, un movimiento más que un partido. En lugar de estructuras formales, la esencia de un partido político en forma, Morena es una colección de agrupaciones, personas y organizaciones que cubren todo el espectro político, ideológico y social del país. Ahí hay personas de filiación social demócrata y demócrata cristiano; activistas y operadores; intelectuales y académicos; empresarios y líderes obreros; exguerrilleros y grupos de choque; ideólogos y pandillas;

líderes sociales y señoras elegantes; personas con doctorados y personas iletradas. La coalición es impresionante en su dimensión y diversidad. El cemento que une a toda esta colectividad es la personalidad de López Obrador y se extiende hacia grupos y personas ajenos a la coalición que vieron en él al líder que podía modificar el rumbo del país.¹²

Como político priista de los años sesenta o, incluso, de una era previa, López Obrador tiene la visión de reconstruir aquella era exitosa tanto en términos económicos como políticos. En contraste con la primera era de las reformas económicas, en que el gobierno de Miguel de la Madrid pretendía recobrar la salud financiera que había caracterizado aquellos años, lo que López Obrador ve en ese periodo de la historia del país es la rectoría del Estado que permitía establecer prioridades, utilizar al gasto público como mecanismo para orientar la inversión privada y preservar el orden público en todo el país.

Desde esta perspectiva, toda la lógica que anima a López Obrador es política. Su actuar en materia económica será resultado de los criterios de poder que animan su proyecto en general, lo que rompe con la lógica que caracterizó a la

“López Obrador tiene la visión de reconstruir aquella era exitosa tanto en términos económicos como políticos.”

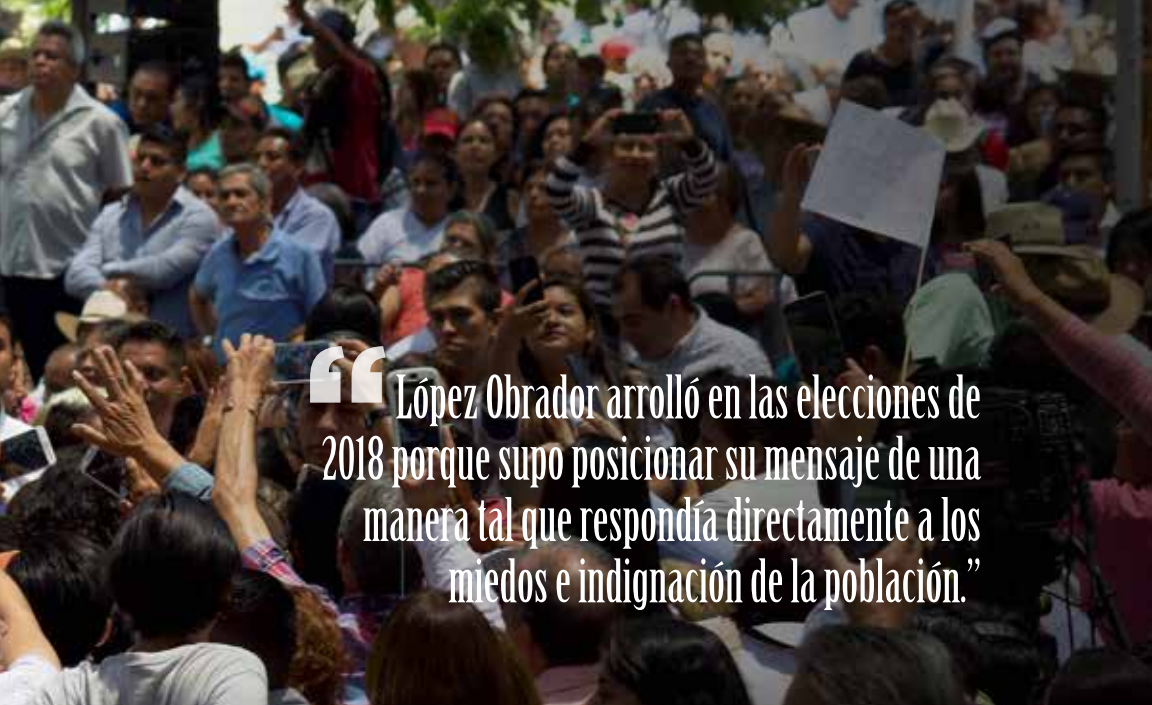
conducción gubernamental a lo largo de las últimas cuatro décadas: en esos años, las consideraciones económicas se convirtieron en un factor limitante a las decisiones (y excesos) de los políticos. Aquello no fue producto de las preferencias de los gobiernos de ese periodo, sino de la realidad del mundo global. En esto, López Obrador se propone romper de manera radical con el pasado reciente. Su premisa es que, si el país corrige su estructura y relaciones políticas, lo demás se ordenará y comenzará a funcionar: en la medida en que el gobierno actúa como un ente ordenado, con criterios claros y funcionales, los agentes económicos contarán con la certidumbre necesaria para poder funcionar. Es decir, la propuesta implícita es que la política se vuelve a posicionar por encima de los criterios económicos y de los actores financieros con el fin de recobrar el cauce que se perdió desde hace medio siglo.



El planteamiento no se limita a reconstituir el liderazgo gubernamental como factor centralizador del poder y organizador de la sociedad, sino que invierte la pirámide que ha guiado los destinos nacionales a partir de los ochenta. En esta visión, la política se posiciona por encima de la economía; los perdedores (por ejemplo, los pobres) antes que los ganadores; la lógica política antes que la transparencia; los grupos cercanos antes que las licitaciones abiertas; los síntomas antes que las causas. Aunque Peña Nieto ya había alterado algunos aspectos de la lógica de los reformadores anteriores, el planteamiento del nuevo gobierno entraña no sólo una nueva racionalidad, sino un paradigma absolutamente contrastante con el orden previamente existente.

EL MANDATO Y LA REALIDAD

López Obrador arrolló en las elecciones de 2018 porque supo posicionar su mensaje de una manera tal que respondía directamente a los miedos e indignación de la población. Él representa una respuesta al hartazgo que caracterizaba a la mayor parte de la ciudadanía, a la ausencia de respuestas por parte del gobierno, a la parálisis en que había caído el país en un



“López Obrador arrolló en las elecciones de 2018 porque supo posicionar su mensaje de una manera tal que respondía directamente a los miedos e indignación de la población.”

sinnúmero de frentes y, quizá más que nada, sobre todo para ese 23% del voto adicional que logró sobre su base histórica, una opción frente a promesas incumplidas en la era de las reformas. Para muchos mexicanos, las reformas dejaron de ser creíbles desde hace tiempo. El contraste entre lo que se prometía y lo que se lograba siempre fue abismal. Ejemplos hay muchos pero, más allá de lo específico, lo que es claro es que las tasas de crecimiento, los salarios promedio y la calidad de los empleos a los que la mayoría de los mexicanos ha tenido acceso no se equiparan con el discurso triunfalista de los promotores de las reformas a lo largo de los años. En una palabra, la falta de mejoría generalizada, cualquiera que fuera su origen o causa, acabó siendo una plataforma para un líder nato y carismático como López Obrador.

Nadie puede tener la menor duda del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador o de las circunstancias que le permitieron llegar a la presidencia. Sin embargo, el resultado de la elección entraña una complejidad que es inusual en la política mexicana. Para comenzar, la naturaleza de la coalición que caracteriza al hoy presidente y, sobre todo, su naturaleza como movimiento y no como organización estructurada, implica una necesidad sistemática y permanente de atención y “negociación.” Además, dada la diversidad de intereses y agendas que son inherentes a los partidos formales que lo apoyan

y a los grupos tan diversos que conforman su base social, el presidente va a tener que dedicar una enorme proporción de su tiempo simplemente a conciliar, arbitrar y evitar conflictos, además de administrar contradicciones.¹³

Si las cosas no caminan como él supone o si las contradicciones resultan ser tan complejas que resultan irreconciliables, el presidente tendrá que llevar a cabo operaciones políticas que, inexorablemente, implicarán un mayor

“Por otra parte, si algo tiene claro en su mente es que una crisis financiera entraña consecuencias graves y perniciosas para la sociedad, lección que observó de primera mano en 1995.”

nivel de conflictividad en la sociedad en general. Es decir, en un escenario como éste, López Obrador retornaría a su manera tradicional de ser, buscando confrontación con terceros como medio para evitarla al interior de su propia coalición. De manera similar, de presentarse una crisis económica –causada por acciones del gobierno o

heredada del exterior– el presidente tendría que actuar frente a un público que no le es afín y, más al punto, al que considera que no tiene razón de influir en sus decisiones: los mercados financieros. Por otra parte, si algo tiene claro en su mente es que una crisis financiera entraña consecuencias graves y perniciosas para la sociedad, lección que observó de primera mano en 1995. La tensión entre ambos factores –la búsqueda de libertades para actuar y el riesgo de desatar una crisis financiera– va a ser una constante en su gobierno.

Como dice Mariano Grondona, “*Toda revolución y todo drástico cambio político atraviesan cuatro fases. La primera, vacilante, es la iniciación. En la segunda fase, el grupo dominante se radicaliza, volviéndose agresivo. En la tercera fase, los excesos de la segunda fase se vuelven contra sus protagonistas. En la cuarta fase, se agota la revolución.*”¹³⁷





Un mundo de exclusión

La única cosa que la gente blanca tiene que la gente negra necesita, o debiera querer, es poder. Y nadie mantiene el poder por siempre.

James A Baldwin

No me cabe duda de que la explicación central para el resultado de la reciente elección presidencial yace en la exclusión en que se encuentra, o se siente, buena parte de la ciudadanía. En un sentido conceptual¹⁴, “las fronteras de exclusión son amplias y diversas. Desde la exclusión por acceso a recursos económicos, pobreza, hasta la exclusión por razón de género, pasando por raza o etnia, por ser inmigrante, por ser joven, por tener una avanzada edad, por ser limitado en capacidades físicas o psíquicas, por falta de acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la alfabetización digital, etc.” La exclusión social va más allá de los cartabones y evaluaciones tradicionales porque tiene que ver no sólo con factores medibles, sino con la forma en que se siente una parte importante de los mexicanos.

La población que se siente excluida en el país es tan grande que pasa desapercibida, excepto cuando se le ponen los reflectores, como ocurrió en esta elección presidencial. Los excluidos encontraron en López Obrador a alguien como ellos: alguien que se ve a sí mismo como una víctima: alguien que habla como ellos; alguien que evoca una paz interna –quizá más que nada una resignación– como la que una enorme porción de la población siente en su propio fuero interno; alguien que es rechazado por la parte de la sociedad letrada e informada que no es cercana al hoy presidente. En una palabra, un amplio número de mexicanos, incluidos muchos que tienen relativamente buenos ingresos y niveles de escolaridad, se siente rechazado, discriminado o excluido. Esa cohorte de mexicanos cambió al país.

En México, la exclusión social abarca a poblaciones que son y se sienten discriminadas, que no tienen acceso a las fuentes de atención y solución a sus problemas –desde cosas tan elementales como el agua hasta la justicia– y pasan por un sistema educativo diseñado para someter, no para potenciar las capacidades de cada individuo, así como por una estructura social y política que excluye y que lo hace de manera imperceptible. El sistema educativo fue concebido como un medio para lograr una hegemonía ideológica en torno al régimen posrevolucionario, lo que implicó privilegiar al control sobre el desarrollo del individuo. A pesar de esto, por varias décadas posteriores al fin de la gesta revolucionaria el sistema educativo tuvo el efecto de promover la movilidad social. Sin embargo, esto cambió a partir de los setenta en que se comenzó a privilegiar el control sindical de los maestros, lo que conllevó no sólo una creciente burocratización y corrupción, sino sobre todo un deterioro educativo (y, por consiguiente, de la movilidad social).

La mexicana es una sociedad profundamente clasista que excluye a la mayoría de la población sin darse cuenta de que lo hace o cuando lo hace. En este contexto, es algo natural que una persona le hable de tú a las personas de limpieza o servicios, esperando que le respondan de usted. Se trata de una condición que se da por hecha, como si fuera natural. La desigualdad está inter construida en nuestra estructura social y se ve como algo normal, como si las instituciones coloniales de la encomienda y la servidumbre siguieran estando vigentes. El problema es que, en muchos sentidos, lo están.¹⁵

Todas las crónicas de la época colonial ilustran casos evidentes de exclusión, cuando no de abuso. Pese a que permitió, en cierto momento, acelerar la movilidad social, el éxito del sistema educativo posrevolucionario no resolvió el problema de exclusión que persiste. Algunos relatos de la época de los cincuenta y sesenta, sobre todo las investigaciones de Oscar Lewis (como *Los hijos de Sánchez*), o *Los Olvidados* de Luis Buñuel, evidencian la exclusión de manera vívida y palpable. Lo que la reciente elección mostró es que la exclusión es real y quienes están, o se sienten, excluidos, ya no están dispuestos a aceptar ese status.

Todos los estudios disponibles¹⁵ muestran que una amplia mayoría de la ciudadanía, y por lo tanto de los votantes, se siente discriminada, de lo cual es fácil colegir que mucho del voto que llevó a López Obrador a la presidencia encontró en él no solamente a alguien con quien se podía

identificar, sino a un vehículo a través del cual podían orear sus sentimientos y resentimientos.

Mi propia experiencia

La película Sarafina, protagonizada por Whoopi Goldberg (1992), tiene lugar en la Sudáfrica del apartheid. Whoopi personifica a una maestra que trata de infundirle un sentido de dignidad y un espíritu de libertad a unos niños que padecen un régimen de discriminación impenetrable. Aunque se trataba de un lugar remoto y distante, radicalmente distinto al nuestro en historia y características específicas, salí del cine profundamente contrariado: recuerdo haber pensado que si en México hubiera colores tan contrastantes como los de aquella nación africana, tendríamos que reconocer que nuestra realidad no es muy distinta.

En México el problema principal quizá no sea de discriminación racial o racismo flagrante, pero sí lo es de clasismo. Nada lo ejemplifica mejor que el altercado que tuvo lugar hace algún tiempo, que acabó siendo conocido como las “ladies de Polanco,” cuando una señora le gritó a un policía “pinche asalariado de mierda”. Además del insulto a la personificación (al menos en teoría) de la autoridad, los términos empleados y el tono de los mismos revelan toda una manera de entender al mundo: a sí misma y hacia los demás.

El episodio resume, de manera más que nítida, varios de los problemas que nos impiden prosperar: el desprecio a la autoridad, la impunidad, el clasismo en nuestra sociedad y la inexistencia de un sistema policiaco que sea



video grab of "the Polanco ladies"



relevante, idóneo a nuestra realidad y circunstancia. Por el otro lado, ilustra la existencia de ese mundo de resignación, al que se suma la percepción de que “otros” nacen con privilegios que no entienden ni reconocen y cuya existencia es prueba fehaciente de la injusticia que caracteriza a nuestra sociedad y que es fuente fundamental del enojo que vio la luz del día en la elección de López Obrador.

Sin duda, uno de nuestros grandes males del México de hoy es el clasismo. En el tiempo, he observado ejemplos clarísimos de esto. La industria hotelera y restaurantera estadounidense emplea a cientos de miles, si no es que millones, de migrantes mexicanos. Cualquiera que haya observado la relación entre los mexicanos y sus pares o jefes estadounidenses podría atestiguar que la comunicación es respetuosa y en los mismos términos que ocurre entre los propios americanos. Lo interesante es cómo cambia eso cuando llega un mexicano como cliente del establecimiento: lo más común es que el mexicano le hable en español y de tú, esperando que el empleado mexicano-norteamericano le responda de usted. Es decir, aunque allá la comunicación es de iguales, cuando viajamos llevamos con nosotros nuestra estructura cultural y clasista y de inmediato la reproducimos en otro contexto.

Un caso más cómico, pero igual de revelador, lo observé en una ocasión en una playa fuera del país. Un prominente empresario mexicano disfrutaba del sol en un camastro cuando, súbitamente, comenzó una severa tormenta eléctrica. Veloz, el policía que cuidaba el lugar conminó a todos los que ahí nadaban o se aseaban a meterse al edificio contiguo de inmediato. Todos



“ Es decir, aunque allá la comunicación es de iguales, cuando viajamos llevamos con nosotros nuestra estructura cultural y clasista y de inmediato la reproducimos en otro contexto.”

los estadounidenses corrieron sin chistar. Los mexicanos lo tomaron con calma pero eventualmente hicieron lo propio. Pero el empresario se rehusó. El policía se acercó y, de buen modo, le pidió que se moviera. Ofendido, el empresario le respondió en un inglés de Harvard: “me boss, you cat”. Desde luego, afortunadamente para el empresario, el policía no entendió absolutamente nada. Sin embargo, lo tomó del brazo y, sin más, lo obligó a moverse. No había duda de la personificación de la autoridad. Tampoco había duda de la naturaleza de la expresión del empresario: no eran de la misma clase.

El desprecio a la autoridad es tan viejo como la era colonial. El viejo “acato pero no cumplo” resume nuestro legado, pero esto no implica un determinismo histórico. Si uno observa a la España de hoy, en que reina el Estado de derecho y se respeta a la autoridad, no hay razón para suponer que no puede ser superado. Raymundo Riva Palacio¹⁶ lo dice con toda propiedad: “A los policías los despreciamos. Ya no nos dan miedo, los retamos. Cuando no, los corrompemos. Son la parte más débil de las instituciones, el eslabón más frágil de la sociedad, donde su descrédito es tan grande...”. Y la combinación no podría ser peor: policías incompetentes, sin formación alguna; una sociedad que los desprecia y que no reconoce autoridad alguna y, por encima de todo, un virtual sistema de castas en el que un policía jamás podría ser aceptable porque es de una clase inferior. Con esos bueyes habrá que arar...

El viejo sistema funcionaba porque la estructura de control vertical administraba la criminalidad con un criterio patrimonialista donde el único objetivo relevante consistía en preservar a la mafia revolucionaria en el poder. Es decir, la justicia y las policías se administraban con criterios políticos para preservar el orden pero también para cuidar los intereses de la llamada familia revolucionaria y el sistema nunca evolucionó hacia la profesionalización de estos servicios centrales al desarrollo. Ese sistema se murió (hecho que ocurrió, poco a poco, antes de la alternancia) porque creció la sociedad, se volvió cada vez más compleja y diversa, al punto en que resultó imposible, insostenible, el control central. La apertura, que emblemáticamente ocurrió con la derrota del PRI en la presidencia, resolvió, al menos parcialmente, el tema de la legitimidad electoral, pero dejó incólumes otros de carácter institucional que nos siguen persiguiendo. En el tema del clasismo en nuestra sociedad, la apertura abrió una caja de Pandora: la sociedad mexicana quizá elija a sus gobernantes de manera igualitaria, pero la sociedad en sí no lo es y nada se ha hecho para alterar esa realidad histórica.

La paradoja es que, como ilustran las ladies gritonas, los de las clases superiores exigen que la autoridad cumpla su cometido (presumiblemente mantenga la paz social, impida la existencia de criminales y proteja a la ciudadanía) pero desprecia a quienes son responsables de hacerla valer: los policías de la esquina, además de que verían como degradante que sus hijos lo fueran. La misma exigencia, aunque con menos medios para hacerla pública, es evidente en el conjunto de la población que está harta de los malos servicios públicos, la ineficiencia del transporte, los asaltos cotidianos y las malas policías. A diferencia de las sociedades desarrolladas, en que evidentemente también hay desigualdad económica, en México ésta se manifiesta en la forma de desigualdad social. El viejo sistema ocultaba, o mantenía en contención, al clasismo de nuestra sociedad. Ahora se ha vuelto incontenible y López Obrador le ha dado vida pública.

La inseguridad pública y la violencia nos contraponen directamente frente a la desigualdad: si no estamos dispuestos a reconocer la autoridad de un policía o un soldado y si éste se asume como inferior por razones culturales y sociales ancestrales, ¿quién va a mantener la paz social? Puesto en otros términos: ¿por qué habría de proteger a la ciudadanía un policía que se sabe despreciado por ésta? Al menos como hipótesis, se podría pensar que muchos de los sicarios que se han sumado a las fuerzas del crimen organizado lo

hacen porque eso los libera de una estructura social ingrata que los mantiene sometidos. Es fácil imaginar a un narco pavoneándose de que él también es un magnate, como los del sector financiero.

Hace algunos años, con motivo del triunfo de Antonio Villaraigosa para la alcaldía de Los Ángeles, el periódico Reforma¹⁷ reprodujo la conversación que éste tuvo con un grupo de empresarios mexicanos, en el marco de una cena organizada en su honor. En ella se le pidió al entonces presidente de la Asamblea Legislativa californiana que explicara, desde su perspectiva como mexicano-norteamericano, la diferencia entre ambos países. “Es muy simple”, afirmó Villaraigosa, “si mi familia se hubiera quedado en México yo estaría hoy sirviéndoles la comida”. Ante las miradas de confusión de los comensales, Villaraigosa agregó: “En cambio fueron a Estados Unidos y hoy ustedes ofrecen esta cena en mi honor.” Las palabras del ex alcalde angelino son reveladoras por lo que nos dicen de la estructura social de México y lo que delatan del resentimiento que muchos mexicanos menos afortunados sienten, pero no expresan, con esa claridad y determinación. Hasta que lo hacen valer. Esto es evidentemente cierto tanto para quienes se sienten o son marginados como para muchos que han sido claros beneficiarios y, sin embargo, también votaron por López Obrador.

La realidad nos alcanzó una vez más: así como hemos sido incapaces de transformar a la economía de manera integral y construir un sistema político moderno y estable, seguimos viviendo con el fardo de la desigualdad social y el clasismo que nos ancla en un mundo que no da para más. Matthew Arnold, un poeta inglés del siglo XIX, decía que “un sistema fincado en la desigualdad va contra la naturaleza y, en el largo plazo, acaba colapsado”. Ahí estamos nosotros, como lo confirmó el 1ero de julio pasado.

“Parte de esa aflicción se origina en las diferencias sociales y la falta de movilidad social que han sido características de una gran parte de México al menos desde la época de la colonia y que, sin duda, se han exacerbado en los últimos años por los contrastes en los niveles de consumo que caracterizan a los diversos grupos sociales del país...”

La revolución que viene

El México que se siente alienado o que no ve progreso, ese que se manifestó de manera decidida por López Obrador, se ha envalentonado y, pase lo que pase, va a cambiar a México.

El enojo y el resentimiento tienen, hasta donde puedo comprender, dos orígenes. Por un lado, hay una enorme parte de la población mexicana que se siente agraviada, sometida y abusada por décadas, si no es que por siglos. Parte de esa aflicción se origina en las diferencias sociales y la falta de movilidad social que han sido características de una gran parte de México al menos desde la época de la colonia y que, sin duda, se han exacerbado en los últimos años por los contrastes en los niveles de consumo que caracterizan a los diversos grupos sociales del país y que, por primera vez en la historia, son brutalmente evidentes en las redes sociales, en la televisión, en las actitudes, y en la forma en que unos tratan a los otros. También, es evidente que el discurso socialista asimilado en muchos segmentos de la sociedad, y que por años fue reproducido en los libros de texto gratuitos desde que Luis Echeverría introdujo esos contenidos, ha inducido la sensación de que unos no tienen porque otros se lo han quitado y que sólo una revolución social puede llevar a un cambio. Esto explicaría por qué muchos de los integrantes de la coalición de López Obrador no ven al 1ero de julio como un triunfo electoral sino como una toma del poder, con la consecuencia de que se vale romper con todo lo existente.

Pero también existe otra fuente de resentimiento, que tiene que ver con la frustración: millones de mexicanos aceptaron las reglas implícitas del juego que se establecieron con el advenimiento de las reformas y, sin embargo, no han logrado progresar. Personas que se esforzaron, estudiaron, pasaron sus exámenes, obtuvieron una licenciatura y que, sin embargo, manejan un taxi o han visto sus ingresos permanecer sin cambio.

Es decir, se pueden advertir dos fuentes de frustración, la que emana de toda una historia mezclada con ideología y la que surge de las reformas incompletas e insuficientes que se llevaron a cabo en estas décadas y que, al proteger a grupos, sectores e intereses, acabaron por producir resultados mucho peores, o mucho menos buenos, de lo que se prometió. Esas frustraciones se observan, particularmente, en la inutilidad que resulta de

estudiar más cuando los salarios no mejoran, incluso en el sector industrial más exitoso.

Pocas cosas más frustrantes que el hecho tangible en México de que, en contraste con otros países, un mayor grado educativo no se traduce en ingresos mayores. Esto puede tener varias causas, una de ellas siendo que se agrega relativamente poco valor en la mayoría de los procesos industriales en el país. En esto, el contraste con países como Estados Unidos es dramático: el ingreso para alguien con grado universitario es dramáticamente superior al de quien sólo concluyó high school, equivalente a preparatoria¹⁸. Este hecho puede deberse a la forma en que están estructuradas las cadenas de suministro, a la calidad de la preparación académica, a los incentivos que tienen las empresas industriales para agregar mayor valor dentro del país, etcétera. Pero para los individuos que se esforzaron y se dedicaron años a estudiar y prepararse, la frustración es incontenible. Y esto se magnifica cuando un individuo no avanza en la escala de responsabilidades e ingresos en una empresa, entidad o función, mientras otros que son percibidos como privilegiados, avanzan con celeridad.

No faltan ejemplos de frustración y de expectativas insatisfechas en todos los ámbitos. Aquí van cuatro que son en buena medida inexplicables, aunque con frecuencia son práctica cotidiana: a) una persona que cotizó por décadas en el IMSS pero, luego de perder su empleo, dejó de hacerlo por dos años, se encuentra con una pensión miserable porque, de acuerdo a las reglas burocráticas, sólo le cuentan los últimos años; b) militares que dedican su vida a proteger al país, arriesgándose en las confrontaciones con los narcos, acaban con una pensión de cuatro mil pesos y con eso deben vivir el resto de sus vidas a partir de los cuarenta o cincuenta años; c) profesionales que estudiaron, pasaron sus exámenes, obtuvieron un empleo y, sin embargo, no pueden romper con el círculo de pobreza en que nacieron porque la infraestructura es mala, no tienen acceso a crédito, o sus empleadores no son exitosos; y d) un director de un hospital del ISSSTE que, al no tener acceso a la jerarquía de la institución gubernamental, no tiene forma de conseguir los medicamentos e implementos que requiere para cumplir con su obligación de proveer un servicio de calidad a sus pacientes. Cualquiera que sea la causa de estas circunstancias, e independientemente de a qué o a quién sea atribuible, el hecho objetivo es que las fuentes de frustración y expectativas destruidas son ubicuas e interminables.

Quizá nada ilustre mejor los contrastes que vive la ciudadanía mexicana que las formas de consumir. No es sólo el tipo de bienes y servicios que se consumen o que se adquieren, sino incluso la forma en que ese proceso ocurre. Mientras que uno puede ver como salen carros del supermercado o de los diversos centros comerciales saturados de comestibles y otros productos, si uno va a las zonas marginales de las ciudades, la realidad es muy distinta. No hay que ir muy lejos: el contraste entre tiendas de cadenas como Walmart y Bodega Aurrerá, ambas propiedad de la misma empresa, son por demás evocativas. En Walmart, un cliente típicamente adquiere cajas de cereal o de jabón para lavar la ropa, medicinas y todos los bienes que uno pueda imaginar. Eso es lo que se puede observar en los carros que salen hacia el estacionamiento y que se guardan en las cajuelas de los coches de su clientela. En Bodega Aurrerá, una cadena orientada a personas menos pudientes, típicamente localizadas en zonas de menor ingreso, la forma de vender productos es radicalmente distinta: ahí se despacha arroz o cereal por taza y lo mismo ocurre con jabón para la ropa; se venden antibióticos por pastilla, lo que implica que una persona puede iniciar un tratamiento y no acabarlo porque no pudo comprar la totalidad de la caja del medicamento; se ofrecen cigarros por pieza y, en algunas tiendas similares en esos mismos barrios, hasta pañales, toallas sanitarias o salchichas en lo individual. Desde luego, la paradoja es que quienes compran por pieza, los más pobres, acaban pagando más.

Pocas cosas ilustran mejor los contrastes entre los diversos segmentos de la sociedad que el del consumo. Mucha de la gente que se ve obligada a comprar los bienes más elementales de esa manera es la misma que trabaja en casas, oficinas o empresas en las que el resto del personal vive con más opulencia. El dramático y visible contraste entre ambos mundos inexorablemente crea frustración y resentimiento. Imposible no acabar con algún grado de impotencia ante esa realidad cotidiana.

En adición a los factores que hacen contrastante, y frustrante, la existencia cotidiana, hay dos factores históricos que se han convertido en ingredientes del encono que caracteriza a la sociedad mexicana y que alimentan el resentimiento como ningunos otros, además de que son utilizados por los políticos de manera cotidiana. Uno es el rescate de los bancos a partir de la crisis de 1995 y el fondo que se empleó para administrar ese proceso, el llamado FOBAPROA. La forma en que se llevó a cabo ese rescate fue reprobable sin duda, pero lo que se rescató fue el ahorro de la población que estaba depositado en los bancos. Sin embargo, en el imaginario popular, la conclusión absoluta e imperturbable es, y ha sido, que los rescatados

fueron los banqueros y los accionistas de los bancos. No hay argumento que convenza a los panegiristas de este planteamiento, sobre todo porque es extraordinariamente útil para la movilización política y porque se suma al enojo de quienes fueron forzados a pagar y/o se organizaron en movimientos como el del Barzón. El que el argumento sea falaz no cambia la realidad política.

El segundo factor es el de la flagrante corrupción, que se puede visualizar de diversas maneras: el enriquecimiento súbito cuando una persona entra al gobierno; los contratos que se asignan a los amigos; la impunidad con que se conducen los funcionarios; la manera en que unos mexicanos tratan a otros; la forma en que se obstruye el tránsito porque eso le facilita la vida al chofer que espera a su patrón; los “favores” que exigen algunos profesores a cambio de una mejor calificación, asunto por demás trascendente dado que constituye un ingreso temprano al mundo de la corrupción. Y la frustración podría extenderse con el nuevo gobierno, si las causas de enojo y resentimiento no se corrigen. La historia de los gobiernos de la izquierda en el Distrito Federal, de los cuales emanan el nuevo gobierno y mucha de su coalición, está saturada de ejemplos de corrupción y asignación de contratos sin concurso ni transparencia, prácticas que se han replicado en el Congreso desde el pasado mes de septiembre.

El voto del 1ero de julio de 2018 incluyó una enorme dosis de frustración y encono. La pregunta es cómo va a lidiar López Obrador con este hecho. No parece haber duda de que él supone que su base es inmutable e inamovible, que se trata de un público cautivo y que puede dar concesiones o realizar consultas a su antojo. Sin embargo, muchas de las fuentes de frustración que caracterizan a la ciudadanía, y no sólo a la más pobre, no se pueden corregir en un periodo corto aún si las entiende el nuevo grupo gobernante y se dedica a atenderlas, lo cual no es evidente. Más importante, no hay forma alguna de satisfacer todas las expectativas y promesas, lo que seguramente acabará convirtiéndose en un nuevo factor de la política mexicana: una población envalentonada decidida a cambiar la realidad por cualquier modo posible, con o sin López Obrador.



Causas y síntomas

¿Cómo llegaste a la quiebra? De dos maneras; primero poco a poco y luego de golpe.

Ernest Hemingway

En 2000 Fox tuvo la oportunidad de modificar la estructura del poder que ha mantenido subyugado al país, pero no tuvo la visión o los pantalones para hacerlo. Hoy el electorado le ha dado a Andrés Manuel López Obrador una nueva -¿última?- oportunidad para llevarla a cabo y evitar que el país siga a la deriva. La clave no reside en cambiar per se, sino en qué cambiar y, sobre todo, para qué.

López Obrador ha postulado cuatro prioridades centrales a lo largo del año previo a su elección: crecimiento económico, reducción de la pobreza, combate a la corrupción y disminución de la desigualdad. Si le agrega el problema de seguridad que aqueja a cada vez más mexicanos, esa es la agenda que tiene que ser atendida. La pregunta es cómo, porque estos fenómenos no son causas sino síntomas y consecuencias de los males que enfrenta el país.

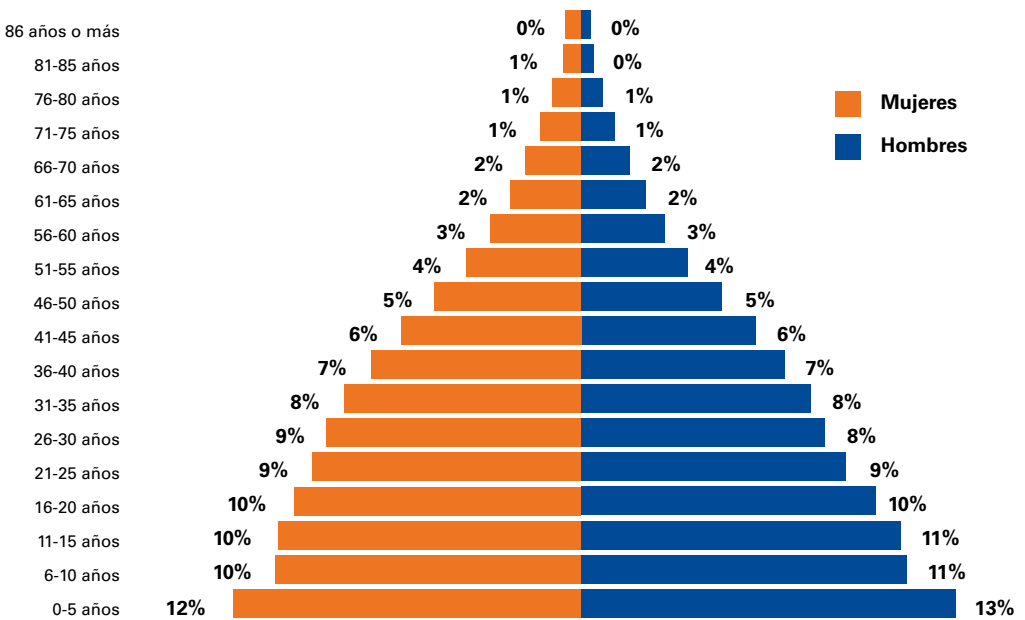
Una cosa que distingue a López Obrador de sus predecesores de las últimas décadas es su propensión natural para atender síntomas más que causas. Los primeros programas que planteó, el de “ninis,” jóvenes que ni estudian ni trabajan, y el de adultos mayores, son dos ejemplos muy evidentes: ambos están concebidos y diseñados para atenuar los problemas existentes -en estos casos uno de empleo y otro de ingresos- más que para encontrar soluciones perdurables.

La pirámide poblacional mexicana está cambiando a pasos acelerados. Los

jóvenes que han estado entrando al mercado de trabajo en los últimos lustros son el mayor cohorte de la historia, factor que entraña dos características y consecuencias: por un lado, constituye la gran oportunidad de crear muchos más empleos productivos para enriquecer al país; por otro lado, si no se logra ese objetivo de empleos y productividad, el país acabará desaprovechando el bono demográfico y sin haber logrado elevar su producto per cápita, es decir, un país que envejece con pobreza en las siguientes décadas. El contraste entre la pirámide poblacional de 2005 y 2030 es aleccionador: en 2005 apenas se notaba el llamado bono demográfico; para 2030 ya estará entrando a la cuarta década de vida.

Figure 9-1. Mexico: pirámide poblacional, 2005

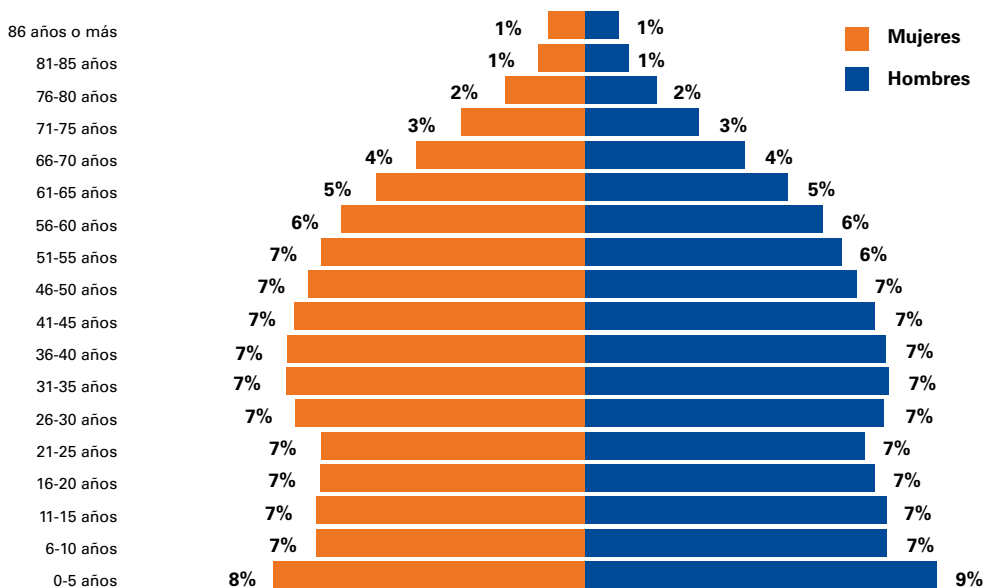
(porcentaje de la población en cada rango de edad)



Fuente: CONAPO

Figure 9-2. Mexico: pirámide poblacional, 2030

(porcentaje de la población en cada rango de edad)



Fuente: CONAPO

Hoy en día, el problema no es de ausencia de oportunidades, sino de falta de capital humano que empate con la demanda por parte de los empleadores. De hecho, la falta de capacitación –o la inadecuada capacitación– de la mano de obra es uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el país y se encuentra en el corazón del objetivo de López Obrador de dedicarse a los jóvenes como prioridad y atender sus necesidades y preocupaciones como elemento central de su proyecto.

El caso de los adultos de la llamada “tercera edad” es similar: subsidiar sus pensiones puede ser visto como un justificable acto de caridad, pero el problema de fondo tiene más que ver con la insuficiencia de los ingresos a lo largo de la vida, así como con los planes de retiro existentes. Como con los jóvenes, se pretende subsidiar un problema en lugar de eliminarlo del todo. Desde luego, junto con los subsidios viene la creación de clientelas que se traduce en apoyos políticos, razón por la cual López Obrador quizás

encuentra atractivos estos programas. Sin embargo, la única forma en que es posible enfrentar el problema de una manera sostenible –dado el aumento en la masa de jóvenes que llega a la edad de trabajar y de adultos mayores que viven cada vez más años– es atacando las causas de esos fenómenos.

En el plano inmediato, López Obrador, como todos sus predecesores desde los sesenta, va a intentar elevar la tasa de crecimiento de la economía. A menos que ataque las causas de las bajas tasas de crecimiento promedio, su resultado no va a ser muy distinto. De entre sus predecesores, unos lo intentaron con deuda, otros con inversión pública y otros más buscando atraer la inversión del exterior. Con aciertos y errores, se lograron resultados contrastantes, pero no se resolvió el asunto central, detrás del cual yacen las otras dos prioridades de López Obrador, la reducción de la pobreza y la disminución de la inequidad. El proyecto más acabado y más longevo de todos los que se han intentado es el que representa el TLC porque ha tenido un éxito desmedido en algunas partes del país, aunque casi ningún impacto en otras.

El diagnóstico que realice el nuevo gobierno va a ser crucial en determinar lo que se debe hacer. De ese diagnóstico dependerá su devenir y la probabilidad de éxito que tenga. Como dice el dicho, no es lo mismo borracho que cantinero, por lo que ahora ya no es un asunto retórico sino de responsabilidad y de oportunidad.

López Obrador goza de dos elementos que lo hacen distinto a todos sus predecesores: por un lado, llegó al gobierno con un apoyo avasallador y con una legitimidad incomparable. Por otra parte, no tiene compromiso alguno con la preservación del statu quo, aunque sin duda ha incorporado en sus filas a figuras, empresarios, políticos, sindicatos y actores representativos del statu quo más recalcitrante. Estos dos elementos crean una oportunidad única: la de construir una nueva plataforma de desarrollo para el país a partir de dos elementos distintivos: a) la inclusión de todos los que siempre se han sentido excluidos y discriminados; y b) la institucionalización del poder bajo reglas estrictamente democráticas.

Más allá de la retórica, ninguno de estos factores le es connatural a López Obrador: aunque goza de un descomunal apoyo popular y, como se mencionó antes, tiene una conexión única con la población históricamente excluida, su propensión a atacar síntomas en lugar de causas lo coloca en

un umbral peculiar, toda vez que es más probable que pretenda convertir esa legitimidad en apoyo clientelar que en la razón de una transformación estructural que ataque las causas profundas del estancamiento del país y de buena parte de su población.

Por lo que toca a la institucionalización del poder, pocas cosas son tan ajenas a López Obrador como eso. Pero precisamente por esa razón, López Obrador tiene la oportunidad de transformar al país, cambiar las relaciones de poder y construir un sistema político que dé acceso a toda la población sin mediatizarlo o controlarlo. Entiendo que no es esto lo que lo anima a él, o a sus seguidores, pero tengo claro que, a menos que cambie la estructura política del país, el resultado de su gestión será igual de pobre que el de sus antecesores.

Los gobiernos de los setenta intentaron resolver el problema del crecimiento con gasto y deuda y acabaron creando la crisis financiera que hizo quebrar al gobierno en 1982 y provocó el empobrecimiento generalizado que siguió. Las tan denostadas reformas que siguieron tuvieron dos características: una, permitieron dinamizar la actividad económica en algunas industrias y regiones; la otra fue que no se implementaron de manera cabal porque siempre hubo algún interés político, burocrático, empresarial o sindical que lo impidió. Las reformas se hicieron para reactivar la economía, pero siempre y cuando no se afectara el statu quo, es decir, que no se perjudicaran



intereses sacrosantos de los grupos de favoritos. Ahí es donde el nuevo gobierno puede hacer una diferencia decisiva: romper el statu quo para darle una oportunidad igual a todos los mexicanos para ser exitosos.

El ejemplo del TLC

El éxito del TLC radica en que creó un espacio de actividad económica que se encuentra aislado de todos esos intereses y entuertos políticos. Así, el TLC no es sólo el motor de la economía, sino que sirve de escaparate para ver lo que está mal en el país y que ha provocado la permanencia de la pobreza y la desigualdad. Para decirlo de otra manera, lo que está asociado con el entramado institucional que caracteriza al TLC funciona; lo demás vive sometido a los intereses caciquiles que matan toda oportunidad. Eso condenó al sur y al oeste del país a muchas menos oportunidades de crecimiento. La pobreza no viene de las reformas sino de la ausencia de reformas políticas que creen un nuevo sistema de gobierno de abajo hacia arriba.

Si uno observa el contraste entre México y Canadá luego del inicio de la vida del TLC en los noventa, las diferencias no son sólo pasmosas, sino ilustrativas. Para comenzar, México vio al TLC como el final de un proceso de reforma que debía ser institucionalizado; Canadá consideró al TLC como el principio de una era de crecimiento y transformación. El gobierno de México dejó que cada empresario, gobernador o líder de cualquier tipo encabezara procesos de cambio orientados a aprovechar las ventajas que ofrecía el TLC. En Canadá, su gobierno creó programas dedicados a que todos los canadienses sin excepción tuvieran acceso a esas oportunidades: lo hizo, esencialmente, a través de un enfoque hacia el ciudadano, donde lo importante era ayudar a que cada persona se ayudara a sí misma por medio de capacitación, mejor comprensión de las implicaciones del Tratado y acceso a todas las fuentes de información disponibles. En el caso de las empresas, creó condiciones para que todas, no sólo las más integradas con el resto del mundo, entendieran lo que el Tratado podría implicar para ellas. En el fondo, su principal cometido fue informar mejor para que toda

la ciudadanía tuviera la mayor oportunidad de ser exitosa. En contraste, en México se dejó al arbitrio de quienes podían hacerlo, mientras que en Canadá se crearon condiciones –leyes, infraestructura, sistema educativo, programas de capacitación, mecanismos de adaptación a la competencia– para que todos pudieran no sólo competir, sino ser exitosos. Veinticinco años después, los canadienses son más ricos y más igualitarios de lo que eran antes; México acusa diferencias cada vez más grandes y no resolvió sus problemas estructurales más fundamentales.

El sistema político posrevolucionario se apuntaló en la asignación de privilegios, que se han preservado en formas por demás creativas. No son sólo los puestos que crean oportunidades de corrupción con plena impunidad o la posibilidad de entregar contratos y concesiones, sino incluso los mecanismos de asignación de senadurías y diputaciones que permiten que sigan estando ahí los de siempre, dedicados a sus intereses personales y partidistas en lugar de atender a la ciudadanía. Es así como seguimos teniendo un sistema educativo que no educa, sino que preserva el statu quo y somete a la población a la ignorancia y a los bajos salarios; un gasto desmedido en programas que diseñan los gobernadores y que no se traduce en mejor infraestructura o la atracción de inversiones de mayor valor agregado. Todo diseñado para que nada cambie y se beneficien los mismos.

Si López Obrador quiere cambiar al país –el mandato de las urnas– la disyuntiva es muy clara: abrir el sistema político para quitárselo a los políticos y sus favoritos y transferírselo en vez a la ciudadanía; o intentar recrear el viejo sistema político con su presidencia imperial, algo sumamente difícil de lograr por la diversidad y complejidad poblacional y económica actuales, pero, en todo caso, destinado al fracaso.

El primer curso de acción llevaría a construir confianza por parte de la población de manera permanente porque tendría que estar institucionalizada en un nuevo sistema de gobierno levantado de abajo hacia arriba. La alternativa sería destruir lo existente sin la menor probabilidad de éxito.

El problema del sur del país no es que al norte le vaya bien, sino que el sur está dominado por cacicazgos, grupos políticos y sindicales intrincados que depredan y someten a la ciudadanía, impidiendo el desarrollo económico.

Por ello, la solución radica en enfrentar esos cacicazgos y construir un nuevo sistema de gobierno, no en recrear algo que hace mucho murió.

En contraste con Fox, López Obrador tiene las habilidades para llevar a cabo cambios estructurales. La pregunta es si las empleará para romper obstáculos respetando las libertades y derechos ciudadanos o para reconstruir un pasado autoritario. Sólo lo primero sería una revolución digna de lograrse.

López Obrador llegó a la presidencia con una coalición extremadamente diversa y compleja, pero con una legitimidad propia que es indisputable. La pregunta que yo le haría es si piensa invertir su legitimidad en nutrir a su coalición o si se dedicará a transformar al país incluso a pesar de su coalición y de sus apoyos tradicionales. No se trata de un juego de palabras: todos los gobernantes del planeta llegan al poder llenos de promesas y adeudos con quienes los apoyaron, pero sólo algunos trascienden porque se abocan a construir algo nuevo y verdaderamente transformador. Fiorino Laguardia, uno de los alcaldes más exitosos de la ciudad de Nueva York, rompió con todos ellos el día en que tomó posesión: “mi primera calificación para esta gran función es mi monumental ingratitud”¹⁹. Ojalá así comience López Obrador.

¿Qué atacar?

Los síntomas –y paradojas– son evidentes en todas partes. Nadie puede dejar de verlos, cualquiera que sea su posición, pertenencia partidista o actividad: el país hace agua por todas partes y, al mismo tiempo, cuenta con impactantes fortalezas que no se explotan a cabalidad porque algo las limita y entorpece. Es muy probable que esa sea una de las razones por las cuales López Obrador fue electo por un número de electores tan aplastante.

Hemos hecho ingentes avances en un sinnúmero de áreas y, sin embargo, algo no acaba de cuajar: el cambio se da, pero no se consolida y la población no ve beneficios. Las disputas políticas cotidianas, que naturalmente se magnifican en periodos electorales, tienen razón de ser porque reflejan un sentir nacional.

Quien quiera que vea el panorama general no podrá dejar de observar los contrastes que nos caracterizan porque revelan nuestra forma de ser, pero también las limitaciones auto impuestas al desarrollo. Aquí va una pequeña muestra de lo cotidiano, claramente no exhaustiva:

- Tenemos una pujante economía de exportación, pero no construimos la infraestructura necesaria para que ésta se multiplique.
- No existe una sola economía nacional, sino al menos tres, con tasas de crecimiento dramáticamente diferenciadas, pero el discurso político tradicional (incluyendo el que justifica las llamadas zonas económicas especiales), ahora enarbolado por López Obrador, se concentra en cómo proteger o subsidiar al sur en lugar de buscar formas en que esa región se sume o imite al norte.
- Los gobernadores no hacen su chamba: en lugar de gobernar -lo que implicaría construir eficaces sistemas de seguridad, infraestructura idónea para atraer inversión y empleos y mejorar la vida de sus poblaciones-, se dedican a la frivolidad y a construir sus siguientes puestos políticos o a financiar los de sus cuates. Algunos se adentran en las contiendas políticas nacionales como misión, abandonando su razón de ser.
- Hemos construido un costoso y no muy representativo poder legislativo que no le reporta a la ciudadanía, sino a los intereses particulares de los propios legisladores y sus jefes políticos. Las decisiones no se toman luego de debates relevantes, negociaciones entre partidos o convencimiento individual, sino de “intercambios” no siempre sacrosantos. Las oficinas privadas -el lujo, pinturas y otras muestras de potencial corrupción- de algunos legisladores son prueba fehaciente de los criterios que animan sus decisiones y acciones.
- Las empresas elevan su productividad de manera prodigiosa, pero los comercios se ven acosados por extorsionadores que demandan “derecho de piso.”

“López Obrador se propone cambiar todo esto, pero no es obvio que tenga un plan.”

- El gobierno federal restaura el control de las finanzas públicas, pero las demandas de mayor gasto por parte de alcaldes, gobernadores y secretarios, tanto en Hacienda como en San Lázaro, son infinitas.
- Los legisladores aprueban leyes electorales y en materia de corrupción, pero en el camino crean mecanismos para violarlas, como ilustra, particularmente, el financiamiento de campañas.
- Se promueven ambiciosas reformas, pero luego no se quiere pagar el costo de implementarlas.
- Se construye infraestructura con frecuencia mediocre que usualmente es insuficiente el día en que se inaugura. Peor, no se mantiene o vigila: cualquiera que haya circulado por el circuito



mexiquense podrá observar la presencia de huachicoleros y asaltantes, pero no la de un policía que cuide a quienes por ahí transitan.

Ejemplos hay miles y todos sabemos y vemos éstas y muchas otras manifestaciones de lo que es nuestro país: los extraordinarios avances y el enorme desperdicio. Se emprenden proyectos de enorme alcance y valía -igual en materia de reformas estructurales que de infraestructura, construcción de instituciones (como la Suprema Corte) y liberalización de mercados- pero luego se les limita por los absurdos de nuestro sistema político y, muy especialmente, por la indisposición del viejo sistema político a abrirse y ceder en sus privilegios.

Como en la novela del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, relativa a una misma persona que tiene dos caras, una buena y una perversa, el gobierno mexicano -en realidad, el sistema político, porque incluye a todos los que ahí participan- es dos cosas a la vez: un ente progresista y promotor de cambios y desarrollo, por un lado, y un bodrio que explota a la población, depreda de ella y



pretende que nadie se da cuenta, por el otro. Desde luego, es imposible ver cada una de las fechorías que ocurren en todos los ámbitos del sector público, a todos los niveles de gobierno, desde el municipio más modesto hasta la presidencia, pero lo que es indudable es el efecto general: las cosas no se concluyen porque eso implicaría afectar a alguno de los beneficiarios del sistema. Y, en esto, todos los partidos son iguales.

Todo esto hace perfectamente explicable la incredulidad del ciudadano común y corriente cuando un funcionario afirma que la obra pública que realizó va a transformar a su municipio o cuando un secretario de estado elogia una determinada reforma. Difícil de creer porque los beneficios toman tiempo, pero también porque muchas veces éstos no son como se anunciaron: el segundo piso en la Ciudad de México resolvió el transporte entre extremos de la ciudad pero no se pensó en las bajadas a la realidad cotidiana, la de los embotellamientos interminables.

López Obrador se propone cambiar todo esto, pero no es obvio que tenga un plan. Más allá de una visión muy clara y acabada de lo que quiere lograr y de una serie de ideas u obsesiones que lo animan, como mostró con el aeropuerto de la ciudad de México, su plan es ir “haciendo camino al andar”. El problema es que esa no es una receta para el éxito por tres razones: primero, porque el apoyo de que gozó al inicio no es permanente ni inmutable, depende de que vaya satisfaciendo a la población. Segundo, la única forma de avanzar es atacando las causas de los problemas y no sus síntomas y para eso se requiere, ante todo, disposición pero, sobre todo, un plan a largo plazo. Finalmente, el tiempo nunca va a favor de un presidente: cuando no se planea desde el inicio, los programas comienzan tarde y nunca llegan a fructificar.

El país va a cambiar, y dejar de ser tan rijoso, cuando deje de haber un Jeckyll y un Hyde, cuando el gobierno se dedique a resolver problemas y gobernar para todos, no sólo para sí mismo.





López Obrador y el poder

El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Lord Acton

López Obrador pretende reconcentrar el poder como medio para restaurar la rectoría del Estado. Su planteamiento es que el país funcionaba en la era del desarrollo estabilizador porque el gobierno establecía prioridades y tenía el poder para hacerlas realidad. El problema es que aquel esquema se colapsó por sus propias limitaciones y porque el mundo cambió. El esquema dependía de una economía cerrada y un firme control sobre la población, la información y los factores de la producción: los empresarios y los sindicatos. Cada uno de estos elementos fue desapareciendo, tanto por decisiones internas como por transformaciones que tuvieron lugar en la economía mundial y que impactaron a México. Para los ochenta era claro que, para recobrar su capacidad de crecimiento, México debía incorporarse en los circuitos económicos, financieros y tecnológicos del mundo. Sin embargo, la forma en que el país intentó adaptarse al cambio que caracterizaba al mundo no fue la más feliz, pues nunca hubo un plan integral de adaptación y jamás se crearon los mecanismos necesarios para construir una plataforma de cambio que permitiera que toda la población tuviera la oportunidad de ser exitosa. Para cuando se abrieron la economía y el sistema político, México ya había cambiado sin haber construido las instituciones y estructuras que le dieran solidez, viabilidad y capacidad de integrar al conjunto de la sociedad.

Francis Fukuyama²⁰ explica, en un plano conceptual e histórico, lo que nos ha pasado. Su principal conclusión es que el orden de los factores sí altera el producto, pero no de una manera determinista: para que un país logre la estabilidad y el orden que le permita progresar requiere tanto un gobierno competente como un sistema de rendición de cuentas

eficaz, pero si lo primero no existe, lo segundo sólo servirá para hacer imposible el funcionamiento del gobierno. México se democratizó antes de que modernizara su sistema de gobierno, circunstancia que ha hecho prácticamente imposible la reforma del gobierno, aún si eso hubiera estado en el plan de algún candidato o presidente.

Los países que primero construyeron burocracias competentes y eficientes y luego arribaron a la democracia tienden a ser más ordenados, eficientes y no corruptos, pero sus gobiernos son usualmente menos responsivos a las demandas de la ciudadanía. El caso prototípico que ilustra su punto es Alemania, país al que Fukuyama compara con Estados Unidos, donde la democracia precedió a la construcción de un Estado fuerte, por lo que la ciudadanía organizada tiene enorme influencia sobre la toma de decisiones. El extremo del primer ejemplo sería China (muy eficaz pero nada democrático) y el del segundo Grecia (muy democrático pero terriblemente disfuncional). ¿Dónde pondríamos a México?

¿Dónde pondríamos a México?

Una forma de apreciar el argumento del autor es observando los sistemas clientelares: un sistema dedicado al reparto de favores acaba ahogado en la corrupción y es sumamente reacio a ser reformado. El clientelismo, dice Fukuyama, es un “fenómeno ambiguo” porque es “inherentemente democrático” pero también “sistemáticamente corruptor”. Gobiernos dedicados a construir, nutrir y explotar clientelas crean incentivos para que todo mundo vea a la política como una oportunidad de lucro personal.²¹

Cuando Fukuyama evalúa a los países subdesarrollados dice que lo que diferencia a naciones como Corea, Vietnam o China del sub-Sahara africano es que los primeros se caracterizan por la existencia de “Estados altamente competentes, con gran capacidad de acción”, en contraste con aquellos que “no poseen instituciones estatales fuertes”²². La clave, dice el autor, reside en la fortaleza y la capacidad de las instituciones, no en la orientación ideológica o ética (o sea, cultural) de la sociedad. Donde existen instituciones fuertes, hay un gobierno competente, y viceversa.

Sea cual fuere el diagnóstico correcto de la problemática nacional, es obvio que nuestra debilidad en materia institucional es legendaria, lo cual lleva a dos preguntas cruciales: primero, ¿está dispuesto el gobierno de López Obrador a enfrentar una problemática que no tenía en el radar y que a su predecesor lo rebasó? Segundo, ¿tendrá capacidad la sociedad mexicana para aceptar que algunos de los avances en materia democrática son también parte del problema porque hacen imposible la existencia de un gobierno funcional susceptible de rendir cuentas?

Aquí es donde López Obrador podría entrar en la escena para hacer una gran diferencia: en México no ha habido un líder con las condiciones y circunstancias con las que él cuenta para llevar a cabo un cambio tan profundo y trascendente. Él podría concentrar el poder para invertir la forma en que se democratizó el país, construyendo un Estado de derecho e institucionalizando al poder precisamente porque no tiene compromisos con las estructuras tradicionales de poder.

Desde luego, es necesario ser realista respecto a las circunstancias existentes: el país carece de capacidad gubernamental incluso para lo más elemental: seguridad, justicia, infraestructura y disposición a generar certidumbre entre la población. Por otra parte, López Obrador se caracteriza precisamente por una extraordinaria capacidad y habilidad, en adición a su liderazgo, para hacer posible lo necesario en aras de construir un gobierno funcional y funcionando. Su gran reto acabaría radicando en la institucionalización no sólo de su propio partido, sino del país en general, todo ello en aras de transformar a México, dejando un legado de crecimiento económico y mayor equidad.

Poder ¿para qué?

El gobierno mexicano ha sido sumamente ineficaz por demasiado tiempo. De la era de control casi absoluto se pasó a una etapa en la que se pretendió que cada actor -en la economía, política y sociedad- se adecuara como pudiera. El gobierno no se adaptó a la cambiante realidad del país, perdiendo con ello eficacia, la cual es el reclamo generalizado del electorado. López

Obrador pretende recrear las viejas estructuras de control, algo imposible en esta era, tanto por lo que ha cambiado el país en términos demográficos, económicos y políticos, como porque los instrumentos de control que eran asequibles en los sesenta simplemente no existen en la actualidad: un simple teléfono “inteligente” empata la capacidad de estar informado del ciudadano frente al poder. Sin embargo, como se argumenta antes, la reconcentración del poder tiene sentido si se contempla como un instrumento de cambio y transformación, es decir, para hacer viable la descentralización que es prototípica de la era de la información y del conocimiento, que es la única a la que podemos aspirar si queremos crecer con celeridad.

Pero el control no es un elemento unívoco ni unidireccional. Si se observa al control desde la perspectiva ciudadana –en lugar de exclusivamente desde el poder– la visión acaba siendo muy distinta y quizá explique por qué tantas reformas de las últimas décadas –estructurales y electorales– fracasaron en crear una plataforma para la estabilidad del país, el crecimiento de la economía y un sistema de gobierno más ágil y responsivo a las necesidades del desarrollo. Una muestra de la forma en que ha evolucionado la percepción de la ciudadanía luego de años de perdición y desesperación ha sido el rechazo a todo lo existente, la burla de los gobernantes, el voto en contra de quien detenta el poder, confiando en que el abuso no podría ser peor. La realidad del mexicano frente al poder recuerda el famoso intercambio entre el presidente argentino Carlos Ménem y la madre de Facundo Cabral: según el relato, Ménem saludó cariñosamente a la mamá del cantante, diciéndole algo muy parecido a esto: “Señora, soy un gran admirador de su hijo. Dígame por favor si hay algo que pueda hacer por usted”. Al parecer, la madre de Cabral, después de un breve silencio, le espetó: “Con que no me joda, es suficiente”²³.

López Obrador haría bien en no olvidar que así piensa la mayoría de los mexicanos, incluidos los que votaron por él.

PRESIDENTE

2018





¿Qué hacer?

Vivimos la primera gran resaca del nuevo orden mundial surgido por la globalización, un mundo que no es estático y que se caracteriza por el cambio constante. Un cambio que a muchos aturde. La mundialización es una realidad cargada de oportunidades y retos, creadora de riqueza (el nuevo capitalismo necesita ajustes, como los ha necesitado en todos los cambios de era, pero sigue siendo el sistema que más libertad y riqueza ha creado y repartido en la historia de la humanidad), pero cuenta aún con el talón de Aquiles de la ausencia de gobernanza que nos permita saber y corregir sus extralimitaciones. La crisis es de confianza, y la confianza es uno de los pilares fundamentales de la democracia.

Borja Sémpér

Vladimir Ilich Lenin escribió un texto con este título al inicio del siglo XX. Su argumento central consistía en que la clase obrera no se convertiría, de manera automática, en un movimiento político a través de la lucha cotidiana por asuntos de empleo y salarios, sino que tendría que constituirse en un partido político dedicado a transformar a la política. Me parece que López Obrador tiene que pensar de esta misma manera, pero en los términos del siglo XXI, en que las circunstancias en nada se parecen a los años del PRI ni mucho menos a los de Lenin.

López Obrador tiene una oportunidad excepcional. Su visión es la de reconcentrar el poder para desde ahí transformar al país. No es el primero que concibe la solución de los problemas del país en estos términos pero, como dice Macario Schettino²⁴, en lugar de una cuarta transformación, lo más probable es que logre un cuarto fracaso, luego de las reformas

Borbónicas, liberales y estructurales del siglo XIX para acá. La alternativa es convertirse en el gran transformador de las instituciones para construir el

“La ciudadanía, que por dos décadas optó por presidencias débiles a través de gobiernos divididos, ahora le otorgó un mandato claro y contundente al presidente López Obrador. La pregunta es qué hacer con ese mandato.”

siglo XXI mexicano. Aunque eso implicaría traicionarse a sí mismo porque va en sentido contrario a sus convicciones expresadas a lo largo del tiempo y de sus escritos, su legado sería invaluable para todas las generaciones futuras.

El electorado no fue tímido en su juicio sobre las pasadas décadas: el mandato que recibió el hoy presidente fue extraordinario y entraña un mensaje transparente y trascendente. La ciudadanía,

que por dos décadas optó por presidencias débiles a través de gobiernos divididos, ahora le otorgó un mandato claro y contundente al presidente López Obrador. La pregunta es qué hacer con ese mandato.

Por supuesto, López Obrador tiene una idea clara de lo que quiere hacer y todos sus planteamientos y movimientos a la fecha conducen a la construcción de un andamiaje de control que busca reconstruir la presidencia fuerte de los sesenta para ejercer una plena rectoría sobre los asuntos generales, especialmente sobre la economía. La mirada sobre los sesenta tiene sentido: fue entonces cuando aquel sistema alcanzó su punto más álgido de conducción económica, combinando la inversión en infraestructura organizada desde el gobierno, con la capacidad productiva de la inversión privada. Fue entonces cuando se cocinaron proyectos como Cancún, se electrificó el sureste del país y se construyeron varias de las principales carreteras que hasta hace no mucho eran las únicas con las que se contaba. El punto central era que, aunque había corrupción, la capacidad para concentrar fuerzas y recursos era enorme.

El recuerdo de esa era, como la del porfiriato medio siglo antes, constituye un enorme atractivo para un gobierno que se propone cambiar la dirección del desarrollo del país. Tanto así que, en esa concepción, no fue muy distinta la intención del gobierno que precedió al actual. Pero es importante reconocer que esas dos eras de elevado crecimiento con estabilidad

terminaron mal porque fueron incapaces de resolver las contradicciones inherentes a su propia fortaleza.

El caso del porfiriato es evidente por el simple hecho de que aquel sistema estaba indisolublemente ligado a la persona del presidente y siguió su ciclo natural de vida. El porfiriato nació y terminó con Porfirio Díaz porque no hubo mecanismo -ni disposición- para construir una sucesión pacífica y, dado que ninguna persona es permanente, tanto el ascenso como el declive fueron marcados por la biografía del personaje. Las contradicciones entre las necesidades del país y las limitaciones de la persona se exacerbaban: el resultado fue la Revolución Mexicana.

La era del PRI duro concluyó por razones distintas. En algún sentido, como en su momento afirmó, Roger Hansen²⁵, el PRI no fue otra cosa sino el porfiriato institucionalizado. Aquel sistema no terminó por el desgaste de una persona, sino por la cerrazón que inevitablemente acompaña -y caracteriza- al control centralizado. El ciclo comienza con todas las virtudes de ideas nuevas, expectativas positivas, buena disposición y la promesa de, ahora sí, resolver los problemas medulares del país. Sin embargo, una vez que se concentra el poder, la otrora apertura desaparece y los vicios y excesos de las personas en el poder dominan el panorama. El éxito del crecimiento genera nuevas fuentes de poder; necesidades que no son tolerables para quien controla; e, inevitablemente, desafíos explícitos o implícitos al sistema, como ocurrió con el movimiento estudiantil de 1968.

El fin del sistema priista no fue tan estruendoso como el del porfiriato, pero fue igualmente catastrófico porque inauguró la era de crisis financieras -1976, 1982, 1995- que empobrecieron a la población y destruyeron a la incipiente clase media una y otra vez. Todas las virtudes de la era priista se vinieron abajo al tratar de satisfacer, de manera artificial, a todas las bases y clientelas del sistema, provocando la hecatombe que, bien a bien, y a pesar de tantas reformas, no ha concluido.

La centralización en la era del conocimiento

El mundo cambió de manera radical en las últimas tres décadas del siglo pasado. Primero, la forma de producir a escala industrial se transformó, creando lo que se conoce como globalización, donde la fabricación de bienes se distribuye a lo largo y ancho del mundo, dependiendo de la cercanía a los mercados o a las materias primas y de la competitividad de cada región. México llegó tarde a ese proceso pero, una vez que lo abrazó, se convirtió en una de las grandes potencias exportadoras.

En segundo lugar, las economías de mundo experimentaron una creciente integración gracias a la liberalización de los flujos de comercio, los intercambios financieros y la disponibilidad de tecnología. Cada uno de esos factores sigue su propia lógica, pero el efecto del conjunto ha sido la internacionalización de las economías. La principal consecuencia de este cambio ha sido que la economía mexicana dejó de estar aislada y que su estabilidad -y progreso- depende de la capacidad que desarrolle para competir exitosamente. Hoy, un egresado de una preparatoria o universidad mexicana compete con sus pares no sólo en su ciudad, sino con los egresados del mismo nivel en todo el mundo. Esta es la razón por la cual la educación se ha vuelto tan central al desarrollo del país y a las oportunidades que logre asir cada uno de los mexicanos.

Tercero, el advenimiento de Internet y los teléfonos inteligentes alteraron las relaciones de poder en todas las sociedades del mundo, toda vez que la información que antes era exclusiva y controlada por el gobierno ahora es ubicua y al alcance de cualquier ciudadano. Hoy un modesto ciudadano puede tomar decisiones con la misma información que tiene el presidente de la República.

El común denominador de estos tres cambios es la alteración de las relaciones de poder dentro de cada sociedad. Más al punto, ya no existen decisiones que sean meramente locales o nacionales: hoy todas las economías están integradas, la información es instantánea y lo que se decide en un lugar tiene efectos inmediatos en todo el resto del mundo. Cuando el presidente de México decide cancelar un proyecto de infraestructura ya muy avanzado, su actuar tiene consecuencias inmediatas en todos los mercados del orbe; si además lo hace con criterios políticos, todos los inversionistas del mundo

-locales y extranjeros, en esto no hay diferencia- reaccionan de inmediato, cambiando sus percepciones respecto al país y a su gobierno. El problema de esto es que construir la certidumbre en un gobierno toma años, pero una sola decisión puede destruirla ipso facto.

En este contexto, volviendo a la propuesta del presidente López Obrador de reconcentrar el poder, no es ociosa la pregunta de ¿para qué centralizar y controlar? Centralizar el poder para evitar la dispersión y mal uso de los recursos públicos, enfocar el gasto y controlar a actores como los gobernadores que, de manera natural, tienen una propensión centrífuga, tienen todo el sentido del mundo. Aunque un esquema como éste entraña riesgos (porque se concentran las decisiones), los beneficios en la forma de mayores logros potenciales son evidentes (como ocurría hace cincuenta años cuando el gobierno decidía crear, de la nada, un oasis como Cancún). El problema es que, como ocurrió en los sesenta y setenta, un esquema así no es sostenible ni duradero.

Frente a la nueva realidad, posterior a la decisión relativa al aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente López Obrador tiene dos alternativas. Por un lado, podría perseverar en su visión, a contracorriente dado que ya no cuenta con la confianza de la inversión productiva nacional o internacional. Por el otro, podría abocarse, como se propone en este texto, a construir una nueva era institucional, quizá contraria a su visión histórica, pero mucho más susceptible de arrojar resultados favorables en términos de crecimiento económico, menor pobreza y mayor igualdad social. Es decir, hacer social y políticamente posible y viable la modernización de México.

La oportunidad

La legitimidad de la elección y el inmenso apoyo popular de que goza el presidente López Obrador le confieren un enorme margen de maniobra. La gente votó por él por la confianza que se ganó, mucho más que por lo específico de su proyecto. Mi propia experiencia asistiendo a uno de sus mítines fue reveladora, como lo relaté en el capítulo VI. Ahí mismo pude constatar que su éxito no se derivó de un mensaje verbal, sino de su extraordinaria capacidad de identificación con la población. Esto indica que

su verdadero mandato es el de lograr la transformación más que realizar cada uno de los proyectos que mencionó a lo largo de su campaña.

“Mi propuesta sería que se abocara exactamente a lo contrario para lograr los objetivos que dice perseguir...”

La legitimidad y apoyo populares no son eternos ni inmutables. Más allá de un periodo de tregua, la ciudadanía comenzará a exigir resultados. Como van las cosas, esos resultados serán imposibles de lograrse por el simple hecho de que el gobierno no tiene la capacidad de llevarlos a cabo y, al alienar a la inversión privada, ha eliminado la única alternativa que le quedaba. Esto lo coloca ante la

disyuntiva de seguir por donde iba o construir un nuevo régimen, un nuevo paradigma. Nunca en mi vida, o en los periodos de nuestra historia que he estudiado, he visto una oportunidad tan grande como la que hoy tiene López Obrador en sus manos.

El caso de China es relevante para el momento que vive México. Por cuatro décadas, China ha experimentado tasas de crecimiento extraordinarias, superiores a las que cualquier otra nación hay visto por tantos años consecutivos. Lo logró gracias a una combinación exitosa de un gobierno muy enfocado y reformas que liberalizaron los mercados y crearon oportunidades antes inconcebibles en la otrora nación comunista. Lo relevante para el México de hoy y, sobre todo, para el nuevo presidente, radica en que el actual líder chino, Xi Jinping, ha comenzado a dismantelar aquella red de reformas que originalmente encabezó Deng Xiaoping: su objetivo hoy parece consistir en reconcentrar el poder y ejercer un mayor control. Es decir, Xi está intentando exactamente lo mismo que López Obrador pretende: revertir los factores que le han dado a su país una nueva base de desarrollo en aras de lograr un mayor control. Lo interesante de la comparación entre las dos naciones es que, aunque las circunstancias son evidentemente muy distintas, en ambos existe un profundo rechazo a lo que se ha avanzado, sumado a la suposición de que es posible retornar a un pasado idílico.

A lo largo de su campaña, López Obrador planteó cuatro objetivos claros: crecimiento económico, reducción de la pobreza, combate a la corrupción e igualdad. Sus propuestas para lograrlos son en general vagas y no siempre

idóneas para resolverlos. Mi propuesta sería que se abocara exactamente a lo contrario para lograr los objetivos que dice perseguir: enfrentar a la falta de crecimiento con una nueva estructura institucional que garantice la igualdad de acceso; construir un sistema educativo que prepare al mexicano para los retos del siglo XXI y no para la obediencia demandada al final del siglo XIX; eliminar las facultades discrecionales en las regulaciones y leyes a fin de garantizar la transparencia en compras, contratos y permisos; e imponer reglas claras, predecibles y conocidas por toda la población, difíciles de cambiar, que aseguren la certidumbre de la ciudadanía en el gobierno.

En términos filosóficos, el objetivo sería liberar al mexicano de la pobreza ofreciendo a todos la posibilidad de una vida digna en donde desarrolle al máximo su potencial; liberarlo de políticos corruptos que prometen mucho pero que sólo logran beneficios para sí mismos; liberarlo de la impunidad que hoy permite cualquier cosa y de quienes no ven un futuro en el país porque creen que México siempre será, y tiene que ser, pobre y corrupto. El propósito sería ofrecer oportunidades para todos, dentro de un clima de seguridad y tranquilidad para realizar sus actividades y desarrollarse al máximo de su potencial; lograr la prosperidad y empleo productivo para todos; y tener una población educada, capaz de asir para sí, y para el país, las ingentes oportunidades que ahí están pero que el sistema político y educativo tradicional ha hecho imposible lograr.

Hacia un proyecto incluyente de alto crecimiento

La esencia de un proyecto incluyente que avance hacia tasas de crecimiento elevadas radica en tres elementos: igualdad de acceso y oportunidades; prosperidad y productividad; y reglas claras y predecibles. La racionalidad de esta tríada es evidente:

- Primero, con mucho, el problema más grande que enfrenta el país es la profunda inequidad de acceso que caracteriza a la sociedad. No es la pobreza en sí misma, sino la alienación, la discriminación y la falta de acceso las que determinan la imposibilidad de progresar, salir de la pobreza, prosperar y ser parte de la movilidad social que yace en el corazón del desarrollo de cualquier sociedad. La mexicana

es una sociedad que limita el acceso a la educación, al crédito, a la información básica, a las comunicaciones y a la infraestructura. Ser pobre en México implica estar condenado a estudiar en escuelas que no enseñan ni permiten aprender, limitan el conocimiento y preservan la pobreza; depender de la voluntad del gobernante para poder contar con los mínimos implementos, insumos y recursos que permitan sobrevivir; y tener vedado el acceso a los gobernantes, potenciales empleadores o fuentes de formación y desarrollo personal, familiar y profesional. Las personas y familias que logran romper con el círculo vicioso de la pobreza son aquellas que salen del esquema tradicional y se valen por sí mismas, algunas fuera de México. Un gobierno convencido de la necesidad de romper con la pobreza debería comenzar por crear las condiciones para que toda la población, comenzando desde abajo, tenga acceso a la mejor educación, salud, a la mejor infraestructura y a toda la información. O sea, al revés de lo que ocurre en la actualidad, pero también al revés de lo que López Obrador ha propuesto, que no constituye otra cosa más que la atenuación de los síntomas de la pobreza en lugar de la erradicación de sus causas.

- Segundo, ninguna sociedad crece y se desarrolla sin que crezca la productividad. Ésta, como dijo Krugman²⁶, “no lo es todo, pero en el largo plazo determina los niveles de vida, la capacidad de lograr altas tasas de crecimiento y mejores ingresos.” La productividad crece cuando existen condiciones idóneas en los diversos planos que afectan el funcionamiento de la vida productiva: calidad de la infraestructura, formación de los trabajadores (educación y capacitación), niveles de inversión, tecnología, habilidad empresarial y entorno de cordialidad social y dentro de las propias empresas. Al gobierno le toca crear el marco normativo y político que haga posible que todos estos factores se conjunten para que sea posible el esfuerzo social integral que produce crecimientos de la productividad y, por lo tanto, la prosperidad. En esto no hay forma de cortar esquinas: existen las condiciones o no se logra el objetivo.
- Contar con reglas claras, conocidas y predecibles es clave para el exitoso funcionamiento de la economía, la interacción entre

gobernantes y gobernados y los intercambios entre actores de la sociedad misma. Estas reglas son la base para el desarrollo y la civilización. Tampoco aquí se pueden cortar esquinas: el Estado de Derecho protege al ciudadano y le crea un entorno de claridad respecto a sus derechos y obligaciones, así como mecanismos para hacerlos valer. Como afirma Tom Bingham²⁷, el Estado de Derecho no es un conjunto de leyes sino una serie de principios fundamentales que norman el comportamiento de una sociedad. Entre esos principios se

encuentran los siguientes: la ley tiene que ser accesible, inteligible, clara y predecible; los temas de derechos y responsabilidades deben ser resueltos por la aplicación de la ley y no por medio del ejercicio de la discreción; las

“..la interacción entre gobernantes y gobernados y los intercambios entre actores de la sociedad misma. Estas reglas son la base para el desarrollo y la civilización.”

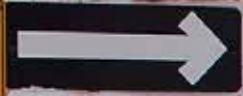
leyes se deben aplicar de manera uniforme a todos, cualquiera que sea su rango o condición, excepto en los casos en que diferencias objetivas justifiquen una diferenciación; deben proveerse los medios, sin un costo excesivo y sin dilación, para que se resuelvan disputas legítimas que las personas no puedan arreglar entre sí. Cada uno de estos principios y otros más que no incluí en esta lista tienen una larga historia que les da contenido y sustento. Más importante, le confieren certidumbre a la ciudadanía. La explicación de Bingham no es muy distinta a la de Douglas North²⁸, quien escribió que, en esencia, el Estado de derecho implica “que el gobierno en todas sus acciones se encuentra sujeto a reglas fijas y anunciadas de antemano –reglas que hacen posible prever con suficiente certeza la forma como la autoridad usará sus poderes coercibles en determinadas circunstancias”. El corazón del asunto es la certidumbre y predictibilidad que, en una sociedad grande, compleja y diversa, “sólo lo puede proveer el Estado de Derecho que, al ser transparente, universal e igual para todos, asegura la adhesión a principios que liberan y protegen”.

Los tres componentes están íntimamente vinculados entre sí y todos tienen que estar presentes para que se dé el acceso del conjunto de la población al progreso, la prosperidad y el crecimiento de la productividad. Avanzar cada uno de estos factores requiere una estrategia explícita, pero sólo el conjunto permite lograr el objetivo a cabalidad.

Acceso quiere decir contar con los elementos que garanticen una igualdad real y efectiva entre todos los mexicanos, independientemente de su origen socio económico o lugar de nacimiento. En un país en que el acceso se vincula con tener conocidos (el know who), la mayoría de la población siempre quedará excluida del desarrollo porque jamás podría haber igualdad de oportunidades en ausencia de ese acceso. En la práctica, el desafío nodal que esto representa tiene que ver con transformar las condiciones y el entorno en los que viven los menos favorecidos: en la actualidad, la población más pobre es también la que cuenta con peores servicios de educación, peor calidad de infraestructura y nulo acceso a la justicia, crédito u otros medios clave para la movilidad social. El esfuerzo gubernamental tendría que localizarse en crear condiciones para que se reviertan todas estas realidades centenarias.

Lo que sigue son algunas líneas que podrían servir de guía para aterrizar cada uno de estos principios.

COL. JESUS TERAN
LIC. FRANCISCO
RAMIREZ MTZ.
FRACC. LIC. BENTO VELAZCO DOMA C.B. 2072



LUIS FERN

PELLETTA

OMI
ALA
VISTA

MUÑO

DIPUTADO DIST
AGUASCALIENTES



Un proyecto de inclusión acelerada

No puedo concebir a un mercado más disfuncional en este momento que el de la educación. La mayor parte de la educación se encuentra desconectada de las necesidades de los estudiantes y del mercado de trabajo.

Rana Foroohar

Hay dos lecciones relevantes de la era del desarrollo estabilizador, que arrojó las mayores tasas de crecimiento que el país jamás haya experimentado. Una es que el éxito radicó en un proyecto claro de desarrollo con prioridades bien establecidas. La otra es que la población se benefició de manera directa en la forma de una gran movilidad social. México pasó de ser un país rural al final de la Revolución a ser un país esencialmente urbano en los sesenta, con una pujante clase media. A nadie le puede quedar duda alguna de por qué es tan atractivo el modelo.

Si uno sigue el perfil biográfico de las personas más conocidas de la era posrevolucionaria en el gobierno, en el ejército, en el sector privado y en toda la gama de actividades culturales, académicas y artísticas, la abrumadora mayoría de los mexicanos prominentes en la segunda mitad del siglo pasado surgió de las zonas rurales y, gracias a la extraordinaria movilidad social, salió de la pobreza para desarrollar al máximo su potencial personal. El hijo de uno de los más prominentes funcionarios gubernamentales de los cincuenta y sesenta cuenta su historia: “nacé en la comodidad que podía brindar un burócrata; mi padre era hijo de un músico, a su vez hijo de un arriero quien, tan pronto tuvo educación, toda ella pública, salió adelante. De los que me conocen hoy en día quizá pocos sepan que esa es mi historia porque no imaginan que la educación de antes permitió ese cambio de manera natural. Hoy que se ha dejado caer la educación pública sería imposible repetir mi historia que, seguro, es la de casi toda mi generación.”

La gran historia del siglo XX mexicano no radica en el gobierno fuerte, aunque esa haya sido una característica de la época, sino en la movilidad

social que transformó al país y le abrió la oportunidad de progresar y prosperar. Lo que es claro es que un gobierno bien estructurado y con un sentido claro de dirección puede establecer prioridades y crear condiciones para el desarrollo, tal y como ocurrió en la era del desarrollo estabilizador.

Sin embargo, hoy, cincuenta años después del fin de aquella era, somos un país cada vez más desigual en buena medida porque el sistema educativo dejó de cumplir su cometido. La educación pública tiene amplia cobertura, pero no prepara a los mexicanos para desarrollarse en la vida. El profesorado prototípico no cuenta con las habilidades necesarias, ni mucho menos con la capacitación frecuente que se requiere para poder crear las oportunidades para que cada niño tenga la misma posibilidad de ser exitoso en la vida que los mexicanos más afortunados en la actualidad, independientemente de su origen socioeconómico. La educación privada ha cubierto una pequeña porción de la población, pero la única forma de romper con el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad radica en el sistema educativo público que, desde los setenta del siglo pasado, se convirtió en un impedimento a la movilidad social porque fue tomado por caciques dedicados al control político y a la expoliación más que al educando.

“Primero los pobres,” el lema que ha enarbolado López Obrador y al que Julieta Campos²⁹ desde hace décadas le dio sustento intelectual, puede avanzarse de muchas maneras, pero sólo una es susceptible de lograrlo, y esa es la que, en términos técnicos, se llama “capital humano,” que no es otra cosa sino educación y servicios de salud. Una persona que cuenta con acceso a esos dos medios para el progreso puede romper con el círculo vicioso de la pobreza al contar y desarrollarse en toda su capacidad. Eso, más que el gobierno mismo, es lo que permitió la movilidad social en el siglo XX y es lo que México perdió desde que el sistema educativo se convirtió en un instrumento político de manipulación, control y explotación por parte de políticos y líderes dedicados a la política más que al desarrollo de las personas. De hecho, fueron los gobiernos “fuertes” de los setenta, es decir, aquellos con el poder para imponerse sobre la sociedad, quienes cambiaron la lógica de la educación y de la política en el país: fue a partir de entonces cuando desapareció la prioridad de promover la movilidad social y cuando se tergiversó el objetivo de la educación con otros menesteres políticos de menor trascendencia.

El cambio que ocurrió en los setenta no fue menor: no fueron sólo los libros de texto que incorporaron un elemento ideológico novedoso, sino toda la

filosofía que conducía al proyecto educativo, donde lo importante dejó de ser el educando para convertirse en el avance del líder o, en todo caso, de un proyecto político-ideológico distinto. Fue ahí donde surgió, y se volvió ubicua, la noción de que unos son pobres porque otros progresan. Con esa lógica, el gobierno mismo propició la lucha de clases, cerrándole la puerta a la abrumadora mayoría de la población, cuya única salida podía ser una educación integral para el éxito.

La clave de un futuro exitoso radica en invertir la lógica que, desde entonces, ha dominado al desarrollo de la educación. El proyecto dedicado a los “ninis” (jóvenes que no estudian ni trabajan) podría ser un principio si se concibe menos como un subsidio y una clientela que como un medio para el desarrollo de las capacidades de los individuos en el entorno de un país con grandes aspiraciones.

Un proyecto educativo de esta naturaleza se puede convertir en un boleto a la inclusión si se vincula la educación y la salud con el mercado de trabajo: la pregunta es qué habilidades y profesiones están siendo demandadas para preparar jóvenes que, en consecuencia, tengan acceso directo al mercado de trabajo. Esa fue la concepción original del Instituto Politécnico Nacional, cuyos egresados siguen siendo demandados por los empleadores porque empata la formación con la demanda. En sentido contrario, hay muchos más taxistas egresados de carreras como derecho, economía y arquitectura que de las ingenierías y escuelas técnicas. Este no es un argumento para negar el desarrollo de las preferencias de los individuos, sino solamente para que quienes tienen vocación en las áreas más demandadas se formen en ese contexto. Un gobierno enfocado en esta concepción podría estructurar todo el sistema educativo y de salud en concordancia con las fuentes de becas para transformar al conjunto.

El primer paso hacia el futuro es la igualdad de acceso pues, en ausencia de esa igualdad más fundamental y esencial, es inconcebible la movilidad social. “Primero los pobres” necesariamente tiene que pasar por un sistema educativo transformado que le confiera todas las oportunidades a quienes no las tienen de origen ni las han tenido porque la movilidad social hace décadas dejó de ser una prioridad.

La pregunta clave para el nuevo gobierno es cómo avanzar este principio de manera certera, lo cual entraña una pregunta nodal: ¿para qué es el gobierno?



Future

Past

¿Hacia atrás o hacia adelante?

Los seres humanos, que son casi únicos por poseer la capacidad de aprender de la experiencia ajena, también son notorios por su aparente repugnancia a hacerlo así.

Douglas Adams

Muchos de quienes votaron por López Obrador viven en la desazón desde hace tiempo. Y no es para menos: es fácil acabar descorazonados cuando uno otea los problemas que el país enfrenta. Al menos a primera vista, la economía no parece mejorar, la inseguridad cobra nuevas formas -y víctimas- cada día y la sensación casi generalizada es que todo no puede más que empeorar. Sin embargo, si uno ve hacia atrás, lo impactante es el ritmo de cambio tan extraordinario que ha caracterizado al país. Es fácil pensar que todo lo de antes era bueno pero, además de que es imposible volver atrás, no todo lo era. A pesar de nuestros problemas y desaseos, el cambio físico del país, la transformación productiva y la extraordinaria modificación que han sufrido los parámetros de todo lo que nos rodea -desde la forma en que elegimos gobernantes hasta la libertad de expresión- hablan por sí mismos. Claro que la vida se ha tornado más compleja, fenómeno universal, pero nadie con una mínima sensatez puede dejar de apreciar lo impactante que ha sido el cambio que hemos experimentado.

Pero no todo mundo en nuestra vida pública parece haberse percatado de todo lo que ha cambiado. Nadie en ese mundo parece recapacitar sobre la extraordinaria transformación que ha sufrido la población y, con ella, el país en general. Desde luego, no todo lo que hoy tenemos es mejor que lo que había, pero es ciertamente imposible pretender que nada ha cambiado o que no ha habido una multitud de cambios extraordinariamente favorables.

La noción de que debemos volver al pasado, ahí donde las cosas supuestamente funcionaban, ignora dos cosas. Una, que ese pasado terminó

porque, como argumenté antes, éste dejó de ser posible: cambiaron las circunstancias y, con ello, la viabilidad del esquema. Por otro lado, el mundo se transformó y el país no tuvo alternativa más que intentar adecuarse a esos cambios, aunque no siempre de buena manera y con frecuencia con más promesas que éxitos. En este sentido, la pretensión de querer meter al genio de vuelta en su lámpara mágica es humana, pero no es algo mucho más serio o creíble que la noción de tratar de meter la pasta de dientes de regreso a su envase. Sin embargo, esa es la tónica del debate y las actitudes que caracterizan al mundo político en la actualidad. La idea de regresar al pasado revela una total ausencia de comprensión de la verdadera convulsión que ha sobrecogido al país.

En los pasados veinte años el país transitó por dos grandes revoluciones que alteraron todo en la vida cotidiana y que no se pueden echar para atrás. Por un lado, el país experimentó la transformación de su aparato productivo a partir de la liberalización de las importaciones. Gracias a esa acción, que comenzó a mediados de los ochenta, las familias mexicanas han tenido acceso a vestimenta, calzado, alimentos y bienes duraderos de mejor calidad y menor precio. La competencia que han representado las importaciones ha permitido y, de hecho, ha obligado, a que se modernice el aparato productivo, todo para beneficio del consumidor nacional. Con todas las limitaciones y problemas, hoy disfrutamos de bienes y servicios a precios que antes eran inconcebibles. La planta productiva es competitiva, las exportaciones han demostrado que la calidad nacional es tan buena como la mejor del mundo y los trabajadores que son parte de esta revolución disfrutaban de niveles de ingreso muy superiores a los de sus predecesores en la era de la economía autárquica.

La otra revolución es la política. Aún con las enormes imperfecciones de nuestra democracia, los mexicanos gozamos de libertades que eran impensables en la era posrevolucionaria, con todo y que no se trató de una dictadura de corte sudamericano. Hoy elegimos gobernantes, votamos y los votos se cuentan, algo que, por cierto, muchos en la coalición de Morena todavía no reconocen. Quizá más importante, hoy gozamos de libertades sin cortapisa, al menos por parte del aparato político. El mexicano se ha acostumbrado a decir lo que piensa y a actuar de manera libre.

Poco a poco, las dos revoluciones han ido transformando nuestra realidad en todos los niveles y regiones. La gente se acostumbra a la libertad, el mérito

se convierte en el vehículo de ascenso en la vida productiva y, por encima de todo, crece y se multiplica la sensación de oportunidad y posibilidad: los mexicanos se demuestran que son capaces de funcionar y de ser exitosos por sí mismos. En una palabra, el mexicano poco a poco se va transformando en un ciudadano.

La incompreensión de la transformación se nota en muchos niveles: en el reclamo de más gasto y menos transparencia; en el gasto faraónico en lugar de infraestructura productiva (y en obras sin proyecto ni sentido común, como el tren rápido a Toluca); en la necesidad de sostener y afianzar a sindicatos que impiden el progreso y desarrollo de sectores enteros, pero sobre todo el de la población sin acceso ni oportunidad, comenzando por la educación; en la mitología de la explotación de los recursos naturales; en la falta de reconocimiento de la trascendencia de la legalidad para el funcionamiento de la economía; por sobre todo, en el desprecio a la capacidad de la población de valerse por sí misma. Basta observar la transformación que experimentan los migrantes mexicanos al entrar al mercado laboral estadounidense para demostrar que el problema no radica en su capacidad intrínseca sino en un sistema de gobierno que la coarta y nulifica.

Gobierno fuerte

López Obrador ha postulado que el país debe retornar a la era en que el país funcionaba bien, cuando el gobierno federal lo centralizaba y controlaba todo. El planteamiento suena sensato porque apela tanto a la necesidad de reconstruir empatía con una población asediada por la ineficiencia, exclusión e inseguridad, como a la identificación con quienes no se han incorporado, o no se han podido incorporar, a la economía digital, así como con las víctimas de la criminalidad. El problema no es que estos grupos sociales mayoritarios no deban ser atendidos, sino que el pasado no es repetible.

Hace unos veinte años tuve la oportunidad de charlar con don Antonio Ortiz Mena, secretario de hacienda en la segunda etapa del desarrollo estabilizador, una de las eras más estables y de mayor crecimiento económico de nuestra historia. En la charla, le pregunté qué pensaba del momento en que vivíamos, poco después de una de las peores crisis financieras que había

experimentado el país. Su respuesta sigue resonando en mi cabeza hasta hoy: en esencia, me dijo que no había similitud posible con el momento en que a él le había tocado la responsabilidad financiera del país, porque antes las cosas eran, comparativamente, muy fáciles: el gobierno era todopoderoso, los tipos de cambio eran fijos, la economía estaba cerrada, el control sobre sindicatos, empresarios y prensa enorme y, en resumen, la clave de su éxito en aquellos años había radicado en la disposición del propio gobierno a controlarse a sí mismo. Específicamente, me dijo que su principal prioridad era “controlar la chequera” para que el presidente no gastara más de lo que había. O sea, un mundo absolutamente contrastante con el actual, en todos sentidos. Me impresionó su humildad y su claridad mental: el pasado no se puede recrear porque las condiciones son distintas. Siendo así, ¿qué sí se puede hacer?

La única forma de romper el círculo vicioso es salir de ahí: confrontar a la nostalgia con un proyecto distinto que, construyendo sobre lo existente, plantee soluciones y no retornos a lo que no funcionaba, oportunidades en lugar de utopías. Esto puede implicar un nuevo arreglo federal, reformas sociales de diversa índole o iniciativas políticas y económicas que hagan posible la consecución de un nuevo estadio educativo, de infraestructura y de salud, pero sobre todo una nueva visión.

Hasta ahora, por varias décadas, toda la estrategia gubernamental, independientemente de persona o partido, se ha abocado a mejorar marginalmente lo existente, pero siempre sin romper con el statu quo político. López Obrador entraña ese rompimiento, pero sólo va a ser exitoso si replantea su proyecto. Un nuevo arreglo político no necesariamente implica la destrucción de lo existente, pero sí supone dos modificaciones fundamentales: ante todo, cambia el para qué del gobierno. De ahí surge el otro cambio: las prioridades.

Si la prioridad ya no es la preservación del statu quo a cualquier costo, las oportunidades se tornan infinitas y las promesas, que apelan a las emociones, se vuelven creíbles. Todo mundo sabe que lo esencial es seguridad física y patrimonial, certeza jurídica, eliminación de las causas de la corrupción, educación dedicada a la movilidad social e infraestructura (en el sentido más amplio) para un gran futuro. Todo mundo lo sabe, pero un gobierno tras otro ha soslayado esa responsabilidad. La clave radica en romper con los círculos viciosos en que llevamos décadas sumidos y que, a pesar de avances reales, muchos enormes, mantienen paralizado y desmoralizado al país. No es ciencia del espacio.

Gobierno ¿para qué?

Todos los presidentes se sienten destinados a cambiar el mundo, pero ninguno lo ha logrado en el último medio siglo. ¿Qué diferencia podrá hacer el próximo? Los recientes intentaron todo: gasto público exacerbado (Echeverría y López Portillo), pactos (Miguel de la Madrid y Peña Nieto), alianzas (Salinas), acuerdos (Ernesto Zedillo) y tratados (como el TLC). Muchos planes pero los resultados no son encomiables porque ninguno enfrentó el principal reto del país: el de cómo y, sobre todo, para qué gobernar. Con López Obrador existe la oportunidad de una transformación cabal porque goza de una legitimidad inusual, pero sobre todo porque no está comprometido a preservar el statu quo.

Si uno observa al país desde al menos 1964, cuando Díaz Ordaz asumió la presidencia, todos los presidentes comenzaron con grandes proyectos pero, con la sola excepción de Zedillo, acabaron mal: unos porque provocaron crisis incontenibles, otros porque sus actos los desacreditaron al punto de no poder volver a ver la luz pública. Todos prometieron el cielo y las estrellas, pero pocos acabaron bien. Sin duda, algunos dejaron legados trascendentales (como el TLC) y otros construyeron instituciones que han cambiado la naturaleza de la problemática. Todos, cada uno a su manera, intentaron reformar al país para lograr un crecimiento elevado y sostenido, pero ninguno logró que ese fuera el caso para el conjunto de la población.

Hoy es claro que nadie ha querido o ha estado dispuesto a enfrentar el problema de fondo de nuestra estructura institucional y política: aunque mucho ha cambiado, el gobierno ha quedado igual. El país ha vivido una profunda transformación económica, convirtiéndose en una potencia exportadora; la demografía nada tiene que ver con la de hace medio siglo: hoy la población es tres veces mayor y se ha dispersado por todo el territorio, además de sostener contactos e intercambios permanentes con el mundo. Estamos atravesando el momento demográfico más crítico –el llamado bono demográfico– el punto en el cual los jóvenes son la mayoría y, de incorporarse exitosamente al mercado de trabajo, constituirían la plataforma de creación de riqueza más importante para el futuro; de fracasar en este proceso, acabaríamos siendo una sociedad vieja y pobre. No hay margen para donde hacerse.

An aerial photograph of Mexico City at sunset. The sky is filled with dramatic, golden clouds. The city below is densely packed with buildings, and a large highway with multiple lanes is visible, cutting through the urban landscape. The lighting is warm, with long shadows and a golden glow over the city.

“ Si no logra la prosperidad del país, su enorme poder resultará intrascendente.”

Si la economía y la demografía ofrecen ingentes oportunidades, la crisis de seguridad, la pobreza y la rijosidad política constituyen fardos que nos detienen y obstaculizan; todo eso ha impedido que el país prospere y se transforme en una potencia capaz de proveerle exitosamente a toda la ciudadanía. Porque, a final de cuentas, si el propósito de gobernar no es la prosperidad, su función es irrelevante. Y el récord del último medio siglo no es destacable en esta medida. Tampoco lo es la forma en que López Obrador pretende gobernar, como ilustró la decisión sobre el aeropuerto de la ciudad de México y su consulta múltiple que no incorpora costos y consecuencias.

A los políticos les encanta emplear el término “governabilidad” para referirse a la capacidad de hacer lo que les da la gana. López Obrador no tiene ese problema y lo ha demostrado de manera cabal. El problema para él es que tiene que arrojar resultados: no es suficiente dismantelar programas existentes o tener una mayoría abrumadora en el poder legislativo. Si no logra la prosperidad del país, su enorme poder resultará intrascendente. La historia enseña que recrear los mismos vicios, programas y estrategias que no funcionaron en el pasado tampoco funcionará ahora. El país y el mundo han cambiado, lo que obliga a buscar nuevas formas de acceso a las oportunidades para toda la población.

Si quiere acabar bien, el gobierno tiene que crear condiciones para la



prosperidad de la población y, para eso, debe no sólo cambiar la estructura del gobierno, sino construir medios de acceso para los que siempre han estado excluidos. No basta ser poderoso: para salir del hoyo es imperativo crear un nuevo sistema de gobierno institucionalizado y con criterios explícitos de inclusión social.

La educación como eje del gobierno

“Los próximos cinco años serán clave en las decisiones que tomemos para mover a México hacia una economía del conocimiento,” afirman José Antonio Fernández y Salvador Alva en su reciente libro *Un México Posible*³⁰. La afirmación parecería de Perogrullo, pero choca con el entorno imperante en que perviven las dos narrativas descritas antes en este texto: los avances logrados frente a los efectos no deseados (ni deseables) de la estrategia económica seguida en las últimas décadas. Muchos de esos efectos indeseables son más producto del cambio tecnológico que arrastra al mundo, pero en México hemos sido especialmente refractarios a la urgencia de desarrollar el capital humano que permita enfrentar el futuro con éxito de manera tal que toda la población se beneficie o, al menos, que tenga la misma oportunidad de lograrlo. La concentración en el pasado es lógica y

razonable, pero impide actuar frente a los retos del presente y del futuro, que en nada se parecen a los de antes.

Para ser exitoso, el país tiene que transformar su sistema educativo a fin de incorporarse en pleno a la economía del conocimiento, que es donde se encuentra, cada vez más, la creación de valor y, por lo tanto, de riqueza y empleos. Sin ese enfoque, el país quedará atrapado en el pasado y en la pobreza. Las reformas de las últimas décadas han creado oportunidades, pero éstas sólo se pueden asir en la medida en que toda la población se encuentre en condiciones de hacerlas suyas. De la misma manera, el tiempo apremia, pues otras naciones, con las que competimos de manera inexorable, han llegado mucho más lejos y más rápido, lo que implica que la medida del avance tiene que ser tanto en términos de movilidad social como de velocidad.

El mundo cambia, y lo hace de manera acelerada, y en México seguimos discutiendo si la modestísima reforma educativa del sexenio pasado debe ser avanzada o desmantelada. Muchas naciones, sobre todo desarrolladas, se están enquistando y orientando por el espejo retrovisor, pero las naciones que realmente nos deberían importar –como el sudeste asiático, India y China– van corriendo para intentar ocupar los espacios que abandonan los países ricos.

En Corea y Tailandia el debate educativo es sobre cómo ir más rápido que sus competidores para poder agregar un mayor valor, no cómo proteger el statu quo. Los niños de hace cincuenta años competían por los empleos y las oportunidades con sus pares de escuela; hoy, un niño que cursa primaria en Dos Bocas, Tabasco, competirá con egresados de escuelas en Mumbai, Lagos o Helsinki. El espacio de competencia es el mundo y la clave es el consumidor, no el productor, lo que evidencia lo absurda –y a-histórica– de la noción de retornar a un pasado aparentemente certero.

Cuando la tecnología cambia a la velocidad de la luz y la población está tan informada como el más consolidado de los gobernantes, las soluciones tienen que ser descentralizadas, es decir, deben conferirle el mayor peso de las decisiones a ciudadanos íntegramente formados con las habilidades necesarias para adaptarse de manera constante y sistemática. Es por eso que la educación contemplada como medio de movilidad social es tan trascendente:

porque antepone el futuro al pasado. Con la velocidad del cambio que caracteriza al mundo, si López Obrador no coloca a la educación en el centro de su proyecto –una educación para la movilidad social en la era digital– habrá perdido la carrera, aunque avance en otros frentes. La apuesta debe ser por un sistema educativo radicalmente distinto al existente y por un sistema político abierto porque ningún gobernante, ni el presidente más sabio y consumado, tiene la capacidad, o la posibilidad, de entender, por sí mismo, la enorme complejidad que caracteriza al mundo y que, por ello, requiere de la participación activa e informada del conjunto de la población a través de medios democráticos bien establecidos y consolidados. En lugar de centralizar, es imperativo apostar por habilidades para un mundo cambiante donde la única constante es la intensa y creciente competencia.

Como decía al inicio de este capítulo, todos los presidentes se sienten destinados a cambiar al mundo; sin embargo, los que realmente han incidido en el cambio han sido quienes comprendieron su momento histórico. Hoy, sólo una descentralización, pero real, de las decisiones podría cambiar la dirección del país y esto implica, en la práctica, “empoderar” a la población con las capacidades necesarias para poder competir en el mundo del siglo XXI. Es decir, reconocer que no hay varita mágica que permita enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza, que son reales y lacerantes. Más bien el énfasis debe colocarse en una estrategia de capital humano que otorgue a las personas en lo individual la capacidad de decidir sobre su propio futuro.

Centralizar el poder y el control suena atractivo, pero sólo si estuviésemos en Moscú en 1923. La realidad de hoy, que nadie puede evitar por más que quiera, es que sólo las personas en lo individual pueden enfrentar sus problemas. Obviamente, el gobierno debe crear condiciones para que eso suceda y su instrumento primordial es la educación pública. Pero la responsabilidad de hacer recae en el individuo.

México claramente ha fallado en proveerle a cada ciudadano la oportunidad para ser exitoso. Centralizar y controlar no son objetivos idóneos para el siglo XXI, pues no hacen sino posponer la solución al problema de pobreza y, de hecho, la hace todavía más difícil. La salida, guste o no, es una educación del primer mundo que le confiera, a cada ciudadano, capacidades efectivas para resolver sus problemas.



López Obrador el estadista

Yo siempre pienso igual, pero actúo según las circunstancias.

Andrés Manuel López Obrador

El electorado mexicano le quitó la máscara a la narrativa dominante y al establishment y eligió al candidato que prometía cambiar los vectores de la política y la economía del país. Desde la elección, pero particularmente desde el 1ero de septiembre en que el Congreso entró en funciones, los contingentes morenistas y sus aliados se han comportado más como una fuerza de choque que quiere alterar el orden establecido sin que medien procedimientos formales o negociaciones, que como un grupo parlamentario institucional. La lógica detrás de este modo de proceder responde a la concepción de que llegaron al poder independientemente de las elecciones: en lugar de haber ganado, se les reconoció su triunfo. Es decir, hay un enorme ánimo revanchista, un encono soterrado en muchos de los actores clave de la coalición de Morena. La gran pregunta para el futuro es si López Obrador secundará esta concepción o si asumirá la presidencia como un estadista responsable ante la totalidad del electorado.

El contraste entre los dos escenarios es evidentemente radical. En el primer caso estaríamos hablando de un gobierno que viene no sólo a gobernar a su modo, sino a cambiar el orden establecido y las instituciones que lo sostienen de una manera integral y drástica, incluso violenta. Es decir, la vieja idea revolucionaria que procura el fin de un régimen y el comienzo de otro sin que medie un proceso institucional. De manera alternativa, López Obrador podría apegarse a todos los reglamentos institucionales para dar cabida a su agenda de cambio sumando al resto de la población, como ocurrió en la España pos-Franco. Un camino así tiene la virtud de hacer más permanentes los cambios a los que se llegue.

España ilustra el contraste entre estos dos modos de proceder. Al momento en que muere Francisco Franco, el pueblo español quería un nuevo régimen. Para los políticos, la interrogante era cómo dar ese paso: una posibilidad era romper con el régimen franquista, entrando en un entorno de absoluta

“La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.”

incertidumbre; la alternativa era aceptar el régimen institucional vigente, así fuese detestado por la mayoría de las fuerzas y partidos políticos, mientras se construía un nuevo andamiaje legal e institucional. En este sentido, los pactos de La Moncloa no acordaron “el qué” sino “el cómo”.

El tema en la agenda en aquel momento era relativo a precios y salarios, asuntos cruciales, pero de menor trascendencia política. La trascendencia de aquella reunión en particular tuvo que ver precisamente con lo que en México no hemos logrado: acuerdos de procedimiento.

Más allá de los temas específicos que se acordaron en aquel día en 1977 (muchos económicos), lo trascendente fue, primero, el hecho de que ahí estaban presentes todas las fuerzas políticas y económicas relevantes, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, los empresarios y los sindicatos. Luego de décadas de exclusión, la participación de todas esas fuerzas, comenzando por figuras icónicas venidas del exilio como Dolores Ibárruri “La Pasionaria” y Santiago Carrillo, cambió el contexto nacional. Su presencia hablaba por sí misma. Segundo, el primer ministro Adolfo Suárez propuso que, a través de la adopción de los asuntos del día, se aceptara de facto la legalidad franquista mientras se redactaba y adoptaba una nueva Constitución. Es decir, se acordó el procedimiento por medio del cual la España heredera del franquismo transitaría hacia una democracia plena. Nadie acordó el contenido de la nueva Constitución ni la forma en que se administrarían las empresas del Estado o la forma de concesionar los medios. Esos asuntos serían decisión de un futuro gobierno. Los acuerdos fueron sobre cómo se decidiría y no sobre qué se decidiría. Esa fue la clave de su éxito.

De manera similar, López Obrador tiene que definir si va por el camino institucional como hizo Adolfo Suárez, lo que lo elevó al nivel de un estadista trascendental, o por el camino de la imposición radical, clásica de un proyecto radical o revolucionario.

No me cabe duda de que López Obrador muy pronto se encontrará, como he argumentado y propuesto en este texto, con que muchos de sus planteamientos son inviables o extraordinariamente destructivos y, por lo tanto, contraproducentes respecto a su propia visión para el futuro del país. Su decisión respecto al aeropuerto de la ciudad de México sirve de ventana para observar los potenciales costos de realizar acciones que tienen más ángulos relevantes de los que podría parecer a primera vista. En este caso, el aeropuerto tiene no sólo unos cuantos contratistas de por medio –para los cuales López Obrador aseguró que habría compensación– sino miles de tenedores de bonos en los mercados financieros internacionales, proveedores nacionales y extranjeros y toda clase de actores clave para el proyecto. Al cerrar la puerta, López Obrador envió la señal de que nunca se apegará a las reglas existentes y que, por lo tanto, ninguna inversión goza de certidumbre. El costo inmediato se pudo ver en acciones por parte de las calificadoras de crédito y el tipo de cambio, pero el costo potencialmente incontenible vendrá después: cuando los inversionistas potenciales incorporen en su proceso de decisión sobre si invertir un cálculo respecto al riesgo de perder su inversión por la forma de proceder del gobierno. En contraste con contratistas y constructores, los empresarios e inversionistas tienen, por necesidad, que ver un horizonte de más largo plazo.

El punto de todo esto es que López Obrador tiene una decisión fundamental que tomar respecto a la forma en que actuará como presidente: será un activista social o un estadista. Si es lo primero, la decisión sobre el aeropuerto ya marca una pauta; si es lo segundo, todavía es tiempo de establecer un nuevo patrón de comportamiento, como ha ocurrido en instancias como la de la Conago. Me parece claro que, para él, un cambio en este sentido sería sumamente difícil por su profunda y arraigada convicción de que todo lo realizado a partir de los ochenta fue errado, y porque es un factor importante para las bases que lo han apoyado frente a viento y marea, las cuales por eso frecuentemente corean que “es un honor estar con López Obrador”. También me queda claro que le es mucho más importante lograr sus objetivos que apeгarse a dogmas contraproducentes.

Quizá es en este contexto que Denis Jeambar escribió que “la traición es la expresión política de la flexibilidad, la adaptabilidad, el antidogmatismo. Su objetivo es mantener los cimientos de la sociedad, en tanto el de la cobardía criminal es disgregarlos”³¹. Avanzar hacia el logro de sus objetivos es, me parece, mucho más importante que empeñarse en preservar ideas y obsesiones suyas y, sobre todo, de su base. Y, en ese sentido, lo relevante no es traicionarse sino encontrar una mejor, y más perdurable, forma de lograr su visión.

México necesita un cambio profundo y esa es la razón, sin la menor duda, por la cual López Obrador logró un triunfo avasallador. Más de la mitad del electorado decidió que, para progresar, el país tiene que cambiar. Sin embargo, la naturaleza del cambio importa y será determinante del devenir de su gobierno y de México.

El país está atorado por dos razones: una, porque hay demasiados intereses comprometidos con el statu quo y han demostrado tener el poder suficiente para impedir que sean afectados. Esos intereses –en los sindicatos, empresarios y políticos– han paralizado al país y le han impedido a la mayoría de la población prosperar, razón por la cual ha avanzado tanto la desigualdad. Si López Obrador opta por enfrenar a los sindicatos de la educación que han destruido la movilidad social; elimina la protección de que gozan innumerables empresas y que yace en el corazón del paupérrimo crecimiento de la productividad; y deja de preservar los intereses políticos y burocráticos, así como sociales, que mantienen paralizados a estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el país cambiaría de manera radical. Otra manera de ver el mismo problema lo explica Luis de la Calle como estructuras políticas y sociales anquilosadas que favorecen una “economía de la extorsión,” donde autoridades, sindicatos, monopolios, burocracias y criminales extorsionan a los ciudadanos, empresarios, alumnos, propietarios, y comerciantes, impidiendo que crezcan las empresas y se desarrolle el país. Si el presidente de verdad quiere detonar un elevado crecimiento y darle oportunidades a los mexicanos más desfavorecidos, su estrategia debería ser la de romper con esas prácticas impunes. Nadie como López Obrador para lograrlo tanto por el mandato democrático con que llegó a la presidencia como por sus propias habilidades políticas.

La otra razón por la cual el país está atorado es que en los ochenta se liberalizó la actividad económica, pero el gobierno no se adaptó a las circunstancias y exigencias de una economía abierta y en competencia, ni creó mecanismos para apoyar y acelerar el ajuste y adaptación del país en general. Es decir, la liberalización constituyó un cambio radical en la forma de funcionar de la economía porque obligó a las empresas a elevar sus niveles de productividad para competir con importaciones y con nuevas tecnologías. Ese cambio de señales fue brutal y requería de mecanismos de ajuste que nunca se dieron. México podría aprender mucho del ejemplo canadiense en este ámbito.

En México el gobierno quedó como siempre antes, tanto en su forma de funcionar como en su distancia respecto al acontecer cotidiano, y dejó que cada persona y empresa enfrentara el reto a su manera. Algunas empresas y personas se adecuaron con celeridad y son ahora el motor de crecimiento de la economía, pero la mayoría, en términos absolutos, sigue funcionando como si nada hubiera pasado: muchas empresas desaparecieron, otras viven en condición por demás precaria y la mayoría está condenada a sobrevivir, sin posibilidad de desarrollarse, obtener crédito o incorporarse en la economía exitosa, con lo que eso implica para el crecimiento económico, los salarios, la productividad y, en general, el progreso.

El país requiere enfrentar estos males: la agenda es muy obvia y clara. El presidente López Obrador tiene en sus manos la posibilidad de contribuir a resolver los problemas que se derivan de estas circunstancias o dedicarse a minar los avances que sí han tenido lugar. Desde luego, esto no es de soluciones rápidas, pues entraña romper con impedimentos acendrados y cacicazgos en una gran diversidad de ámbitos y regiones, pero es la agenda que México necesita porque son las causas del atraso y la desigualdad en el país en general.

* * * *

El éxito o fracaso de López Obrador va a depender de su capacidad para mantener viva “la calle” y, al mismo tiempo, detonar y preservar la confianza de la actividad productiva. Un equilibrio sumamente difícil de lograr porque implica acciones en dos planos muy distintos: el primero, mantener el apoyo y la legitimidad emanada de la población en general, lo que implica un discurso en ocasiones agresivo y siempre confrontacional, así como acciones que con frecuencia irían contra el objetivo de impulsar la actividad económica; por otro lado, si la economía no funciona y crece a la velocidad que es políticamente necesaria, se eleva el riesgo de perder el apoyo de las bases. Y para que crezca la economía se requiere atraer la inversión, preservar la confianza de los emprendedores, ahorradores y empresarios y, sobre todo, nunca perder de vista que, en un mundo globalizado, estos actores siempre tienen otras opciones. Dicho de otra manera, el gobierno mexicano estará permanentemente compitiendo con todos los gobiernos del mundo por la misma inversión.

Inicié este capítulo diciendo que los votantes quitaron la máscara a la narrativa dominante y dijeron: ¡¡¡basta!!! Es tiempo de que los integrantes de Morena se quiten sus propias máscaras para ver al mundo como es y no como lo han imaginado. Esto no para sacrificar su agenda, sino para hacerla más posible, más viable. Es la gran oportunidad de liderazgo, eso en que López Obrador ha demostrado ser sin igual.

¿Será estadista o activista?

Notas

- 1 Máscaras Mexicanas, El Laberinto de la soledad, pl, FCE, México, 1981
- 2 Las máscaras de la hipocresía, p139, en Bartra, Roger, Anatomía del mexicano, De bolsillo, mex 2015
- 3 País de mentiras. La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura Mexicana. México, Oceano, 1a. ed. 2008, p 299
- 4 Exjefe de la guerrilla salvadoreña habla sobre el proceso de paz http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12730546.html
- 5 Levy, Santiago, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México
- 6 State Building in Latin America, Cambridge, 2015
- 7 De la Calle, Luis (2019). Economía de la extorsión: ideas para aprovechar la revolución digital, https://gallery.mailchimp.com/f56d9574cd-2219cac1450b898/files/f8bb98f0-444a-45a8-9233-15bf3cca33ae/30._Economia_de_la_extorsio_n._ideas_para_aprovecha_la_revoluci%C3%B3n_digital.02.pdf
- 8 Op. Cit.
- 9 *A las Puertas de AMLO*, Nexos, Junio 2018
- 10 Radiografía de un partido. Morena y el carisma de López Obrador, Junio 25, 2018 <https://cuadrivio.net/radiografia-de-un-partido-morena-y-el-carisma-de-lopez-obrador/>
- 11 Escamilla y Medina, 2008: 270. Escamilla, Alberto y Luis Medina, (2008), "Liderazgos políticos durante el proceso de democratización en México: el caso de Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador", en Mario Bassols, Alberto Escamilla y Luis Reyes (coordinadores), Liderazgo político , México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa , pp. 141-174.

- 12 "El PRD en su laberinto", en Milenio , México, 6 de marzo.
- 13 Mariano Grondona, "El kirchnerismo ha entrado en su fase jacobina," La Nacion, 18 de Diciembre, 2005, <https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-kirchnerismo-ha-entrado-en-su-fase-jacobina-nid765800>.
- 14 <http://www.andaluciasolidaria.org/que-hacemos/inclusion-social>
- 15 La marginación y exclusión como posibles factores socioeconómicos de la violencia urbana: el caso de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, ISSN 2448-7147versión impresa ISSN 1405-7425, Pap. poblac vol.23 no.91 Toluca ene./mar. 2017 <http://dx.doi.org/10.22185/24487147.201791.008>; Discriminación, pobreza y vulnerabilidad: los entresijos de la desigualdad social en México; Región y sociedad vol.30 no.71 Hermosillo ene./abr. 2018 <http://dx.doi.org/10.22198/rys.2018.71.a377>; Millones inactivos por exclusión social, <https://www.forbes.com.mx/millones-inactivos-por-exclusion-social/>
- 16 Policias, ¿de cuarta? - La Razón Agosto 26, 2011
- 17 Leonardo Valero, "El secreto está en la clase media," Reforma, 6 de Septiembre, 2005.
- 18 Eric Morath, "Wages Rise at Fastest Rate in Nearly a Decade as Hiring Jumps," *Wall Street Journal*, Noviembre 3, 2018, p1
- 19 Michael Shelden, "'They didn't elect me for my looks': Michael Shelden Reviews The Napoleon of New York by H. Paul Jeffers," *Telegraph*, 15 de Junio, 2002, <https://www.telegraph.co.uk/culture/4727996/They-didnt-elect-me-for-my-looks.html>.
- 20 Political Party and Decay
- 21 Op. Cit., 272.
- 22 Op. Cit., 294.
- 23 https://elpais.com/elpais/2011/07/11/3500_millones/1310338366_131033.html
- 24 Paso a Paso, El Financiero, octubre 30, 2018
- 25 *La política del Desarrollo Mexicano*, Siglo XXI, México 1991
- 26 The Age of Diminishing Expectations (1994)
- 27 The Rule of Law, Penguin, London 2010

- 28 Institutions, Institutional Change and Economic Performance Cambridge: Cambridge University Press, 1990
- 29 ¿Qué hacemos con los pobres? La reiterada querrela por la nación, México DF, Aguilar, 1988
- 30 Editorial Debate, México 2018
- 31 Jeambar, Denis y Roucaute, Yves, Elogio de la Traición, Gedisa, Madrid, 2010

One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20004-3027

 www.wilsoncenter.org/mexico

 mexico@wilsoncenter.org

 facebook.com/MexicoInstitute

 [@MexicoInstitute](https://twitter.com/MexicoInstitute)

 202.691.4325

